

014.34
R15h

1640
45651

IV

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
PROVINCIA DE SALTA

**HACIA LA ELABORACIÓN DE CONCEPTOS QUE PERMITAN
COMBATIR LA VIOLENCIA DENTRO DEL MUNDO SOCIAL,
INSTITUCIONAL Y EN LA HISTORIA, FRENTE A LOS MALES
DE LA POBREZA, EL AUTORITARISMO Y LAS VIOLACIONES
DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Resumen del Informe



Lic. NORA REGUEIRA
FEBRERO 2007

SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO FEDERAL
DE INVERSIONES:
ING. JUAN JOSE CIACERA

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA:
Dr. JUAN CARLOS ROMERO

ÍNDICE GENERAL

LA VIOLENCIA / INTRODUCCIÓN.....	Pag.	1
LA VIOLENCIA SOCIAL EN AMÉRICA LATINA.....	Pag.	19
EL CRECIMIENTO DE LA VIOLENCIA URBANA EN LA ARGENTINA EN LA ÚLTIMA DÉCADA.....	Pag.	41
SÍNTESIS DE LA REPRESIÓN INSTITUCIONAL EN LA R. A.....	Pag.	94
LA VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS / CONCLUSIONES.....	Pag.	109

LA VIOLENCIA - INTRODUCCIÓN

En primer lugar se verá que, más que un concepto, violencia es un término utilizado en la vida cotidiana para designar comportamientos, situaciones, efectos de comportamientos y sensaciones que se viven, y en ese sentido es una noción plena de significaciones variables. En otros términos, la violencia, aun cuando se conceptualice, es antes que nada una palabra frente a la cual no podemos permanecer neutrales, ya que nos implica en significados tanto racional como emocionalmente.

Así, la palabra “violencia” expresa diferentes acciones, en diferentes espacios, con diferentes actores, y adquiere nuevas significaciones en distintos tiempos históricos. Como palabra forma parte de una pluralidad de discursos cotidianos y disciplinares, aparece en diversos contextos explicativos y con diversas interpretaciones en el tiempo. Esta es la razón de por qué cuando se trata de conceptualizar la violencia (hacerla un término científico), ésta se hace ambigua y elusiva, ya que lo que se describe continúa siendo vago y, por ende, sujeto a múltiples interpretaciones. De esta constatación se deriva que hay que tomar en cuenta la variedad de interpretaciones que la cualifican, significándola, en momentos y espacios determinados, ya que forman parte de su propio sentido y dan cuenta de su dinámica.

En esta investigación y con base a la cual surgen estas reflexiones, se ha constatado que cuando se “habla” de violencia en Venezuela usualmente se significan acciones o comportamientos encuadrables en la denominada violencia criminal o delictiva, particularmente aquella que se ejerce contra las personas. El miedo y la inseguridad frente al crimen han tomado por asalto al ciudadano común, no sólo por percibir que ha aumentado el número de delitos que implican violencia en su cometimiento, sino porque en

éstos se ha ido intensificando la utilización de acciones violentas. En otras palabras, se han ido haciendo cada vez más violentos.

Esta matriz emocional presente en cualquier alusión a la violencia es parte inseparable de su significación y tiene su origen en sus efectos, o desde otro punto de vista, en la experiencia vivida de violencia. En ese sentido la violencia se convierte en una amenaza.

Por lo tanto, no es de extrañar que estudiosos de la hermenéutica de los discursos hayan constatado que la palabra “violencia” es utilizada usualmente en discursos polémicos que quieren influir en la opinión del otro, buscando demonizar acciones, para distinguir el bien del mal y en ese sentido, con una intención moral o política de descalificación o calificación, que en muchas oportunidades permite la justificación de acciones violentas de contraviolencia⁶. Este es uno de los mecanismos de significación que fomenta el establecimiento de los círculos viciosos de violencia. A este mecanismo responden, por ejemplo, las estrategias de ley y orden contra la delincuencia, que en Venezuela se han manifestado y manifiestan a través de redadas o de operativos policiales.

De allí también que “el peligro inherente al proceso de extensión neológica del término ‘violencia’ es que acabe proporcionando a quienes lo emplean, en su sentido amplio, un número creciente de situaciones, en las cuales pueden alegar el comportamiento violento de los demás para justificar su respuesta violenta”. Si se amplía más y más el concepto para referirse a una serie de acciones u omisiones, éste se hace más vago pero justifica respuestas violentas ante un número cada vez más grande de comportamientos, especialmente por parte del Estado, en cuanto monopolizador del uso legítimo de la fuerza, ampliando de esta forma los circuitos de *violencia*. Recordar esta potencialidad del concepto es muy importante en investigaciones que estudian la violencia en un ámbito delimitado conceptualmente por comportamientos definidos o tipificados, basándose en

razones de seguridad del Estado o en el sistema jurídico penal. No hay que olvidar las relaciones y superposiciones que siempre se presentan en su concepción entre lo político, lo moral y lo jurídico. Así, por ejemplo, lo primero a tomar en cuenta a fin de comprender la violencia criminal son esos procesos de reacción o contra-reacción originados en instituciones estatales, aquellas que según Max Weber tienen legítimamente el monopolio de la violencia física. De esta manera, las acciones de los organismos policiales y del propio sistema de administración de justicia forman parte indisociable de la historia de la violencia criminal o delictiva en nuestras sociedades.

Por lo tanto, la violencia reflexionada a partir de comportamientos considerados criminales no puede dejar aparte los procesos de criminalización que también los crean, ya que las acciones policiales, las decisiones judiciales y la propia cárcel van definiendo y delineando el tipo de violencia criminal que hoy vivimos y la inseguridad social que la acompaña.

Si tomamos en cuenta los resultados de una investigación que se realizó a mediados de los años ochenta sobre los operativos policiales (estrategias de ley y orden) que durante por lo menos dos décadas (los setenta y ochenta) se llevaron a cabo en Argentina, es muy factible que estas acciones de contra-violencia fueron delineando, asimismo, la significación que la violencia tiene actualmente en nuestro país, y en ese sentido muestran la dinámica a partir de la cual se establecieron algunos círculos de violencia. Aun más, hoy en día no queda duda de que el auge de la criminalidad en Argentina en estos últimos años, y la percepción de inseguridad que ello provoca, no pueden entenderse sin los operativos policiales que durante toda la democracia actuaron en su construcción, al crear los circuitos de violencia. En sociedades como la nuestra, donde es todavía fuerte una herencia autoritaria en el Estado, es éste el perfil institucional predominante en los organismos policiales, y con ello la violencia que desarrollan en sus prácticas.

El segundo aspecto a tomar en cuenta es que la violencia es vivida, significada y comprendida a través de diferentes contextos explicativos o comprensivos.

Siendo antes que nada una palabra, ella es entendida en su propio discurrir a través de las percepciones y significaciones atribuidas por quienes la viven. Pero siendo asimismo un ámbito de conocimiento científico, son varias las disciplinas que la estudian e interpretan.

La violencia, además de ser una palabra cotidiana, se encuentra presente en discursos teológicos, antropológicos, sociológicos, filosóficos, éticos, psicológicos, psiquiátricos, médicos, legales, políticos e históricos. En cada una de estas disciplinas la violencia se encuentra incorporada en sistemas explicativos e interpretativos de “saber”, donde cada uno frente al otro se considera el “verdadero”, y en consecuencia ninguno es capaz de erigirse en la “verdad”. Lo que esto indica es que la violencia es un fenómeno muy complejo (un ámbito borroso de conocimiento) que para su estudio requiere comprensión y resignificación a través de la incorporación de enfoques transdisciplinarios que rompan los límites disciplinarios establecidos.

En lo que sí parecen coincidir todas las significaciones de la violencia (cotidiana o disciplinar) es que la misma (esa “fuerza” o “energía” contra un otro) emerge en la interacción o interrelación humana, sea del hombre consigo mismo, con otros hombres y/o con su entorno. Puede decirse que el homo sapiens se encuentra biológicamente capacitado para provocar la violencia, y en ese sentido ésta es un fenómeno universal. Pero sin embargo, la violencia es una forma del vivir humano, y todo vivir humano es un fenómeno relacional, donde el ser humano no es sólo una mera corporalidad ni un modo de vivir, sino una dinámica que involucra cierta corporalidad y cierto modo de vivir donde ambos se modulan mutuamente.

En ese sentido no son aspectos biológicos los que determinan la violencia, aunque seamos biológicamente capaces de vivir y cultivar la violencia, ya que es en el espacio relacional donde ésta emerge, se particulariza, se asienta culturalmente y se nos hace evidente en sus consecuencias. Cuando se habla de espacio relacional nos estamos refiriendo al conformado por las interacciones, las interferencias y la actividad fenoménica (praxis) de cuatro polos sistémicos complementarios concurrentes y antagónicos: el sistema genético, el cerebro (epicentro fenotípico), el sistema sociocultural (sistema fenoménico generador) y el ecosistema. Por lo tanto, es en este espacio donde se puede comprender la dinámica de la violencia, al poder captar cómo sus propios efectos pasan a consolidarse cultural y estructuralmente, repotenciando los circuitos de violencia.

Y es asimismo a partir de la comprensión de este entrelazamiento que podemos creativamente establecer propuestas para su desactivación.

Si asumimos que la violencia es creada en interacción humana, decimos también que cobra realidad y se reproduce en la intersubjetividad social. Es decir, que la misma se asienta en la existencia y producción de consensos sociales intersubjetivos, tanto comunicacionales como interpretativos, que se materializan en representaciones y acciones colectivas, constitutivas de ese espacio relacional. En otras palabras, que en la producción de *violencia* es fundamental el sistema fenoménico generador (sociocultural) y por lo tanto ella expresa características de la sociedad en donde emerge. Porque la violencia es y se realiza tanto como un proceso social subjetivo (representaciones, significaciones sociales) y objetivo (comportamientos, acciones), manifiesto (“hechos”) y latente (cultura y estructura), donde la valoración emocional de sus efectos (visibles/invisibles) pasa a formar parte del mismo proceso. De allí también el valor heurístico de las investigaciones, para entender la sociedad en la cual vivimos. Desde esta perspectiva también podemos considerar la

violencia como un acto comunicativo (pues “nos dice algo”) que paradójicamente es expresión de los límites de “la aceptación del otro junto a uno”. Es decir, pone en evidencia, al mismo tiempo, la interrelación humana y el obstáculo o negación de la misma. De allí que esta negación de un “otro” pueda surgir desde lo que podemos celebrar como más humano de la cultura, la “comunidad”, la “etnicidad”, la “vecindad”, y a su vez constituirse en bandera para el genocidio. Es posible aceptar, por lo tanto, que la violencia emerge, usualmente, en espacios relacionales donde predominan las interacciones dinámicas de poder, discriminatorias y de desigualdad y exclusión social, consensualmente no siempre significadas y representadas como tales, es decir, sin su carga valorativa de negatividad y rechazo. A este respecto se tendría que tomar en cuenta que “Para que los miembros de una cultura reflexionen sobre sus conductas violentas se requiere que haya un conflicto en el emocionar, que genere conductas contradictorias lo suficientemente intensas para que éstos suelten su natural certidumbre sobre lo natural de sus acciones”.

La violencia, al producirse, mantenerse y evidenciarse en el espacio relacional humano, es asimismo un fenómeno histórico y por ende mutable en su significado social y en su manifestación (subjetiva-objetiva). Cambia de rostro en diferentes épocas, no sólo porque responde a la dinámica relacional presente en su particular espacio de producción y manifestación, sino porque, a su vez, es valorada, interpretada y explicada social y científicamente de manera diferente. En este sentido se subraya la cualidad dinámica y procesal de su conformación, y con ello las múltiples y mutables relaciones a las que responde. En otras palabras, y desde perspectivas más tradicionales y disciplinares, subraya la variabilidad de los factores que la originan, fomentan y facilitan, aun cuando en sí misma pueda permanecer en latencia o como potencia en un espacio relacional determinado.

Hoy se habla de un nuevo paradigma de la violencia para cualificar las nuevas significaciones y percepciones que existen sobre la misma, su explicación, aceptación y rechazo. Así, por ejemplo, si en el pasado la violencia provocada por la actuación guerrillera era justificada por muchos en América Latina, hoy en día es deslegitimada y rechazada por la mayoría. Las mismas ciencias sociales modifican de un período a otro sus interpretaciones. Así, la violencia es hoy día aprehendida como proceso al mismo tiempo globalizado (relativo a fenómenos planetarios) y localizado; general y molecular, dando cuenta de la nueva situación histórica y política en la que vivimos.

Explicada desde esta perspectiva, una de las violencias más características de este tiempo es la llamada violencia identitaria, que se manifiesta en todos los procesos de purificación étnica, sectaria o fundamentalista y en procesos xenófobos contra el extraño o extranjero.

Si en los sesenta y setenta muchas manifestaciones de violencia se interpretaban desde concepciones de crisis o conflicto social, hoy se explican como formando parte de las propias carencias del Estado. Así, todo parece señalar, por ejemplo, que gran parte de la violencia criminal que se manifiesta hoy en día en América Latina emerge en nuestras sociedades de las propias carencias del Estado, que en este ámbito de acción se caracteriza por una combinatoria entre un exceso de violencia represiva policial y carcelaria y por una incapacidad punitiva manifiesta en la impunidad. Se olvida que la violencia no se encuentra sólo presente en los extremos, sino instalada en la normalidad.

Para Wieviorka, la violencia contemporánea se caracteriza por ser la encrucijada entre lo social, lo político y lo cultural, donde ella expresa las transformaciones y las eventuales desestructuraciones que ocurren en esos frentes. Desde este punto de vista vuelve a subrayárenos el valor heurístico de los estudios sobre la violencia para interpretar las sociedades de nuestro tiempo.

Pero si la violencia se muestra e interpreta de manera cambiante, en su permanencia es igualmente expresión de los sedimentos presentes en los diversos espacios relacionales, y que desde la perspectiva del sistema sociocultural existente son originados en la propia historia de la estructura y cultura de esa sociedad.

Así, paradójicamente, la violencia es a la vez cambiante y permanente en su potencialidad y expresión, por lo cual para comprenderla hay que aprehender su dinámica entre estos dos momentos y en los contextos de relaciones de tensión social donde emerge.

Si en un espacio relacional predominan y se aceptan de manera “natural” (no se perciben como negativas o se perciben connaturales, imposibles de resolver) acciones o comportamientos donde se niega o silencia al “otro” en la relación, se tiende a crear un sustrato cultural favorable a la manifestación de la violencia. Este es el caso de las relaciones de poder, discriminatorias, de desigualdad y de exclusión social, favorecidas en dinámicas propias de la estructura social, y que se constituyen a través de su permanencia en el tiempo, en sustrato cultural favorable a su manifestación.

En ese sentido se podría afirmar, por lo tanto, que la violencia es la cultura en donde el emocionar que funda la negación del otro constituye la emoción fundamental. La violencia es un modo de convivir, un estilo relacional que surge y se estabiliza en una red de conversaciones (“hablas”), que hace posible y conserva el emocionar que lo constituye, y en la que las conductas violentas se viven como naturales.

En ese mismo sentido, pero ahora desde una perspectiva más sociológica, podemos considerar que la violencia pone en evidencia una matriz cultural más amplia que la produce, y que una vez producida la vuelve a sedimentar en ese inconsciente colectivo. En esta dirección, Tulio Hernández considera que en nuestra historia político-cultural se ha ido conformando en el inconsciente colectivo “una matriz cultural potencialmente favorable al

recurso de la violencia como conducta social y esa matriz se ancla en la memoria de un atávico resentimiento étnico y de clase y de un largo proceso de introyección y sumisión al autoritarismo que convive contradictoriamente con un sentimiento opuesto, la necesidad de condenarlo y destruirlo que periódicamente hace eclosión”.

Siendo la violencia una palabra o noción, es necesario, para comprenderla en su dinámica de expansión, tomar en cuenta las significaciones que el sentido común le atribuye en los diferentes contextos discursivos. Es éste el que le otorga el sentido con su carga valorativa emocional (negativa-positiva, legítima-ilegítima) a partir del cual se vive socialmente, al formar parte del espacio relacional donde emerge. En otras palabras, la manera como se “habla” (palabras y acciones) la violencia en determinados contextos nos permite comprenderla, dado que “todo acto en el lenguaje trae a la mano el mundo que se crea con otros en el acto de convivencia que da origen a lo humano”.

Dicho de otro modo, y desde perspectivas complementarias, la violencia, como toda palabra vivida y significada, es el producto colectivamente acumulado de experiencias individuales en donde se han puesto a prueba las cosas poniéndose a prueba el sí mismo. No se define únicamente por lo concebido, sino también por su relación con una vivencia.

No es de extrañar, por lo tanto, que en las investigaciones empíricas (que toman como referencia la dimensión manifiesta de la violencia) que se han realizado en nuestro país se entienda usualmente por violencia “el uso o amenaza de uso de la fuerza física con la intención de afectar el patrimonio, lesionar o matar a otro o a uno mismo”. Es una concepción que entiende la violencia como generada en la “fuerza física” desplegada en acciones que por su intención y consecuencias son generalmente tipificadas como delictivas o criminales. Es por ello que los hechos a ser considerados violentos son: el homicidio, el asalto a mano armada, heridos o lesionados por armas, y el robo. En otras palabras, la

violencia de la cual se habla es la generada a través de estos comportamientos, a su vez tipificados penalmente como delitos y comúnmente cualificados como delitos violentos.

La escogencia de este ámbito generador de violencia a ser investigado también se justifica si tomamos en cuenta que el mismo acota aquella violencia que actualmente crea más angustia en América Latina y en particular en Venezuela.

Así, cuando se nos habla de violencia en Caracas, es en este tipo de violencia en la que pensamos.

Sin embargo, aun cuando podemos considerar que esta violencia tiene en su significación un ámbito que le es propio, no es posible obviar que cuando se habla de violencia criminal o delictiva estamos refiriéndonos a comportamientos que pertenecen a un ámbito definido por los dispositivos jurídicos penales. En ese sentido, son dos las consecuencias que tienen que tomarse en cuenta al investigar en este campo de lo “real social”. En primer lugar, que la violencia que se expresa en los comportamientos criminales o delictivos no puede entenderse o explicarse sin el otro tipo de violencia que siempre la acompaña y complementa en su definición y realización, a saber, la denominada violencia legitimada o institucional. En segundo término, que el dispositivo jurídico punitivo que define el campo específico de lo criminal tiene, asimismo, su propia historia que debemos considerar en las interpretaciones que se realicen.

Si la violencia es una palabra, ello significa que se encuentra constantemente en proceso, realizándose, significando y resignificando en la praxis social. Por lo tanto, científicos que estudian la violencia y pertenecen a diferentes disciplinas que confrontan entre sí sus “saberes”, sólo pueden superar sus propias limitaciones en diálogo “en el seno de otros saberes y de otras comunidades de saber con vista a la constitución de una phronesis, una sabiduría de vida, ahora más democrática por vía de ampliar las distribuciones de

competencias cognitivas y discursivas...”. Este nuevo saber transdisciplinario, resultado de este encuentro, permitirá comprender el proceso de creación y expansión de la *violencia* en cada situación social y con ello elaborar conjuntamente con quienes la viven propuestas y acciones de transformación de conflictos, y la desactivación de la misma. Esto significa que para precisar las significaciones de la violencia por ejemplo en Venezuela, es necesario interpretar o resignificar conjuntamente con quienes la viven las diferencias y particularidades de sus manifestaciones en los diferentes contextos sociales. De esta manera, en los “barrios de Caracas” se trataría, por ejemplo, de hacer evidentes a través del diálogo con esas comunidades las significaciones de la violencia que allí se manifiesta: inter- familiar, de los “malandros”, de las “bandas”, de las “mafias”, de la policía u otros entes de control social, de la propia comunidad (por ejemplo linchamientos), etc. Es cierto que la violencia presente en estas manifestaciones se entrelaza y potencia, pero sin embargo cada una de ellas tiene su especificidad significativa, particularmente en sus “historias” y en la matriz emocional presente y, por ende, en su valoración .

Si a lo anterior se agrega que la violencia siempre emerge en un espacio relacional como proceso de intercambios intersubjetivos obstruidos, suspendidos o negados, es en ese mismo espacio en donde existe la posibilidad de desactivarla.

Así, sólo con la participación y a través del diálogo de quienes actúan en los diferentes espacios relacionales donde emerge la violencia, pueden buscarse salidas a la misma, con medidas de cierre y resolución del proceso, al neutralizarlo y con ello evitar que se produzca la reciprocidad (más violencia) como norma de las relaciones sociales.

En el encuentro de las diferentes comunidades de saber, los científicos sociales pueden aportar en el diálogo la utilización reflexiva y crítica de categorías relacionales tales como discriminación, segregación, exclusión, desigualdad. Esto resultará productivo no sólo para

comprenderla sino para “desnaturalizar” “crear un conflicto en el emocionar”, es este tipo de relaciones que la estimulan y con ello procurar su propia resolución. No hay que olvidar que estas relaciones, por ser consideradas “naturales”, no son socialmente visibles o manifiestas (forman parte de lo estructural); pero tampoco puede olvidarse que desde su dinámica conflictiva estimulan o favorecen acciones violentas.

Cuando se subraya la cualidad histórica de la violencia se enfatiza el aspecto diacrónico y dinámico del proceso con el fin de captar la manera como se crean, entrelazan, desarrollan y fortalecen discursos, interpretaciones y acciones violentas en ciertos contextos y entre distintos contextos. Desde esta perspectiva, se realzan en la reflexión la conexión que se establece entre la dimensión manifiesta y más cambiante de la violencia (discursos, interpretaciones y acciones), y la latente y más permanente, a saber, lo estructural y cultural de una sociedad. Estas dimensiones se nutren entre sí, pudiéndose interpretar como las caras de un mismo proceso de la violencia, donde se articulan, sedimentan y cambian.

El enfoque histórico de la violencia permite, asimismo, otorgarle sentido y relevancia a sus efectos traumáticos visibles e invisibles (individuales, sociales y culturales) dentro de su proceso de permanencia y expansión: trauma / culpa / castigo / venganza.

Es igualmente desde la perspectiva histórica de la violencia como se puede pensar en la posibilidad de su transformación y desactivación, pero sin la mirada utópica de lo definitivo, al entenderla como una tarea permanente y comprometida que al irse realizando va configurando, a su vez, unas nuevas bases de convivencia social.

La significatividad que le hemos atribuido al espacio relacional (espacial y temporal) en la dinámica de creación, permanencia y potenciación histórica de la violencia permite ahora precisar algunas dimensiones siempre presentes y entrelazadas en la violencia, y que también han sido destacadas en lo fundamental por Johan Galtung. Así, en cualquier

espacio relacional donde se exprese la violencia se pueden distinguir: Una dimensión claramente manifiesta y visible conformada por comportamientos humanos verbal y físicamente significados como violentos o agresivos (“hechos de violencia”), por los efectos materiales (daños materiales) y humanos (muertos, heridos, violados, refugiados) de ese tipo de comportamientos.

Una dimensión sociocultural latente, reconocible como espacio psíquico, conformada por actitudes, suposiciones, cogniciones, emociones, representaciones, ideologías, mitos, símbolos que justifican/censuran, estimulan/controlan, aceptan/niegan y valoran negativa/positivamente la violencia en la interrelación humana. A éste se han incorporado los mitos de gloria y culpa de los “vencedores” y los traumas y culpas de los “perdedores”, como efecto de procesos de pasadas experiencias violentas.

Una dimensión estructural latente conformada por conflictos y contradicciones, la mayoría cementados y solidificados por estructuras sociales y sistemas culturales, significados o no como injustos en sus consecuencias relacionales.

La represión, opresión, explotación, segmentación, exclusión, discriminación, desigualdad son algunas de las relaciones que las dinámicas injustas de poder van creando y que tienden a manifestarse en violencia.

Cómo “atacar” a la violencia

Toda violencia no crea sino más violencia, con y por todas las consecuencias traumáticas y dolorosas que acarrea y en la que todos perdemos. Desde una perspectiva pragmática: “la violencia en general, y la guerra en particular, no es sólo un monumento al fracaso de la transformación del conflicto para evitar la violencia, sino también al fracaso de utilizar la energía del conflicto para propósitos más constructivos”. Por lo tanto, la tarea es desactivar

la violencia transformando el conflicto y utilizando su energía; en otras palabras, desactivarla en todos los ámbitos sociales y culturales transformando las relaciones de tensión que la estimulan.

Algunas sugerencias sobre posibles vías de acción en la desactivación de la violencia, fundamentadas en las principales conclusiones:

Nuestros presupuestos son: a) la violencia es un hecho social/cultural/individual complejo y b) en todo espacio relacional donde emerja la violencia existe una experiencia previa de algún tipo de violencia y por consiguiente lo que allí ocurre forma parte de un circuito de violencia estimulado por sus propios efectos.

Para desactivarla es necesario, en consecuencia, interrumpir este circuito, y ello es sólo posible estableciendo alianzas y logrando la participación de quienes la viven en cada contexto. Esto implica actuar desde un marco político democrático, ya que es el que permite “el deseo de una convivencia en fraternidad”, acostumbrándonos a vivir en disconformidad, en el reconocimiento de otro a través del diálogo.

La construcción de la paz es una tarea permanente, “el momento de empezar es siempre y el momento de acabar es nunca”, y requiere un compromiso de los involucrados en la búsqueda creativa de salidas a la misma.

La “solución” es, por lo tanto, compleja en cuanto a acciones comprometidas y permanentes, y debe dirigirse tanto a las acciones que la manifiestan como a los sustratos (cultural-estructural) que la hacen permanente. Así, por ejemplo, muchas veces la represión (contra-violencia) disminuye radicalmente la denominada violencia criminal (visible) pero crea, a su vez, mayor violencia cultural y estructural que en breve tiempo vuelve a manifestarse como violencia directa.

Es cierto que este enfoque nos lleva a tener que desarrollar de modo permanente una multiplicidad de acciones para desactivar la violencia, pero aceptamos con Galtung que ellas pueden estructurarse a través de tres tareas a ser desarrolladas conjuntamente, a saber: reconstruir, reconciliar y resolver. Aun cuando sus propuestas son pensadas para confrontaciones colectivas como las guerras, y otros tipos de la llamada violencia política, considero que pueden ser recomendadas y practicadas para cualquier tipo de violencia. En consecuencia, y dado que en Argentina la violencia significa fundamentalmente violencia criminal o delictiva, en esa dirección van las reflexiones y recomendaciones.

La reconstrucción se refiere a las acciones dirigidas a rehacer los efectos de la acción violenta en sus consecuencias humanas, materiales e institucionales. En ese sentido significa actuar conjuntamente para “construir” desde los mismos efectos de la violencia. Si reflexionamos positiva y asertivamente sobre este enfoque, podría considerarse que el mismo nos induce a aprovechar la oportunidad que nos ofrece la violencia, para transformar creativamente la situación y condiciones presentes, antes o después del (o de los) hecho (hechos) de violencia en cada espacio relacional.

Así, las acciones a desarrollar podrían dirigirse:

- En los espacios relacionales específicos donde han ocurrido los hechos de violencia y con la participación de la comunidad, a: - rehabilitar a las personas traumatizadas –incluidos el (o los) agresor (es) y su familia– tanto por las heridas como por su aflicción, ofreciendo y garantizando asistencia. “Si el trauma nos abruma, no sólo nos roerá las entrañas sino que estará al mando, dirigiendo tu vida, llevándote a interminables ciclos de venganza” reconstruir el diálogo desarrollando nuevos caminos de participación, y con el debate expandir, manteniendo abiertas, las opciones de desarrollo y transformación del grupo o la

comunidad; - reparación de los daños materiales producidos, reconstrucción de nuevos hábitat.

- Desde el Estado a la sociedad en general: Reestructurando la paz a través de la democracia, una democracia que:

- considere al hombre como centro de la economía, rompiendo las dinámicas de pobreza y exclusión;

- eleve los niveles de educación (no hay que olvidar que el hombre es sólo humano poniendo en práctica su capacidad de aprender) y de salud, contando con la participación de toda la sociedad;

- fortalezca las redes comunitarias locales;

- construya nuevas instituciones y/o transforme las existentes. Dado que nuestro enfoque es hacia la violencia criminal, que se desactive la violencia del dispositivo jurídico punitivo, asentándolo en un espacio de rechazo a la violencia, donde el establecimiento de nuevas instituciones de mediación, de perdón en las relaciones de víctima/victimario, defina la justicia y se sustituya la cárcel como institución de punición.

- Desde el Estado, las organizaciones sociales en su conjunto (familia, escuela, etc.), los medios de comunicación de masas a la sociedad en general, a: Reculturar, propiciando el establecimiento de una cultura de la paz:

- introduciendo conocimientos y destrezas prácticas sobre conflictos desde los preescolares;

- desmitificando consideraciones de género (machismo/feminismo, patriarcado);

- propiciando el pluralismo, la tolerancia, el diálogo y el debate e información sobre los derechos humanos, económicos, civiles y políticos.

La reconciliación tiene como objetivo amistar a las partes involucradas en la (o las) acción(es) violenta(s), a lo que no es ajeno el grupo o comunidad (familia, vecinos, barrio,

el país) en el seno del cual se desarrollaron estas acciones. Por lo tanto, aquí la participación y las alianzas de todos son fundamentales para lograrlo.

Existe una multiplicidad de métodos de reconciliación cuyo objetivo es lograr el cierre y la curación (rehabilitación de las partes) de la violencia, métodos que pueden combinarse de acuerdo a cada circunstancia en particular.

Existen algunos métodos propios de los sistemas de justicia, como son el jurídico/punitivo, que puede a su vez incorporar dentro del proceso penal la reparación/restitución y el método exculpativo (aceptar la culpa frente al colectivo) para el agresor o victimario.

Puede asimismo establecerse como institución del sistema penal la mediación, a fin de que actúe utilizando el método de la disculpa/perdón entre las partes.

Pero existen métodos utilizables por la propia comunidad (espacio relacional) donde se ha cometido el hecho violento criminal para lograr la reconciliación, a saber:

- compartir el pesar en conjunto ;
- el teatral/evocador donde a través de dibujos, teatro, cuentos que se realizan en comunidad. se “narra” colectivamente el hecho violento;
- el karma/codependiente, donde el principio es que ninguno es culpable pero ambas partes son responsables, y por lo tanto la forma de mejorar el karma es mediante un diálogo interno (meditación) en el cual los participantes penetran en sus fuerzas internas, y luego un diálogo externo en una mesa redonda: el reto es salir de la violencia resolviendo así su karma;
- la reconstrucción conjunta con el Estado y otras organizaciones sociales;
- la resolución conjunta de los conflictos a través de terapias del pasado, donde se debate sobre lo que falló, y del futuro, donde se imagina qué pasará si no se logra la paz y cómo sería ese trabajo.

La resolución tiene como finalidad solventar el conflicto subyacente. En ese sentido podría considerarse que esta tarea constituye el objetivo final de estas acciones, pero en realidad es la articuladora de las otras tareas, al sustentarse en la propia energía del conflicto e irlo resolviendo creativamente a través de la reconstrucción y la reconciliación.

En el caso de la violencia criminal o delictiva los conflictos pueden ser múltiples y derivarse de los diferentes espacios relacionales que se entrelazan en cada contexto social donde se desarrolla la misma. Algunos conflictos pueden derivarse de los sustratos latentes (estructura y cultura); otros, de tensiones presentes en relaciones sociales más evidentes. En este sentido volvemos a constatar cómo la violencia ocurre en el entrelazamiento de acciones y dimensiones en cada espacio relacional.

De esta manera, resolver los conflictos que subyacen significa: reconstruir y reconciliar desarrollando acciones orientadas en dos direcciones: expandiendo la democracia, con más educación para equiparar el diálogo hacia el consenso y responder a los más desfavorecidos, logrando más información y defensa de los derechos humanos, comprometiendo los medios de comunicación de masas; hacia la no violencia en la resolución de los conflictos, con solidaridad y comunidad, enseñando que los conflictos son los medios y una oportunidad para la educación mutua, al manejarlos creativamente en su propia resolución.

Reconstruir, reconciliar, resolver son las tres tareas en las que hay que trabajar paralela y sincrónicamente. Así: hay que construir la capacidad para transformar de los conflictos; hay que practicar la construcción de la no violencia; hay que construir la empatía desarrollando múltiples acciones en conjunto; hay que construir la creatividad, practicándola, encontrando salidas conjuntas a los conflictos para de esta manera ir construyendo la capacidad ciudadana.

LA VIOLENCIA SOCIAL EN AMERICA LATINA

En muchas regiones del mundo, el uso de la fuerza física por parte de la policía –sea ésta legítima o ilegítima– constituye un objeto de preocupación social. Algo similar sucede en América Latina, donde el volumen y magnitud de los encuentros violentos entre policía y ciudadanos mantienen alerta y activos a los grupos de derechos humanos nacionales e internacionales. Los investigadores latinoamericanos, sobre todo los abogados y criminólogos, han encontrado en la violencia policial un blanco para sus críticas en torno al abuso de poder y la injusticia en el continente.

Gran parte de la investigación existente sobre la violencia policial en América Latina está signada, casi dominada, por la vocación de denuncia que caracteriza a muchos de nuestros intelectuales, quedando relegado a un segundo plano el estudio sistemático de su incidencia y de su posible explicación. En cuanto a esta última, que representa el objeto general del presente estudio, las interpretaciones ofrecidas hasta el momento –aun cuando de elaboración diversa y frecuentemente escueta– tienden a coincidir en una perspectiva anclada en las teorías del conflicto social, que atribuyen el uso excesivo de la fuerza policial a un Estado autoritario que intenta defender el dominio de una élite sobre la mayoría marginada.

Existen dificultades apreciables para la evaluación de ese tipo de explicación, las cuales derivan en gran parte de la escasez de datos confiables sobre los niveles y tipos de conflicto social y sobre la incidencia del uso de la fuerza por parte de la policía. Además, aun cuando una explicación estructural de esa naturaleza encontrase apoyo en datos debidamente recopilados, sólo ofrecería una visión general del fenómeno, que poco podría aportar sobre la incidencia específica (¿contra quién? ¿en cuáles circunstancias?) de la fuerza legítima o

ilegítima. Es por estas razones que en nuestra propia investigación sobre el uso de la fuerza, iniciada hace unos años, es preferible empezar desde una óptica distinta –la disposición del agente de policía de emplear la fuerza contra el ciudadano. Pensaba que un estudio del protagonista principal en el encuentro entre policía y ciudadano podría arrojar hipótesis interesantes sobre los determinantes del uso de la fuerza, las cuales podrían ser incorporadas posteriormente a una reflexión teórica sobre el tema y también, ojalá, al esfuerzo por diseñar nuevas o mejores políticas para enfrentar el problema de la violencia policial.

En lo que sigue se verá una descripción secuencial del camino que ha tomado la investigación, acompañada de una presentación de los hallazgos principales, para concluir con algunas reflexiones sobre el significado de nuestros resultados.

Las reglas tácticas para el uso de la fuerza física

No es necesario emprender una investigación minuciosa para darse cuenta de que el uso de la fuerza por parte de la policía en los múltiples encuentros con la ciudadanía es excepcional y rara vez involucra el arma de fuego. Por ello, gran interés estriba en documentar e intentar comprender las situaciones en que la fuerza es empleada, y una manera de hacerlo es estudiando las reglas que el propio personal policial emplea para su uso. Las reglas para el uso de la fuerza física se elaboran en tres ámbitos diferentes. En primer lugar, las normas legales y reglamentarias suministran una especificación formal sobre cuándo puede ser utilizada la fuerza. En segundo lugar, la administración policial desarrolla criterios sobre el uso legítimo de la fuerza. Y en tercer lugar, los funcionarios

subalternos desarrollan reglas “tácticas” o “expeditivas” que orientan su uso de la fuerza en los encuentros con ciudadanos. Los tres ámbitos no son necesariamente coextensivos.

En un primer acercamiento al tema, se estudiaron las reglas tácticas para el uso de la fuerza entre oficiales de la policía uniformada del estado Mérida en el occidente venezolano. Se entrevistó a cincuenta oficiales de los sesenta y dos en nómina para ese momento, con rangos desde subinspector hasta comisario jefe, entre junio y diciembre de 1994. Se pretendía explorar las percepciones de los oficiales sobre el trabajo policial y, en particular, las reglas empleadas en la decisión de usar la fuerza física .

En el curso de las entrevistas, treinta y tres oficiales describieron sesenta y un casos en los cuales la fuerza fue usada contra ciudadanos, y quince casos en los cuales no se usó. Según se pudo observar, los entrevistados articulaban sus reglas tácticas para el uso de la fuerza, predominantemente, en términos de las reacciones hacia el comportamiento ciudadano. Un poco menos de la mitad de las descripciones de los casos específicos en los cuales se utilizó la fuerza incluyeron solamente la respuesta policial y el comportamiento ciudadano inmediatamente precedente a dicha respuesta, como se ve en el siguiente ejemplo: “En otra oportunidad alguien llamó porque un sujeto violento estaba rompiendo todo. Llegamos tres agentes, lo rodeamos, lo amenazamos con el bastón de mando y luego lo sujetamos con los brazos. Yo levanto pesas y es difícil que alguien se me suelte. No le llegamos a dar con el bastón, sólo lo intimidamos y distrajimos, mientras lo sujetábamos” .

Sin embargo, el 57% de los casos descritos incluyeron alguna referencia al comportamiento del ciudadano previamente al encuentro con la policía, como muestra el siguiente ejemplo:

“Me provocó una vez matar a un malandro de (...) que vivía atracando y haciendo maldades, y era desertor de la Fuerza Aérea. El colmo fue quitarle a una niña una bolsa con un mercadito que le habían mandado comprar los padres, muy pobres, y encima despojarla

del vuelto. Al final lo capturamos, entrando a la casa varios agentes, y aunque se trató de escapar por la ventana, otro que estaba afuera logró sujetarlo. Allí le dimos hasta que lo metimos a la patrulla”.

En éste, como en otros casos, la referencia al comportamiento previo del sujeto tiene como finalidad presentar al individuo como alguien moralmente cuestionable.

Así, se enfatiza la descripción de un “maleante de barrio” que victimizaba a los pobres y a los niños antes de tratar de escapar de la policía. Muchas descripciones de casos sugieren que el funcionario policial no solamente responde a comportamientos específicos, tales como la amenaza con un cuchillo, sino, de igual modo, a la condición moral del ciudadano tal como es sugerida por su comportamiento antecedente, conocido por la policía. De igual manera, observamos que, como respuesta frente a los reclamos, los oficiales se defienden tratando de demostrar que la fuerza era necesaria para controlar la situación, o sugiriendo que el individuo era, de algún modo, moralmente cuestionable, como demuestra el siguiente ejemplo:

“Una vez andaba con una patrulla y agarramos a un tipo con una moto, quien era distribuidor de marihuana. Lo montamos en la patrulla, que era un jeep, sin división entre la parte adelante y la parte de atrás. Yo iba adelante cuando, de repente, el detenido me hizo un tremendo golpe desde atrás, a mi cara. Volteé y le di un golpe por la boca que le sacó dos dientes. Al día siguiente me llaman a la Comandancia y allí está el comandante y el detenido junto con su abogado. Empiezan a poner un reclamo. Afortunadamente mi cara todavía estaba hinchada, y le hice ver al comandante por qué le había dado el golpe.

También yo había entregado la marihuana que habíamos decomisado y eso quedaba como evidencia de que el tipo era un traficante. Entonces el comandante le dijo al abogado que no

se trataba de un ciudadano común y corriente, sino de un delincuente, y que él me había agredido a mí”.

De este y otros casos, resulta claro que los funcionarios policiales y los ciudadanos divergen en sus versiones de los hechos. En el contexto de la queja, lo fundamental para cada parte es que su versión sea creída por las autoridades encargadas de una decisión. Ello sugiere que la policía se encuentra en una posición relativamente ventajosa cuando sostiene una definición de la situación frente a las pretensiones de delincuentes comunes, y en una posición relativamente débil cuando se enfrenta a los políticos o a otros ciudadanos con poder. Por consiguiente, en el uso de la fuerza física, los funcionarios policiales aprenden a prestar atención, no sólo al comportamiento del ciudadano y a su condición moral, sino a la probabilidad de que el ciudadano reclame y que su reclamo sea creído.

De otras declaraciones dadas por los entrevistados, se pudo observar la importancia que prestan a las quejas de la ciudadanía y a las averiguaciones administrativas y penales que de allí pueden resultar. Por ejemplo, el 70% de los entrevistados que se refirieron en particular a las relaciones de la policía con la comunidad expresó que el público es hostil a la intervención policial, y una tercera parte manifestó ansiedad hacia los procedimientos disciplinarios y frente al riesgo de detención como consecuencia del uso de la fuerza. Ello llevó a inferir que las reglas tácticas para el uso de la fuerza se fundamentan en la necesidad que siente el policía de evitar, en la medida de lo posible, un reclamo en su contra, que le puede perjudicar de manera apreciable. Las hipótesis eran, en consecuencia, que las “reglas tácticas” de los policías para el uso de la fuerza adoptan el siguiente patrón:

1) El policía tenderá a usar menor fuerza, o ninguna, contra ciudadanos percibidos con influencia o habilidad para incoar un reclamo exitoso (la influencia tiene que ver con la capacidad de movilizar burócratas, políticos, medios de comunicación social o ciudadanos

respetables en la dirección buscada, como, por ejemplo, investigar y sancionar a un funcionario).

2) Los funcionarios serán menos propensos a utilizar la fuerza contra ciudadanos respetables y más propensos a hacerlo contra ciudadanos de dudosa reputación (la respetabilidad se refiere, fundamentalmente, a la estima moral).

3) Los funcionarios serán más propensos a utilizar la fuerza contra ciudadanos que son agresivos o que se resisten a los procedimientos policiales, dado que la fuerza puede, en estos casos, ser definida como control legítimo. Viceversa, serán menos propensos a usar la fuerza contra ciudadanos puramente irrespetuosos o pasivos .

4) El comportamiento del ciudadano tendrá un mayor efecto sobre la disposición de usar la fuerza cuando se trata de ciudadanos de alto estatus que cuando se trata de ciudadanos de bajo estatus.

Las reglas tácticas utilizadas

Cumplida la primera fase de la investigación, correspondía estudiar la disposición a usar la fuerza entre el personal subalterno de la policía, para ver si se asemejaba a lo que parecían ser las reglas tácticas entre los oficiales. Para ello, se diseñó un instrumento que ofrecería doce situaciones hipotéticas: cuatro involucrando a ciudadanos que manifiestan agresión contra la policía u otra persona, cuatro referidas a ciudadanos que resisten procedimientos policiales, y cuatro que presentan al ciudadano insultando al policía.

Adicionalmente, se apareaban situaciones para que una involucrara a un ciudadano de alto estatus social, y otra, casi igual, se refiriera a un ciudadano de bajo estatus social. Frente a

cada situación se medía la disposición del agente de responder, ofreciendo cinco opciones que variaron entre ninguna fuerza y la fuerza mortal.

De esta manera se podrían examinar las posibles diferencias, tanto en la disposición de usar la fuerza contra ciudadanos de diferente estatus social en situaciones equivalentes, como en las respuestas frente a diversos comportamientos. El instrumento incluyó, también, estimaciones del grado de influencia y respetabilidad que se percibía en cada ciudadano, así como información general sobre el encuestado.

Para proporcionar mayor extensión geográfica al estudio, se aplicó la encuesta a funcionarios de la policía uniformada en tres ciudades de América Latina:

Maracaibo, San Pablo y Rosario. Un total de 829 encuestas válidas fueron recopiladas en las tres ciudades en septiembre de 1995. Los resultados confirmaban en gran parte la existencia de reglas tácticas acordes con los resultados de la primera fase de la investigación.

Se muestra la disposición de actuar frente a las doce situaciones hipotéticas, y se observa que, salvo en una de las situaciones de irrespeto (involucrando a un estudiante y un indocumentado), la disposición de usar la fuerza es mayor cuando se trata de ciudadanos de bajo estatus social (y con comprobados niveles inferiores, según la misma encuesta, de influencia y respetabilidad).

Por ejemplo, casi tres cuartas partes de los agentes habrían conversado con un director de un servicio público que se resiste a acompañar al policía, mientras que sólo un 15,7% habría hecho lo mismo con un atracador solicitado que se comporta igual. Adicionalmente, se observa que la disposición a emplear la fuerza es mayor frente a las situaciones de agresión y menor en las situaciones de irrespeto. Ambos hallazgos, entonces, apuntan hacia la existencia de criterios situacionales de actuación acordes con las reglas tácticas

provisionalmente identificadas en la primera fase de la investigación. Análisis multivariantes, no reportados, también indican que el comportamiento del ciudadano, y su nivel de respetabilidad e influencias, son las variables que, dentro del modelo empleado, mejor predicen la disposición de utilizar (o no) la fuerza física .

Finalmente, la cuarta regla táctica no quedó evidenciada de la manera que se había especulado. Se había pensado que la disposición a utilizar la fuerza de Violencia, sociedad y justicia en América Latina.

El estudio de una muestra de agentes policiales en tres ciudades confirmó en gran medida la existencia de reglas tácticas para el uso de la fuerza que conjugan el comportamiento del ciudadano y su estatus social.

Sin embargo, todavía quedaría por demostrar que, en gran medida, dichas reglas provienen, como se había especulado, del interés de los agentes en evitar reclamos por parte de la ciudadanía. Para buscar evidencias de la influencia de posibles reclamos sobre la actuación del agente, se decidió estudiar las actitudes de los profesionales que, desde las diferentes sedes institucionales, están encargados de procesar y resolver las denuncias sobre el uso (y abuso) de fuerza física efectuadas por la ciudadanía. Si se detectaba congruencia entre estas actitudes y las disposiciones (ya medidas) de los agentes, se podría concluir que las reglas tácticas para el uso de la fuerza se derivan, por lo menos en parte, de la percepción que tiene el personal de policía de los procesos de control de sus actuaciones.

Para esta tercera fase de la investigación se tomó como universo a los jueces, fiscales del ministerio público y oficiales de policía en las tres ciudades previamente estudiadas, dado que ellos tienen la responsabilidad de procesar y resolver las denuncias ciudadanas sobre el uso de la fuerza por parte de la policía, bien por vía penal, bien por vía administrativa. En septiembre de 1996 se aplicó a una muestra de 186 de estos profesionales una encuesta

cuyas características esenciales eran similares a la encuesta aplicada a los agentes policiales. En particular, se presentaron seis de las situaciones hipotéticas incluidas en la encuesta anterior y se solicitó indicar la respuesta policial deseable en cada situación.

Los resultados indicaban la misma percepción de alto o bajo estatus social de los ciudadanos involucrados en las situaciones hipotéticas, aunque con menor diferenciación que las percepciones de los agentes policiales. Especialmente importantes fueron las opiniones sobre la respuesta policial deseable frente a cada situación hipotética, las cuales, mostraban bastante congruencia con las disposiciones de actuar manifestadas por los agentes policiales. Así, en las situaciones de agresión o resistencia, los jueces, fiscales y oficiales de policía indicaban una respuesta de un nivel de fuerza significativamente mayor para los ciudadanos de bajo estatus social que para los ciudadanos de alto estatus social. También en congruencia con los resultados de la fase anterior, se observa que el efecto del comportamiento del ciudadano sobre la respuesta policial deseable es mucho mayor para los ciudadanos de bajo estatus social que para los ciudadanos de alto estatus social. Mientras no hay diferencias significativas entre las respuestas recomendadas para las situaciones de insultos, existe una tendencia significativa a recomendar fuerza ligeramente mayor contra el atracador que resiste el arresto (en comparación con un médico que resiste el arresto), y de recomendar mucha más fuerza (sobre todo a través del arma de fuego) contra un malandro que apunta a la policía (en comparación con un diputado que apunta a la policía). Se concluye, entonces, que existe bastante congruencia entre las opiniones de los “controladores” de los agentes de policía (aunque no son del todo homogéneas) y las disposiciones de utilizar la fuerza reportadas por los agentes en sí. Esa congruencia proporciona apoyo a la hipótesis de que las reglas tácticas para el uso de la fuerza son moldeadas, de manera importante, por los mecanismos de control del uso de la fuerza.

Hablar de la violencia supone referirse a algo cuyo sentido es ambiguo. El término violencia tiene muchas connotaciones, y en su definición intervienen juicios morales y apreciaciones situacionales. Por otro lado, el análisis de la violencia permite perspectivas muy variadas: entre la represión política y una pelea callejera hay muchos niveles e instancias a través de los cuales se puede estudiarla y ensayar interpretaciones.

América Latina comprende los países del continente americano que fueron colonizados por España y Portugal y, según una opinión generalizada, constituye una subregión o una unidad de análisis autónoma. En este contexto se pueden identificar perspectivas de tipo macroestructural y microestructural sobre la violencia de naturaleza criminal.

La violencia, desde un punto de vista macroestructural, se puede vincular a la opresión política y económica, a la presencia de grandes desigualdades sociales, y a la existencia de gobiernos con un perfil autoritario, de legitimidad precaria, en Estados en los cuales se condensa la dominación de clase. Esta es la vertiente latinoamericana de la criminología crítica —con diversas variantes desarrolladas a partir de los años setenta— que, como denominador común, sostiene la existencia de un sistema político injusto, el cual, frecuentemente con apoyo de potencias extranjeras, genera un ambiente favorable al ejercicio de variadas y extensas formas de coacción física contra la población.

La violencia, desde el punto de vista microestructural, puede ser abordada como el ejercicio de la coacción interpersonal en encuentros de diversa naturaleza que, en función de valores, situaciones o percepciones de los actores envueltos en el encuentro, generan respuestas de diversa intensidad y consecuencias, pero que se traducen, en todo caso, en una conducta impetuosa con intención de causar daño. El elemento “impetuosidad” permite distinguir los conceptos de violencia y agresión. Los niveles de análisis pueden ser variados,

comprendiendo, entre otros, pautas culturales generales o de grupos, modelaje e inducción o respuestas situacionales asociadas a formas de control y castigo.

En esta instancia se pretende ilustrar, para algunos países de América Latina donde existen datos disponibles, las tendencias de la criminalidad que implica la coacción directa con el propósito de causar daño, las asociaciones con indicadores de pobreza relativa y extrema, así como percepciones ciudadanas y respuestas frente a conductas delictivas, a fin de analizar perspectivas sobre la violencia desde los puntos de vista macro y micro estructural.

Una visión general sobre las tasas de homicidio intencional

El estudio refiere las tasas de homicidio intencional por 100.000 habitantes para diez países de América Latina, Estados Unidos y Canadá en los últimos diez años. La combinación de estadísticas vitales, más precisas aunque no siempre disponibles, con estadísticas judiciales, sesgadas por variables de índole legal, no asegura la uniformidad de los registros, aunque permite observar algunas tendencias generales. Tampoco se encuentran siempre datos disponibles para todos los años de la serie, aunque la presencia de datos para varios años permite alguna inferencia sobre cambios longitudinales.

Tasas de homicidio por 100.000 habitantes en algunos países de América Latina, Estados Unidos y Canadá (1987-1996)

Fuentes: a) LaFree (1999: 115-139) (estadísticas vitales); b) Amaya (1998: 11) (estadísticas judiciales);

c) Carranza (1997: 356, 374, 436) (estadísticas judiciales); d) República de Venezuela (1991, 1995, 1996) (estadísticas vitales).

Como se puede apreciar, no existe una tendencia uniforme que permita diferenciar como bloque anglosajón a Estados Unidos y Canadá de los restantes países latinoamericanos.

Por otro lado, se aprecian diferencias notorias entre diversos países de América Latina, tanto para años determinados como en la variación interanual.

En el período examinado, Canadá y Chile presentan, consistentemente, las tasas más bajas de homicidio de la región, coincidiendo 1991 como el año de mayor incidencia, seguido de una disminución progresiva. El Salvador, Colombia, y en menor medida Guatemala, registran las tasas más elevadas de homicidio intencional, lo cual no es sorprendente si consideramos la turbulencia política y la situación de guerra civil experimentada por estos países, a pesar de que los datos de El Salvador (1994-1996) comprenden el período posterior a los acuerdos de paz que terminaron, al menos formalmente, con la guerra civil.

El caso de Costa Rica es interesante: con tasas de homicidio relativamente bajas y estables hasta 1991, experimenta una duplicación para 1994, probablemente debido a un fenómeno de extensión de la violencia de los países vecinos, a través de grupos de desplazados.

Honduras experimenta la triplicación de su tasa de homicidios entre 1990 y 1994, mientras que Nicaragua, luego de un incremento pico en 1992, regresa a sus niveles de 1990 en 1994.

México ha experimentado un moderado descenso de su tasa de homicidios, tradicionalmente elevada, entre 1987 y 1995, a pesar del conflicto de Chiapas, mientras que Venezuela duplicó su tasa de homicidios en diez años, comenzando el ascenso sostenido (aunque con una leve disminución a partir de 1995) desde el año 1989, cuando se produjeron los desórdenes civiles urbanos más graves de las últimas décadas. Cabe destacar que pese a ser el año 1992 testigo de dos intentos de golpe de estado en Venezuela, con bajas civiles y militares, lo cual haría pensar en un pico en los homicidios, la tasa continuó

en ascenso en los cuatro años siguientes. Finalmente, los casos de Estados Unidos y Puerto Rico son interesantes, pues demuestran un comportamiento diferencial pese a tener un sistema político uniforme. Para Estados Unidos, luego de los picos históricos de 1991 y 1993, se registra un leve descenso, mientras que Puerto Rico triplica la tasa de homicidios norteamericana para 1992, último año de los datos disponibles.

Las tendencias descritas permiten suponer, respecto a los homicidios intencionales, que por un lado América Latina no constituye por sí misma un entorno consistentemente más violento que Estados Unidos, país industrializado y donde se esperaría una menor incidencia de la criminalidad violenta, según las interpretaciones generalmente aceptadas.

Por otro lado, permiten mostrar que la tasa de homicidios, si bien resulta sensible a episodios coyunturales o estables de confrontación civil, puede incrementarse o mantenerse aun después de concluidos los episodios que desencadenaron su alza, quizás como efecto de difusión y estabilización de prácticas cotidianas de índole violenta o de la disponibilidad de instrumentos letales.

Indicadores de victimización para otros delitos violentos

El homicidio es un delito frente al cual los registros oficiales, especialmente si derivan de las estadísticas vitales antes que de las estadísticas policiales o judiciales, resultan razonablemente confiables, debido a la dificultad del ocultamiento del cadáver. Para otros delitos de tipo violento, como las lesiones, los robos y los hechos de carácter sexual, la disposición de denunciar a la policía es fundamental.

Se sabe que esta disposición es en América Latina sustancialmente menor que en Europa y Norteamérica. Por ello, las encuestas de victimización suministran indicadores más precisos

sobre la extensión y percepción de la gravedad de delitos de naturaleza violenta, distintos al homicidio.

En segundo lugar se presenta las tasas de victimización por robo, lesiones personales y agresiones sexuales, reportadas en seis capitales de los países de América Latina que participaron en la Encuesta Internacional de Victimización de 1996 (UNICRI, 1998). Es razonable pensar que la tasa de victimización en las ciudades capitales es superior a la del país, debido a la concentración de la delincuencia callejera en las áreas urbanas. En todo caso, los datos permiten comparar información entre naciones. Los números expresan el porcentaje de victimización reportada por hogares encuestados. Brasil y Colombia registran en general las más elevadas tasas de victimización para los tres delitos considerados, aunque los datos no permiten afirmar que exista una correspondencia entre unas y otras formas de violencia criminal. Así, Argentina y Costa Rica, que reportan tasas de victimización por robo entre 38% y 49% menores que Brasil y Colombia, reportan, respectivamente, 14% más y sólo 14% menos victimización por ataques sexuales que Colombia. Por otro lado, Paraguay, con una tasa de victimización por robo equivalente a la de Bolivia, tiene una tasa de victimización por lesiones 63% menor, pero una tasa de victimización por ataques sexuales 48% mayor, lo que indica que, en el ámbito de cada país, la criminalidad violenta no registra un incremento o decremento consistente. En estos reportajes sobre victimización podría influir, particularmente en lo que se refiere a lesiones y a ataques sexuales, una percepción cultural diversa sobre lo que significa la agresión. Por ello resulta pertinente analizar información complementaria sobre la gravedad atribuida a la infracción, lo cual se adelanta en la sección “Percepciones de gravedad sobre delitos de índole violenta” de este artículo.

Correlación de la violencia con la situación de pobreza

Si vinculamos estos datos a ciertas condiciones socioeconómicas, podemos observar alguna relación entre violencia homicida y pobreza en el contexto latinoamericano.

Es posible analizar los datos disponibles en el ámbito nacional relativos a situación de pobreza (porcentaje de hogares con ingresos inferiores al doble del costo de la cesta básica) e indigencia (porcentaje de hogares con ingresos inferiores al costo de la cesta básica) para los países de América Latina que reportan tasas de homicidio (Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Venezuela) (Naciones Unidas, 1997). Igualmente, podemos analizar la relación entre dichos indicadores de pobreza e indigencia para los países de América Latina que reportaron porcentajes de victimización según la encuesta internacional de 1996, (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica y Paraguay). A tal efecto se ha realizado una prueba de correlación por rangos entre los índices de pobreza e indigencia y las tasas de homicidio para el mismo año o el año más cercano disponible, así como para los porcentajes de robo, lesiones y ataque sexual reportados como hechos victimales.

Los análisis muestran coeficientes de correlación elevados y estadísticamente significativos entre la tasa de homicidios y pobreza (0,82, $p < 0,05$) y entre la tasa de homicidios y la indigencia (0,86, $p < 0,01$). Ello quiere decir que los países de América Latina que registran más altas tasas de homicidio tienden a presentar los más elevados índices de pobreza e indigencia, aunque no se pueda establecer una relación de causa-efecto entre ambas variables. Por otra parte, existe también un coeficiente de correlación elevado y estadísticamente significativo entre el porcentaje de victimización por lesiones y la

indigencia (0,75, $p < 0,05$) y otras asociaciones positivas entre lesiones y pobreza (0,67), robo e indigencia (0,66) y robo y pobreza (0,43), aunque no estadísticamente significativas. No existe asociación relevante entre ataques sexuales e indigencia (0,09) ni entre ataques sexuales y pobreza (-0,20). Debe destacarse, sin embargo, que el escaso número de países considerados no permite generalizar los resultados.

Indicadores de gravedad sobre delitos de índole violenta

Se reporta, para Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica y Paraguay, de acuerdo con los resultados de la misma Encuesta Internacional de Victimización de 1996, los porcentajes de respuesta considerando muy grave o grave cada hecho delictivo, así como, entre paréntesis, el orden decreciente de gravedad conforme a los porcentajes de respuesta acumulada. Como se puede observar, existe acuerdo en todos los países examinados en calificar el ataque sexual como el más grave de los tres delitos, aunque respecto a las lesiones personales y al robo existen discrepancias, pues para los argentinos, costarricenses y paraguayos las lesiones son más graves que el robo, y para los bolivianos, brasileños y colombianos el robo es más grave que las lesiones. Estos datos sugieren que la percepción de la gravedad del hecho no depende de la frecuencia de la victimización –así como la sensación de inseguridad no depende tampoco de ella, según hemos podido demostrar en otro lugar.

Efectivamente, en todos los países considerados la victimización por ataque sexual es inferior a la victimización por robo, así como lo es la victimización por lesiones, en una proporción variable entre un 66% y un 84%, en los tres países que consideran más grave las lesiones personales que el robo.

Los datos reportados permiten suponer que la percepción de la gravedad del delito violento guarda autonomía respecto a su frecuencia si se mide conforme a la victimización reportada, un indicador aparentemente más confiable que las estadísticas oficiales. Sin embargo, poco se sabe sobre la incidencia de la percepción de la gravedad de los delitos en las respuestas instrumentales de la población frente a la criminalidad violenta, incluyendo el apoyo a los organismos de control social formal.

Reacciones ciudadanas y policiales frente a la criminalidad violenta

Como se dijo antes, los datos disponibles, aunque fragmentarios, parecen indicar una recurrencia menor a la policía por parte de la población en América Latina que en otros países industrializados, tanto si se toma en cuenta el porcentaje de delitos denunciados como la recurrencia a la policía para resolver situaciones no estrictamente delictivas. Sin embargo, un fenómeno no suficientemente estudiado es el apoyo informal a la policía para la resolución de variados problemas delictivos, incluyendo la mediación y el arbitraje entre las formas pacíficas de intervención, o el apoyo a medidas coercitivas de índole violenta.

Se recogen los datos de una investigación comparada (Briceño León, Piquet Carneiro y Cruz, 1997) sobre el grado de apoyo de la población de tres ciudades de América Latina al uso de torturas por parte de la policía para obtener confesiones de sospechosos de delitos. Como se puede apreciar, entre un 4,1% y un 7,9% se muestra “totalmente de acuerdo” (apoya sin reservas) con tal procedimiento, mientras existe en general “acuerdo” incluyendo soporte positivo, aunque no entusiasta, sobre tales procedimientos, variable entre un 12,5% y un 17,7%.

Aunque la gente de Caracas y San Salvador parece apoyar en mayor medida el uso de estos procedimientos que la gente de Río de Janeiro, se observan diferencias en la intensidad del apoyo, que aparentemente es algo mayor en San Salvador que en Caracas, si tomamos en cuenta el porcentaje de “totalmente de acuerdo”. Sin embargo, las diferencias no son demasiado marcadas ni guardan relación aparente con la incidencia delictiva de mayor gravedad; en efecto, como se observó, la tasa de homicidios en El Salvador para 1996 excede en diez veces la tasa de homicidios de Venezuela, mientras que el porcentaje de apoyo sin reservas a la tortura policial para extraer confesiones entre los habitantes de San Salvador supera sólo en un 18% al apoyo sin reservas de los caraqueños.

A falta de datos comparados con otros países, dentro y fuera de la región, en esta dimensión del apoyo al control informal violento por parte de la policía, resulta difícil hacer inferencias sobre lo que Waldmann (1998) ha denominado “autonomía a la sombra del Leviathan”, para referirse, en el caso latinoamericano, a un estadio previo a la anomia en el cual un código privado y extralegal de comportamiento funcional se instaura y coexiste con el orden legal formal. Sin embargo, los datos ilustran un punto importante: la violencia abarca muchas dimensiones y no puede ser cabalmente entendida como el producto de un designio opresivo dirigido por gobiernos autoritarios desde la cúpula del Estado.

Esta visión de la violencia como opresión estatal, en efecto, no da cuenta de los procesos sociales que retroalimentan el uso de métodos coactivos para la resolución de los conflictos interpersonales y de los mecanismos que, generando incertidumbre y amenaza, facilitan el desempeño violento de variados actores sociales.

Por ejemplo, una investigación de prensa sobre los linchamientos en Brasil entre 1979 y 1982 reveló que esta forma extrema de justicia privada es un fenómeno básicamente urbano, que no constituye una respuesta directa a las formas más violentas de criminalidad,

como el homicidio y el robo a mano armada, aunque guarda relación con la violencia sexual contra mujeres y niños, y es muy poco investigada por la policía. Ello sugiere mecanismos de generalización y difusión de la violencia, más allá de la simple sustitución de los particulares en la función estatal del castigo.

Por otra parte, es también cierto que los propios funcionarios policiales no son inmunes a las condiciones de interacción con el resto de la población, tanto en lo que se refiere a la oposición de los particulares a la acción policial como en lo relativo al reclamo frente a los procedimientos policiales. Es pertinente destacar que el nivel de riesgo de muerte para la policía en América Latina parece ser mayor que el observado en Estados Unidos: la relación entre civiles y policías muertos en encuentros ha sido estimada para Venezuela, entre 1982 y 1986, en 3,4 a 1 y para Argentina, en 1998, en 3,3 a 1, mientras que para Estados Unidos tal relación está en el orden de 5 a 1. Ello indica que en los casos de confrontación directa en Estados Unidos mueren más civiles que policías, aunque es presumible que allí exista menor frecuencia de confrontaciones directas con la policía que en América Latina.

Es interesante destacar, finalmente, que los indicadores de violencia ciudadana no guardan relación sistemática con los regímenes de tipo autoritario. En efecto, el uso de la violencia por parte de la policía en encuentros con ciudadanos, en Argentina y Brasil, ha sido muy alto en regímenes democráticos instaurados luego de regímenes autoritarios, y los linchamientos en Brasil, en el período democrático de 1985-1988, se incrementaron en un 50% con relación al período dictatorial de 1981-1984. Todo ello sugiere una dinámica social con cierta autonomía respecto a la represión directa por parte del aparato estatal.

Violencia y dinámica interpersonal

Dentro del proceso de evaluación de la violencia y el sistema de control social formal, hemos adelantado en Venezuela, en los últimos años, dos estudios sobre manifestaciones coactivas, oficiales y particulares que permiten alguna aproximación al problema como dinámica interpersonal.

El primero de estos estudios se refiere al uso de la fuerza física por parte de la policía. Se ha comprobado que los relatos de los oficiales de policía enfatizan el carácter moralmente cuestionable del ciudadano frente al cual se ha utilizado la fuerza física (porque maltrata a su familia, porque es un delincuente reiterado o porque se encuentra en una situación de transgresión de una norma social generalmente aceptada). En algunas oportunidades tales relatos describen al ciudadano como agresivo (porque se encuentra ejecutando un ataque contra la propia policía o contra un tercero).

Estas dimensiones del comportamiento y de la condición moral del ciudadano hacen pensar que la percepción del poder de reclamo es importante al momento de utilizar la coacción física. Por otro lado, se ha podido determinar que la policía está dispuesta a usar mayor fuerza física frente a las situaciones de agresión que frente a las situaciones de resistencia y de insulto y que, en presencia de situaciones equivalentes, declara estar dispuesta a usar más fuerza contra personas de baja respetabilidad e influencia que frente a personas de alta respetabilidad e influencia.

El segundo de los estudios ha analizado las percepciones, experiencias y actitudes sobre el uso de las armas entre jóvenes transgresores intervenidos por el sistema de justicia juvenil venezolano en dos centros de reclusión de la ciudad de Caracas. Los datos muestran una correlación estadísticamente significativa (0,38, $p < 0.0001$) entre la frecuencia del uso de armas como victimario y la victimización por armas, lo que sugiere una población

homogénea e intercambiable de sujetos activos y pasivos de la violencia armada. Por otro lado, los relatos específicos sobre experiencias con armas permiten concluir que el motivo más frecuente para haber usado un arma contra otra persona (19% de los casos) y el segundo más frecuente para haber sido víctima de tal uso por un tercero (16%) es la resolución de una situación de venganza personalizada y aparentemente irreversible, denominada “culebra”, que implica la eliminación física del adversario. De algunos relatos también se pudo deducir que situaciones aparentemente banales, como apropiarse de bolsas de comida o la resistencia al galanteo de un rival, generan entre estos jóvenes respuestas de gran violencia, que pueden concluir en homicidios.

Ambos estudios sugieren que la violencia, como acto impetuoso dirigido a ocasionar un daño físico a otra persona, es una situación compleja y dinámica, en la cual intervienen condicionantes y factores vinculados con la percepción desvalorizante o amenazante del destinatario de la fuerza que pueden crear mecanismos de reproducción del ciclo de la violencia.

Los datos de varias investigaciones sugieren que la violencia tiene diversos aspectos y condicionantes, que se distribuye de forma desigual en el medio social, habiendo grupos de mayor riesgo que otros, y que su utilización para resolver situaciones de conflicto interpersonal puede ser fomentada en un proceso interactivo entre instancias formales e informales de control social. En este sentido, las tasas de criminalidad global, e incluso las encuestas de victimización, probablemente no reflejan las experiencias y vivencias de todos los grupos sociales. Quizás tampoco dan cuenta de las interpretaciones divergentes de la experiencia de victimización según estrato social o nivel educativo. En este sentido, deberían ser complementadas con estudios etnográficos sobre el significado, manejo y control de la conducta violenta en los diversos países y entre diversos grupos sociales.

Existe en América Latina una reflexión creciente que rebasa los modelos macroestructurales del Estado autoritario y del dominio de clase y apunta a la identificación del significado y la reconstrucción de la dinámica de la violencia a nivel interpersonal.

Algunas de estas reflexiones no descartan la conformación del Estado, aunque sugieren como una variable importante para explicar estos procesos, antes que su desarrollo e hipertrofia, su minimización como entidad impersonal y fuerte.

La incidencia de la pobreza extrema dentro de este proceso de minimización podría ser relevante, en el sentido de generar espacios privatizados y coactivos de resolución de conflictos. Dentro de esta matriz cabe destacar, además, los análisis sobre la desconfianza en el sistema judicial como generadores de violencia, o la sustitución de mecanismos formales de castigo ineficientes por mecanismos informales. Estos nuevos enfoques contribuyen a superar el modelo mecanicista de la violencia de clase a través del aparato coactivo del Estado y a reconstruir las manifestaciones, significado y progresión de la violencia en función de la dinámica interpersonal.

Esta es una forma más útil y apropiada para explicar el fenómeno de la violencia y para reducir sus manifestaciones. En este sentido, la investigación orientada puede contribuir a la ejecución de planes de intervención para minimizarla.

EL CRECIMIENTO DE LA VIOLENCIA URBANA EN LA ARGENTINA EN LA ÚLTIMA DÉCADA

Hoy gran parte de los argentinos viven con el temor de ser víctimas de un delito. ¿Los datos existentes muestran un aumento de la criminalidad tal que justifiquen la honda preocupación social? ¿O no será que en ese miedo se cristalizan incertidumbres que, más allá de la amenaza de la violencia, surgen de la generalizada vulnerabilidad económico-social? El desasosiego frente a la violencia, al no diferenciarse de otras fuentes de inquietud estaría, entonces, magnificado. Si tal fuera el caso, la amplificación del miedo, encarnado en el temor a la victimización, podría llevar a construir el "problema del delito en la Argentina" y a proponer soluciones de manera apresurada. Error que surge al acoplarse dos problemas diferentes: uno, la sensación de inseguridad en la población y el otro, la criminalidad propiamente dicha. Tal confusión lleva a que los responsables políticos propongan medidas más dirigidas a tranquilizar a la población que a enfrentar un problema cuyas características y magnitud aún no conocen con precisión.

Como esto sucede simultáneamente con el aumento del desempleo y de la pobreza, la intensidad de la inseguridad colectiva puede presionar hacia una redefinición riesgosa de la cuestión social: del énfasis en la protección a los van quedando en los márgenes de la sociedad al desvelo por "defender" a la sociedad de la supuesta amenaza que ellos representan. La consecuencia de este proceso es que se ha ido construyendo en el espacio público una "cuestión criminal" que todavía no ha sido investigada ni definida en su alcance y contornos. La pregunta por el delito ha sido históricamente conflictiva, puesto que encierra cuestiones ideológicas centrales a la vida en sociedad. Las ideas preexistentes

sobre las normas y el orden social, sobre la transgresión y el castigo, sobre la justicia y la libertad tiñen la construcción del problema y, por ende, la búsqueda de soluciones. Por esta razón, conocer con precisión lo que está sucediendo en el mundo del delito, quienes son sus actores, el sentido de sus acciones, resulta un elemento clave a la hora de diseñar políticas públicas.

Con la intención de contribuir a precisar los alcances y magnitud del fenómeno delictivo se encaró la investigación cuyos primeros resultados aquí se presentan. La perspectiva adoptada fue la siguiente: el crimen y el delito configuran un fenómeno complejo que es determinado y condicionado por múltiples factores. Su comprensión es indisociable a la de otros hechos que caracterizan a la sociedad argentina de las últimas décadas: el aumento del desempleo y otras formas de precarización laboral, la creciente desigualdad y segregación socio-espacial, el empobrecimiento de sectores tradicionalmente estables y las dificultades crecientes de movilidad social, entre otros. Pero considerar el contexto social de origen no alcanza para explicar el problema, es necesario elucidar el sentido que tales experiencias cobran para los actores.

Desde este abordaje intentamos responder los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los cambios cuantitativos y cualitativos registradas en las acciones delictivas? ¿Quiénes son los protagonistas de estos hechos? ¿Cuál es el sentido que imprimen a sus acciones?

¿Estamos asistiendo a la emergencia de formas anómicas de delito y violencia? Y, si es así, ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se explica el aparente uso innecesario de la violencia en tales actos?

No hay duda que la definición de un nuevo problema social precisa de nociones acordes al objeto de estudio, de las que todavía carecemos. Por esta razón, en el presente trabajo se utilizan provisoriamente términos tales como "delincuentes", "normas" y "desviación" en su

acepción más corriente, sin desconocer los riesgos que representan su grado de imprecisión y sus fuertes connotaciones prescriptivas.

Intentamos también avanzar en el campo de las políticas públicas, examinando las experiencias internacionales. Nos concentramos en acciones públicas de carácter no represivo, centradas en la prevención y en la integración.

En la investigación se articularon las siguientes metodologías: 1) trabajo de tipo cualitativo con protagonistas de hechos delictivos; 2) Entrevistas a Informantes claves; 3) recolección de datos secundarios y 4) Análisis de políticas públicas existentes en el país y el extranjero.

Las entrevistas con los protagonistas de actos ilegales y con los informantes claves fueron realizadas entre enero y septiembre de 1999 en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Se realizaron aproximadamente un centenar de entrevistas con casi 60 habitantes de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires –en su mayoría menores de 30 años– que habían protagonizado acciones ilegales, en particular contra la propiedad. Elegimos franja de edad con el objetivo de captar las nuevas formas de delito. En efecto, la mayor parte de nuestros entrevistados no poseía una “carrera delictiva” propiamente dicha sino que habían protagonizado acciones ilegales en un período no mayor al año y medio previos al momento de la entrevista.

Nos centramos en hechos en los que real o potencialmente existiera violencia. A los fines de esta investigación, consideramos violencia a la concreción y/o amenaza contra la integridad física de personas. Hay entonces casos de homicidio o tentativa del mismo, así como víctimas con heridas de distinta gravedad. Se excluyeron infracciones tales como posesión de drogas ilegales para consumo personal, carterismo y otros hechos en los que la violencia –tal como se la ha definido– estuviera excluida. Se descartaron casos de violencia

sin objetivos de dolo, como la violación, los crímenes pasionales y las diversas manifestaciones de violencia familiar.

En segundo lugar, se realizaron alrededor de 30 entrevistas a informantes claves. Se trató de autoridades nacionales, provinciales y municipales vinculados al tema, jueces, abogados penales, trabajadores sociales, personal de Institutos de Menores, psicólogos, periodistas, policías, líderes barriales, docentes y padres de jóvenes en conflicto con la ley.

En tercer lugar, se examinaron las distintas fuentes de datos estadísticos existentes sobre el tema, tanto de carácter público como privado. Por último, se consultó la documentación sobre experiencias de programas no represivos implementados en otros países.

El presente artículo se divide en 3 partes. En la primera se examinan los datos sobre el panorama actual de delito en el país con el objetivo de elaborar un primer diagnóstico del alcance del problema. En la segunda parte se presentan las características principales que surgen del trabajo de campo. Por último, se ofrece al lector un panorama de los distintos abordajes del problema que se realizan en Argentina y en otras partes del mundo.

Sabiendo de los riesgos que implica presentar tan variados temas en el marco restringido de un artículo, optamos por ese tipo de presentación a fin de proponer líneas de trabajo que en el futuro deberán ser profundizados. Por ende, las próximas páginas deben considerarse como los resultados preliminares de una investigación en curso de mayor alcance.

Los datos del problema

Uno de los requisitos para conocer la situación delictiva que hoy enfrenta el país es contar con estadísticas que nos informen sobre el tipo de delitos cometidos, su magnitud y evolución, las características de las personas que cometen estos delitos así como las de las

víctimas, las eventuales diferencias por zonas, etc. Con estos datos no sólo es posible diseñar un mapa del delito actual, herramienta clave a la hora de diseñar una política de seguridad, sino también poder conocer los posibles cambios en el tipo de crímenes y de sus protagonistas con respecto al pasado.

Lamentablemente la información que hoy contamos no es suficiente ni rigurosa: sólo hay estadísticas de los delitos que han sido denunciados y, se supone, que si bien los hechos más graves (p.ej donde hay violencia) se denuncian no sucede lo mismo con las ofensas menores¹. A esto se suma que ninguna institución lleva un seguimiento sistemático de cierta continuidad temporal, que los datos de las distintas fuentes no son comparables entre sí y que hay un déficit en la elaboración de indicadores que permitirían una mejor comprensión del fenómeno.

Aceptando esta limitación y suponiendo que el error es sistemático, se observa que Argentina ha venido registrando un incremento continuó de delitos desde 1980-1994. En este período la tasa de delitos denunciados se ha incrementado en un 150%. Vale la pena observar que en este lapso de tiempo hay períodos de crecimiento más pronunciado como el comprendido entre los años 1980-84, 1988-1989 y el que comienza en 1995. En los últimos 5 años habría aumentado un 65%. En 1994 se cometió un delito cada 55 habitantes y, al ritmo, actual este año habrá un delito cada 34 personas.

Los datos existentes parecieran indicar una asociación entre situación económica y aumento de los delitos. En efecto, a simple vista, se observa que el aumento en la tasa de delincuencia coincide con momentos críticos para la economía como la hiperinflación de fines de la década pasada o el impacto de la crisis mexicana a mediados de los 90.

¿Es posible hacer inferencias sobre la situación económica y los comportamientos delictivos? ¿Incide y si es así, de qué manera el crecimiento del desempleo en este

incremento de la violencia? Existen en el caso argentino algunos –pocos– estudios econométricos que intentaron medir esta asociación. ¿Cuales fueron sus conclusiones? En un caso (Pompei 1999), se afirma que la desigualdad en la distribución del ingreso incide más que el desempleo en el incremento de la violencia. Navarro (1997), por el contrario, concluye que es el desempleo factor clave para explicar el aumento de la delincuencia.

Pompei (1999) realiza un análisis econométrico del problema con datos del Gran Buenos Aires desde 1985 a 1997. La tasa de robos y hurtos es considerada la variable 1 Según la interpretación personal de funcionarios de la Dirección Nacional de Política Criminal, sólo se denunciarían un 50% de los delitos cometidos. Sin embargo, no existen aún investigaciones que precisen el nivel de la subdeclaración.

La probabilidad que una persona común tiene de ser víctima de un delito, que es lo que expresa la tasa de delincuencia, en realidad no es un indicador suficientemente sensible de la violencia en un país: habría que incluir otros como la tasa de muertes violentas o de muertes por armas de fuego.

Información aparecida en el diario Clarín (25/7/1999–pag. 32) basada en datos de la Dirección Nacional de Política Criminal dependiente e intenta probar la correlación con las siguientes variables independientes: a) tasa de desempleo, b) población desocupada/población total (en lugar de sobre la PEA), c) desempleo joven, d) coeficiente de Gini (distribución de ingresos), e) ingreso medio. De acuerdo con sus cálculos la tasa de desempleo –proporción de población desocupada sobre la población total –, y la tasa de desempleo joven arrojan niveles despreciables de relación.

Por el contrario, la equidad en la distribución –o mejor dicho la inequidad– medida través del coeficiente de Gini, registra una alta correlación. Algo similar sucede con el ingreso medio, aunque con un nivel de correlación menor. La covariabilidad, entre inequidad y

delito lleva al autor a inferir que una mera reducción del desempleo no garantizará la solución de los problema de seguridad. La mejora de los ingresos no acompañada con una mejora en la distribución no repercute en una reducción en las tasas de delincuencia.

Navarro (1997) analiza estadísticas de delitos a nivel agregado y desagregado según provincias. Parte de la hipótesis de la existencia de un significativo componente de cálculo racional en la acción delictiva: las personas cometen delitos porque esperan obtener beneficios superiores a los que obtendrían en actividades legales. Desde esta perspectiva hay incentivos positivos y negativos al delito, el que pasa a ser estudiado como «oferta de delitos». El razonamiento se apoya en la llamada “teoría de la disuasión”: supone que los códigos penales reflejan la función de desutilidad social de los distintos tipos de delitos.

Concluye que «(l)a situación de desempleo implica un menor costo de oportunidad de ingresar a la actividad delictiva, por un lado debido a que los ingresos legales en esa situación son reducidos, y por otro por una cuestión de disponibilidad de tiempo» (pág.27).

Por ende «..el delito se ha ido transformando en una actividad cada vez más rentable. Tanto las condiciones del sistema policial y judicial como las macroeconómicas y sociales han resultado ser significativas en la determinación de la oferta delictiva.” Considera, finalmente, que “las políticas que implican mayor certeza y severidad de las penas, así como las que mejoran las oportunidades en la actividad legal, serán válidas para controlar el crimen »

Más allá del interés que este tipo de enfoques despiertan, desde el punto de vista teórico-metodológico son discutibles. A nivel metodológico, es cuestionable en ambos trabajos la utilización de la existencia de una correlación como sinónimo de causalidad.

Pompei establece una relación entre inequidad en los ingresos y delincuencia pero deja sin respuestas el interrogante de cómo la desigualdad impactaría en los comportamientos individuales de modo de incrementar las tendencias delictivas. Por otra parte, no es ésta una relación universalmente probada. Ejemplos como el de Suiza muestran un coeficiente de Gini elevado y bajas tasas de delincuencia. O, en sentido contrario, en Uruguay donde el coeficiente de Gini es bajo, se registra un aumento importante de la delincuencia⁴ (CEPAL 1999). En el trabajo de Navarro, se parte de dos supuestos que son discutibles. El primero es que el crimen está exclusivamente motivado por una elección racional de costo-beneficio. El segundo, es la relación directa entre desempleo y delito sin tener en cuenta ningún tipo de mediación.

Pero ¿es válido el supuesto de que estamos frente a actores que realizan cálculos racionales antes de encarar cada acción? O, por el contrario, ¿estamos en presencia de protagonistas cuyo comportamiento no puede ser comprendido bajo este marco de análisis?

Esta es una pregunta clave en nuestra investigación. Nuestro punto de partida es que la asunción de comportamientos racionales es válida para lo que podría llamarse “crimen organizado”, es decir aquellos que están optando por una carrera criminal o que, al menos, realizan una planificación estratégica de sus acciones delictivas. El fenómeno más novedoso —o al menos, el que más preocupa a la opinión pública— no parece ser este tipo de delincuencia, sino el que podría calificarse como nuevas formas de delito y violencia, violencia que podríamos calificar de anómica, marcadas por el repentismo, por la falta de planificación; cuyos protagonistas no parecen tomar en consideración el riesgo ni la relación costo-beneficio de sus acciones.

La hipótesis de las que partimos es que muchos de los protagonistas de las nuevas formas de delito y crimen en la Argentina no actúan de manera racional en el sentido tradicional.

Para que un individuo se transforme en un actor racional es preciso contar con una base de socialización exitosa y un estado personal en el que pueda realizar las operaciones básicas que precisa todo cálculo costo-beneficio. La racionalidad del actor no es un don innato, sino una propiedad adquirida a poner en juego en ciertas acciones pero no en todas. Hasta no contar con las evidencias empíricas necesarias, se debería dejar en suspenso la presuposición de que los actores de las nuevas formas de delito y violencia actúen conforme a las reglas básicas del actor racional.

¿Por qué tanto énfasis en el tipo de racionalidad (o de irracionalidad) que guían a los actores? Porque no sólo es una cuestión básica no sólo para comprender la naturaleza del fenómeno delictivo sino porque constituye un dato esencial a la hora de establecer la. El Panorama Social para América Latina 1999 de CEPAL señala un considerable aumento de la tasa de homicidios entre la década del 80 y del 90 (de 2.6 a 4.4 homicidios por 100.000 habitantes, mientras que en Argentina, las cifras respectivamente son 3.9 y 4.8, a pesar del aumento del coeficiente de Gini). orientación de las políticas públicas. En efecto, las políticas de disuasión se basan en el supuesto de un actor racional. El axioma de base es que la información sobre el aumento de las penas y/o sobre la posibilidad de ser aprehendido aumentarían el riesgo de cometer una acción delictiva y, por ende, disminuyen la relación costo-beneficio. Pero si, tal como se hipotetiza, se trata de actores que se manejan con lógicas de acción alternativas, el fundamento de las prácticas disuasivas pierde eficacia. Toda política de seguridad debe, ante todo, saber a ciencia cierta, quiénes son esos individuos y cuál es la lógica intrínseca de sus acciones.

Otra falencia que se deriva de tal caracterización del actor es considerar al delito como una opción «ocupacional» racional frente al desempleo. Se postula entonces una relación directa entre aumento del desempleo y de delitos contra la propiedad. Al hacer esta

aseveración no se consideran importantes variables que pueden intervenir, como el poder disuasivo de las barreras normativas internalizadas en la educación, el uso de sustancias, el factor riesgo, la accesibilidad a las armas, a las oportunidades de delito, etc. Se imagina, además, una frontera tajante entre “delincuentes” y el resto de la población. Por el contrario pareciera haber grupos que combinan actividades consideradas ilegales con otras legales, sin que por esto se vayan construyendo grupos separados del resto de la sociedad. Pero tampoco puede analizarse sin más al crimen como una opción «ocupacional» equivalente a las otras; se precisa un abordaje más complejo que tenga en cuenta las diversas causas que juegan en la explicación del aumento de los delitos.

Ahora bien, pese al déficit informativo a que hacíamos alusión en párrafos anteriores, existen algunos datos que confirmarían nuestra posición de que algo ha cambiado en el mundo del delito, que no solo hay un incremento en la cantidad de delitos, sino que estamos en presencia de personas que actúan de manera distinta de aquella del crimen organizado y cuyos protagonistas no se comportan de manera racional sopesando el costo/beneficio de su accionar delictivo.

Tipo de delitos

Las estadísticas existentes señalan tres datos de importancia. El primero es el notable aumento de los delitos contra la propiedad ocurridos entre 1980 y 1995. En ese período este tipo de infracciones creció un 2341% en la provincia de Buenos Aires y explican más del 60% de los actos cometidos. En la ciudad de Buenos Aires, las cifras son similares: entre 1980 y 1996 las ofensas contra la propiedad aumentaron 2.701,3% y constituyen el 64.5% del total de los delitos cometidos⁵. Este dato ya de por sí reviste interés: hay que dar alguna

explicación acerca de este vertiginoso aumento. Pero esta información no es suficiente ya que nada nos dice acerca de si estamos o no frente a un nuevo tipo de delito y de delincuentes. Para ello recurrimos a otros datos. Uno de ellos es el aumento de homicidios dolosos ocurridos durante la última década. El otro dato⁶ –el más significativo para la hipótesis de que estamos frente a un nuevo tipo de delincuencia– es el aumento de homicidios cometidos en ocasión de otro delito, generalmente robo. Es decir, que el aumento de los delitos contra la propiedad se produce de manera más violenta que lo que sucedía anteriormente. La mayor circulación de armas, que se analiza más adelante, podría corroborar esta suposición.

Tasa de delincuencia (por diez mil habitantes) por año según tipo de delito. Años

1980. 1985, 1990/1996. Ciudad de Buenos Aires.

1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

TOTAL 83.9 198.9 204.6 142.2 102.7 126.7 211.9 397.6 418.5

Contra las personas

(doloso)

5.5 8.5 8.3 6.4 4.3 5.8 13.2 29.0 47.8

Contra la propiedad 54.5 169.3 169.2 106.4 70.2 88.8 162.1 275.5 270.0

Contra la honestidad 0.8 0.7 0.3 0.2 0.1 0.2 0.4 1.9 2.0

Contra la libertad 1.2 3.1 3.4 3.1 2.1 3.0 7.5 26.3 31.3

Otros 21.9 17.3 23.4 26.1 26.0 68.9 28.7 64.9 67.4

Fuente: Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, 1998

¿Qué ha sucedido con los homicidios que, por supuesto, es el delito que más aterroriza a la población? Los datos de principios de los 90 y los más actuales permiten Anuario

Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, 1998. Señalado por la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Los delitos contra la propiedad: comprenden hurto, hurto calificado, robo, robo calificado, estafa, defraudaciones, etc; contra las personas: implican hechos culposos (lesiones y homicidios), como dolosos (homicidio simple, lesiones leves, lesiones graves, disparo de armas de fuego y otros); contra la honestidad: delitos sexuales como violación, estupro, rapto, etc.; contra la libertad: comprenden amenazas y coacciones, violación de domicilio, privación ilegal de la libertad, etc. Y otros incluye: contra el honor, el estado civil, la seguridad, etc. hipotetizar un punto de inflexión en la tendencia. A comienzos de la década la tasa de homicidio, si bien había sufrido un incremento respecto a una década atrás (del 3.9 al 4.8), todavía estaba muy por debajo de otros países latinoamericanos⁸ y de Estados Unidos.

Según este indicador (tasa de muertes por armas de fuego cada cien mil habitantes) nuestro país aún se encuentra muy por debajo de los países (y en especial de las grandes urbes más violentos del mundo. Sin embargo, datos más recientes señalan un dramático acercamiento entre la Argentina y países que presentaban tasas de violencias muy por encima del país. Por ejemplo, en lo que respecta a muertes violentas por arma de fuego, en 1996 Buenos Aires (área metropolitana) alcanzaba una tasa de 12,3 (Kusznir, 1997, pág. 40), muy cercana al valor 13 de ciudades como México D.F y Nueva York (The Economist, 1997, pág. 36). De todos modos, consideramos que sería necesario contar con más datos antes de establecer alguna conclusión terminante sobre la eventual magnitud del aumento de muertes violentas en el país.

Las víctimas

Un análisis de las víctimas por nivel socio económico revela que en el año 1997 el 50% de las víctimas eran de clase baja y sectores con NBI. Sólo el 15% eran de clase alta, medias altas y profesionales independientes 15% y clase media baja 35%⁹ ¿Por qué la mayor parte de los delitos recae entre los sectores más carenciados de la población?. Una de las razones podría ser las diferencias crecientes en términos de seguridad en las distintas zonas de las ciudades. Como se analiza más adelante, en estos años se produjo un importante aumento de la seguridad privada custodiando a los barrios residenciales. No sólo la seguridad privada se distribuye inequitativamente en la población argentina, sino que algo similar sucede con la seguridad pública. Según la Encuesta de Desarrollo Social, realizada por la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación (1999), el 6.7% de los hogares están ubicados a más de 30 cuadras de una comisaría. Pero mientras esta distancia afecta al 1.9% de los hogares de mayores ingresos (quinto quintil) alcanza al 11.2% de los de menores ingresos (primer quintil). Se agrega así una desventaja más en los barrios más pobres: la inseguridad atenta directamente contra la calidad de vida.

8 Colombia 89,5; Brasil 19,7, Perú 11,5; Estados Unidos 10,1. Fuente: Banco Mundial cit. "The Economist, 8 de marzo de 1997", en Smulovitz, C, 1998.

Datos proporcionados por la Dirección de Política Criminal, Ministerio de Justicia de la Nación, 1999.

Los victimarios

Construir un perfil de los victimarios –edad, nivel socioeconómico, escolaridad alcanzada– es sólo posible a partir de los datos que surgen de las causas penales. Esta información

elaborada por el Ministerio de Justicia de la Nación (1999) para la ciudad y la provincia de Buenos Aires, tiene algunas limitaciones. En primer lugar, dado que sólo se toma en cuenta a los encausados, no está representando al conjunto de los delincuentes.

En segundo lugar, la información obtenida es para un solo año y, por lo tanto, no es posible conocer la tendencia. En tercer lugar, en la distribución por edades se tienen en cuenta tres categorías: 16-17 años, 18 a 20 años y 20 años y más. Por lo tanto, es lógico que en esta última categoría se acumulen la mayoría de los casos: el 82% en la provincia de Buenos Aires y el 85% en la Capital mientras que entre los 18 y 20 años se agrupan el 17.8% (provincia de Buenos Aires) y el 14.2% (en la ciudad).

En cuanto a su nacionalidad, el 97% de los sentenciados eran argentinos mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, la participación de los extranjeros era un poco mayor: el 13.7% no era argentino. La distribución porcentual según sexo del total de sujetos sentenciados, fue la siguiente: masculino 93.07% y 92.31% en provincia y ciudad respectivamente. De acuerdo con esta misma fuente, en la provincia de Buenos Aires, el 66.25% estaba casado, mientras que el 27.60% se encontraba soltero en el momento de la sentencia. En Capital Federal, se registraba una distribución porcentual similar: 67.22% solteros y 26.92% casados.

De acuerdo con el nivel de instrucción alcanzado, cerca del 90%, tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires, solo había cursado estudios primarios, mientras el 6% en la provincia de Buenos Aires y el 7% en la Ciudad tenían estudios secundarios cumplidos. En cuanto a las profesiones de las personas sentenciadas durante 1997, tomando las 11 profesiones en las que se registran el mayor número de casos, se observa que si bien hay una fuerte concentración entre quienes son clasificados como sin profesión, llama la atención el peso de la categoría empleados. Otras categorías ocupacionales que aparecen con frecuencia son las de albañiles, comerciantes, jornaleros, chóferes, etc. De todas

maneras dado que las categorías utilizadas no son excluyentes, no es posible hacer demasiadas inferencias.

El estado de las personas en el momento de delinquir señala que en muy pocos casos las personas al realizar estas acciones se encontraban alcoholizados o habían consumido estupefacientes: en más del 90% de los casos se considera que su estado es normal. Estos números pondrían en suspenso la habitual correlación que se hace entre droga y delito.

El último dato que nos interesa señalar es el de la situación judicial del procesado. De acuerdo con la misma fuente, el 73% de los procesados en la provincia no tenían ningún 11 antecedente judicial previo a la causa. La situación es un poco distinta en la Capital donde sólo el 53% no registra antecedentes judiciales. También en Capital la participación de los reincidentes sobre el total de los procesado es mayor. Estas cifras, si bien no pueden tomarse como definitivas, confirmarían la hipótesis de que estamos ante nuevos protagonistas de hechos delictivos.

La victimización

Las encuestas revelan que más del 80% de la población –en el Gran Buenos Aires– se sienten amenazados ya que perciben que pueden ser víctimas de algún delito. Percepción que, si bien no se condice con la experiencia personal, ya que menos de la mitad de la población encuestada fue efectivamente víctima de un delito, es atendible por el incremento en el número de delitos.

En una encuesta realizada en la provincia de Buenos Aires, se mostró que el temor a ser víctima de actos delictivos provoca cambios en los comportamientos, cambios que implican, en muchos casos, privaciones y, por lo tanto, un empeoramiento de su calidad de

vida. Así el 58% de los bonaerenses afirma que por miedo deja de concurrir a partir de determinada hora a ciertos lugares a los cuales quisiera ir. Otras privaciones frecuentes entre los encuestados son: dejar de salir de su casa a partir de cierta hora (52%), dejar de salir a la calle con cosas que les gusta (47%), dejar de ir a ciertos lugares aún de día (33%), pagar un servicio de seguridad privada (23%), y unirse con los vecinos para buscar soluciones conjuntas (23%). Incluso, por temor a sufrir violencia, el 6% de los encuestados manifestó haberse mudado a un lugar más seguro (Desarrollo Humano, 1998).

La sensación de inseguridad, además de provocar estos cambios en los comportamientos, se expresa en los reclamos de la gente e incide en la orientación de las políticas públicas. En una encuesta en la que se mide la percepción de la inseguridad el 81%¹⁰ de la población de Capital y del Gran Buenos Aires estuvo de acuerdo con el aumento de las penas en el Código Penal pese a que, paradójicamente, la mayoría cree que la causa de la delincuencia es la pobreza. El temor a ser víctima de un delito no sólo testimonia de la ansiedad en la que vive la población y restringe las interacciones sociales, sino que es un temible predictor de conductas tales como una mayor compra de armas, un apoyo a políticas represivas, etc.

10 Encuesta Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría (extraído de Smulovitz, C., 1998).

Gasto público y privado para la seguridad

Paralelamente al incremento de los actos delictivos se observa un aumento del gasto en seguridad tanto público como privado. En el presupuesto nacional (Policía Federal, Gendarmería. Prefectura y Servicio Penitenciario) se asignó en 1999 un total de 1.848 millones de pesos que significa un incremento del orden del 10% en los últimos tres años.

Los gastos provinciales pasaron de 2.188 millones de pesos en 1993 a 2.729 en 1997 registrando un incremento del orden del 24.5%. Este aumento no se distribuye de manera homogénea entre todas las provincias: mientras que el promedio nacional es de 83.6,12 hay provincias como La Rioja que gastan el doble (170.9), mientras que la de Buenos Aires está por debajo del promedio (75.6).

En cuanto al gasto privado, las armas registradas por el RENAR (Registro Nacional de Armas) pasaron de 1.100.000 en 1994 a 1.800.000 en 1999 lo cual implica un crecimiento anual del orden del 33%. Mas aún, se estima que un número similar se encontraría en el mercado clandestino (PNUD 1998). Las empresas de seguridad privada así como las de Seguridad electrónica habrían aumentado hasta 10 veces su facturación en los últimos años. Este aumento de la seguridad privada está indicando un problema con la policía: o es una institución que está sobre demandada o no tiene la confianza de la población. Por otra parte, pese al incremento del gasto público y privado, los delitos siguen creciendo. Más aún, se podría afirmar que la tenencia de armas por parte de la población civil incrementa la ola de violencia ya que se establece una suerte de círculo vicioso: como los delincuentes tienen armas y no hay confianza en la policía, las armas son la protección elegida por la población. Pero si efectivamente estamos frente a un actor que no toma en consideración el riesgo que para él significa cometer un homicidio la posesión de armas por parte de la población puede aumentar la ola de violencia. Igual que en otros sectores de la política pública, el aumento del gasto no es un buen indicador de la aplicación de una política eficiente. Se necesita contar con diagnósticos que permitan conocer mejor las razones del incremento de esta violencia, quienes son los que la cometen, el tipo de delito.

Datos extraídos de Leyes de Presupuestos Años 1997–1998–1999

Datos proporcionados por el Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos de la Nación.

Jóvenes protagonistas de acciones ilegales con uso de violencia

Antes de concentrarse en el análisis del trabajo de campo realizado, en este punto se presentan hallazgos de investigaciones realizadas en otros países sobre dos temas centrales en el debate. Se trata de la relación entre delito con pobreza y desempleo por un lado y de delito y droga por el otro. No se presentan estos ejes con el fin de proponer una extrapolación directa a nuestro país, pues las diferencias respecto a la historia, cultura, estructura social y políticas públicas moldean escenarios nacionales particulares. Pero dado que, de un modo u otro, estos temas aparecen en el debate local y muchas veces parecieran llegarse a consensos literalmente opuestos a las evidencias acumuladas internacionalmente, es importante rescatar la experiencia al respecto.

Delito y pobreza–desempleo

A pesar de que desempleo y delitos contra la propiedad aparezcan comúnmente asociados en la opinión pública, los trabajos científicos no se ha puesto de acuerdo sobre la validez de tal presuposición, evidenciando resultados divergentes según el período, región, país y fuente consideradas (Gillespie 1978, Freeman 1983). Los datos agregados mostraron durante décadas una cierta *correlación* entre el incremento del desempleo y del delito, pero a fines de los 80 Chiricos (1987), luego de una exhaustiva revisión de la evidencia empírica, demostró que tal relación positiva era casi insignificante. Esto llevó a que, según

el autor, a mediados de los 80 se generara un “consenso de duda” sobre la real existencia de una relación consistente entre desempleo y crimen que todavía perdura.

Con todo, el mayor problema sobreviene al pasar del nivel agregado al individual, puesto que la eventual existencia de una correlación general no significa que sean los mismos desempleados los que delinquen. Para esclarecer la relación entre los fenómenos el interrogante es *cómo* el desempleo originaría mayor criminalidad. En efecto, cuando se trata de explicar el aumento de la pobreza a partir del desempleo, es la disminución de los ingresos el lazo explicativo; pero al intentar comprender las causas del delito, ¿cuáles son específicamente sus vínculos?

En principio, hay que evitar la «falacia ecológica», es decir, la extrapolación de correlaciones válidas en un nivel general para utilizarlas como explicación de hechos individuales. De hecho, muchas investigaciones muestran que los victimarios tienden a ser jóvenes que aún no han entrado al mercado de trabajo. Pareciera ser que el debilitamiento del capital social local por causa del desempleo, no sólo restringe el acceso a oportunidades, sino que también deteriora los dispositivos de generación y mantenimiento de normas sociales, favoreciendo el fortalecimiento de normas alternativas que contribuyen al desarrollo de actividades ilegales. El consenso actual es que la privación económica conjugada con otros problemas locales coadyudaría al desarrollo de un medio social en el que se produce el aumento del crimen; sin que la experiencia individual de privación económica pueda ser considerada la única variable explicativa del delito.

Así lo ilustra el trabajo de M. Sullivan (1989) en tres complejos habitacionales de vivienda social (*Projects*) en la ciudad de New York, uno habitado por blancos, el otro por hispanos y el tercero por afro-americanos. Si en los tres la privación económica es similar, el capital social del conjunto, —el «capital comunitario»— es diferente. Los blancos son quienes más

contactos tienen con el mundo del trabajo, a partir de parientes, amigos y conocidos, lo que facilita la inserción laboral de los jóvenes. Los hogares hispanos y afro-americanos poseen un capital social menor, lo que dificulta la inserción laboral juvenil. No obstante, Sullivan no establece una relación directa entre falta de oportunidades y crimen. Enfatiza que ni la privación económica, ni la necesidad *per se* aparecen motivando la iniciación al delito. La declinación económica genera de modo indirecto condiciones de debilitamiento familiar y de pérdida de control comunitario, aumentando las probabilidades de la implicancia de los jóvenes en delitos.

En la compleja relación que aquí nos ocupa, la edad interviene como variable central, en particular en la conformación incipiente de “espirales delictivas”. Es el caso de los que habiendo cometido algún delito menor en una edad temprana, experimentan luego dificultades de inserción laboral. En tales casos, es más probable que, faltos de oportunidades, continúen delinquir durante el resto de su adolescencia. Y si continúan sufriendo el desempleo en el comienzo de su vida adulta, es probable que son los que más frecuentemente encaren una verdadera “carrera delictiva”, ya entonces con menores posibilidades de reinserción (Farrington *et al.* 1986). En contraposición, tal tipo de retroalimentación entre desempleo y delincuencia es menos habitual en los que pierden sus puestos cuando ya están establemente insertos en el mercado de trabajo. El rol socializador del trabajo es un potente inhibidor a la realización de actividades delictivas, aún en situaciones de profunda necesidad.

En suma, la evidencia empírica muestra que la existencia de una correlación entre desempleo y delincuencia se halla en pleno debate, estudiándose alternativas posiblemente

más fecundas, como la que existiría entre delincuencia y desigualdad social (Hagan y Peterson 1995). De todos modos, aún puede decirse que, a nivel de los datos agregados, el desempleo tiene cierta influencia en las causas de la delincuencia juvenil y crimen adulto. Pero también, al nivel individual, la delincuencia juvenil puede favorecer el desempleo adulto y posterior recaída en actividades delictivas.

Drogas y especialización del delito

Durante décadas los especialistas han discutido, sin ponerse de acuerdo, sobre la relación entre droga y crimen. Hay un segundo debate articulado a lo anterior: sobre la especialización entre los contraventores, es decir, si hay una especialización entre los autores de delitos o una tendencia a una amplia gama de actividades delictivas.

¿Cómo se establece el vínculo entre ambos interrogantes? La teoría económica de la droga supone que las necesidades financieras creadas por la adicción lleva a la realización de delitos contra la propiedad para poder solventar el consumo. Postula una relación linear, causal entre droga y crimen. Sin embargo, los estudios sobre la materia no son concluyentes. Si hay datos sobre la *correlación* entre droga y criminalidad, no se está tan seguro que esta correlación sea causal. Como afirma uno de los especialistas mundiales sobre el tema, J. Fagan (1990): “el peso de la evidencia sugiere que el uso de substancia provee un provocativo contexto para la violencia, pero hay limitadas evidencias que el alcohol o las drogas directamente causen violencia.” Es decir, los trabajos más rigurosos sobre el tema descartan una relación causal directa entre drogas y violencia. Parten de la constatación de que la mayoría del consumo de drogas no genera violencia, por lo cual el peso explicativo no puede sino ser limitado.

En este punto es que se articula el debate sobre la especialización. Hay quienes afirman que la implicación en las llamadas «conductas desviantes», como la drogadicción y el crimen, son de carácter general y no especializadas: los responsables de delitos tienden a cometer una amplia gama de hecho y no se limitan a una serie restringida de los mismos.

Por ende, no es que primero se vuelvan adictos y en segundo lugar se dediquen al crimen para financiar la adicción, sino que ambos aparecen como fenómenos no ligados causalmente, sino que responden, a lo sumo, a una pauta común de ruptura de normas que *antecede* a ambos hechos. Si tales presuposiciones son correctas, las políticas que tratan de disminuir la criminalidad mediante el control de la droga, –políticas de alto costo económico y humano–, se basan en ideas erróneas.

Se trata de un tema central para nuestro país. La opinión pública tiende a establecer una relación causal entre ambos hechos. Muchas políticas de seguridad se basan en el control de la droga como base de la lucha contra el crimen. Como se vio en el capítulo anterior, datos del Ministerio de Justicia de la Nación (1999) desmienten la existencia de tal correlación. Así, un diagnóstico erróneo estaría dando lugar a propuestas políticas equivocadas, políticas que insumen un alto costo humano y económico. Urge entonces dejar los prejuicios de lado y considerar la relación que realmente existe en la Argentina entre ambas cuestiones.

En las páginas siguientes se exponen los resultados del trabajo de campo realizado entre enero y septiembre de 1999. Este consistió en entrevistas con jóvenes de entre 14 a 25 años que habían realizado distintos actos considerados ilegales. Se incluyeron aquellos donde haya habido uso de violencia: en particular robo a mano armada ya sea en la vía pública, en comercios o domicilios particulares. En algunos casos existió violencia, con heridos o muertos y en otros no se había llegado al uso de las armas. También se incluyeron casos de

violación y privación ilegítima de la libertad, pero en el contexto de acciones con objetivos de robo. No fue fácil limitar el tipo de casos a considerar, pero dado el carácter exploratorio del trabajo se prefirió incluir una amplia gama de los mismos, sin desconocer la existencia de grandes diferencias entre los tipos de actos.

Gran parte de los entrevistados estaban internados en Institutos de Menores o en otros centros de detención para adolescentes en conflictos con la ley. Los menos estaban en libertad ya sean por haber cumplido sus penas, hallarse en regímenes de libertad asistida o, simplemente, por no haber sido aprehendidos. Para poder acceder a ellos se contó con la colaboración de una veintena de personas, entre contactos institucionales (trabajadores sociales, psicólogos, guardianes y docentes), también hubo contactos con personas que mantenían un vínculo no profesional con el tipo de jóvenes que nos interesaba.

En las próximas páginas intentaremos describir el accionar de estos jóvenes. Luego de presentar un perfil sociodemográfico de los entrevistados, se dedica una parte de este capítulo a tres interrogantes. El primero, acerca de lo que sucede con el marco institucional de la familia, la escuela y la comunidad local. En segundo lugar, la reconstrucción, desde el punto de vista de los actores, del sentido y las razones de sus actos. Por último, nos dedicamos al tema más inquietante: el uso innecesario de la violencia en hechos delictivos.

Al ser un primer trabajo sobre el tema las consideraciones presentadas son de carácter general. Sin dudas será necesario profundizar en trabajos posteriores cada una de las dimensiones de análisis presentadas así como comprender su interrelación. También se deja para presentaciones futuras un análisis más detallado del trabajo de campo y de las diferencias existentes entre los distintos entrevistados.

Perfil de los entrevistados

¿Quiénes fueron los jóvenes entrevistados? Sobre 55 casos, poseemos datos suficientes de 43: 36 hombres y 7 mujeres; 7 tienen entre 13 y 16 años, 17 entre 17 y 21 entre 22 y 30 y el resto por encima de 31. Es decir, el 55% son menores de 21 años. Son solteros 35, 4 casados y 4 separados y 7 tienen hijos. Si se tiene en cuenta el nivel de escolaridad alcanzado, 12 tienen primaria incompleta, 15 primaria completa, 12 secundaria incompleta (3 de ellos en curso), 1 secundaria completa. Es significativo que el 30% tenga primaria incompleta, pues la cobertura de la primaria es prácticamente universal en todo el país y aún en los sectores sociales más desfavorecidos.

Se trata de jóvenes nacidos mayoritariamente en Buenos Aires: 24 casos fueron en el conurbano bonaerense, 7 en la Capital Federal. Sólo 3 proviene del interior del país y 2 fuera de él. En cuanto a la composición familiar, poseemos datos sobre 39 casos. De estos, 9 viven con ambos padres, 5 con la madre y una pareja que no es el padre, 3 con su padre sin su madre, 13 con la madre sola y los 9 restantes en hogares con otro tipo de arreglo familiar (p.ej. hermanos, en pareja, con tíos, abuelos, etc.). Respecto a los ingresos totales de sus hogares (excluyendo los de los jóvenes), de los 24 hogares de los que poseemos datos, 8 se hallaban debajo de la línea de pobreza, mientras que 16 por encima de la misma (se tomó como medida \$ 150 per capita).

La mayoría de los entrevistados ha trabajado alguna vez, tanto antes como una vez comenzado a realizar actividades ilegales. Al momento de la entrevista, sobre 36 casos, 11 ejercían alguna actividad. No se trata de un dato significativo, puesto que la mayoría se hallaba internado o bajo tutela legal, lo que dificultaba una eventual inserción laboral. De todos modos, es central comprender que el mundo del trabajo no les es ajeno, no se trata de

una población dedicada a acciones ilegales a tiempo completo, sino que combinan –en un mismo momento o según el período– actividades consideradas ilegales con las legales.

¿Cuáles son o fueron sus ocupaciones? Una amplia gama de actividades poco calificadas, como albañil, cadete, empleados de pequeños comercios, fletero, niñera, trabajador de limpieza, mensajero, lavador de autos; lo habitual en jóvenes de baja calificación. Pero lo sorprendente es lo que ha sucedido con sus ingresos. Se compararon los ingresos promedios de las 3 últimas ocupaciones, en los 11 casos que los hubo: \$ 400 en el primero, \$ 301 en el segundo y \$ 299 en el tercero. La evolución descendente de las remuneraciones se contrapone con el habitual aumento paulatino que implica una carrera laboral. También la estabilidad de las ocupaciones fue disminuyendo: en la primera, la duración promedio fue de 20 meses, mientras que las segundas y terceras ocupaciones la misma fue, en promedio, 10 meses.

En resumen, nuestros entrevistados son jóvenes de sectores populares provenientes tanto de hogares pobres como no pobres. Es llamativa la altísima incidencia de educación primaria incompleta, un número de familias no intactas que podría ser más alta que la media así como trayectorias laborales de signo descendente en relación con los ingresos.

Los marcos integradores

Al hablar de déficits de los marcos integradores nos referimos a algunos aspectos de la experiencia actual de estos jóvenes en sus familias, escuelas y en la comunidad barrial así como en relación con los grupos de pares.

La familia

Cuando un joven comete un delito, la mirada pública se posa inmediatamente en su familia buscando en ella razones de su accionar. Imágenes de familias desestructuradas, madres solteras o abandonadas, en suma de alguna conflictividad interna, se repiten una y otra vez. Ahora bien ¿cuán hay de cierto en todo esto y cuánto es producto de una "ideología familista" que, ante la necesidad de hallar una explicación, establece demasiado rápidamente una relación causal entre delito y "problemas familiares"? Y, aun si tal lazo causal existiere, faltaría establecer *como* la desestructuración familiar genera o refuerza tendencias pre-existentes en los jóvenes.

Dado el gran peso explicativo que la opinión pública local tiende a otorgarle a la familia, es necesario examinar cuidadosamente las evidencias acumuladas sobre el tema.

Ante todo, es evidente que la influencia de la ruptura familiar no puede sino ser limitada; al fin de cuentas, la gran mayoría de los hijos de familias no intactas no realizan actos contra la ley. M. Free (1991), al revisar las experiencias acumuladas, concluye que no existen evidencias suficientemente para postular taxativamente una relación positiva entre desestructuración familiar y delincuencia. El peso del componente familiar varía según el tipo de ruptura (divorcio vs. muerte), edad y género de los hijos, nivel socioeconómico, raza y, sobre todo, tipo de crimen.

Existen corrientes teórico-metodológicas críticas hacia el acento puesto en tal relación.

Una primer limitación metodológica reside en que, al tratarse por lo general de estudios comparativos y no longitudinales, es difícil aislar el efecto disruptivo de la desestructuración familiar. Para hacerlo sería necesario el seguimiento de una cohorte antes y después de la ruptura familiar. Hay también estudios norteamericanos que cuestionan la confiabilidad de los datos usados para establecer el lazo causal, dado que los hijos de

familias no intactas son aprehendidos por la policía más frecuentemente que los que provienen de hogares intactos (Rankin 1983).

A pesar de los reparos presentados, es innegable que la mayor parte de las investigaciones muestran alguna correlación entre familias no intactas y acciones ilegales.

De lo que se trata es de comprender cuál es la eventual relación causal, a fin de no confundir correlación con causalidad, ya que lo primero indica una concomitancia de variables, sin por ello autorizarnos a establecer algún lazo causal entre ambas. Entre los factores que conectan familia no intacta con conductas conflictivas de los hijos, se destaca el déficit de control por la ausencia de un adulto en los hogares monoparentales. Para los teóricos del control social informal, un hogar monoparental está asociado con menos lazos familiares, por ende con menor interdependencia de sus integrantes y débiles acciones disuasivas ante una eventual conducta desviante. Un segundo factor causal se refiere a los déficits de socialización. La familia es el agente básico de internalización de valores sociales. La desestructuración familiar temprana dificultaría tal rol, dejando un déficit en la internalización de normas sociales.

Ahora bien, ¿qué sucede en la Argentina? Si la cantidad de evidencias acumuladas en el caso americano no nos permite ser concluyente sobre la relación familia-delinuencia, menos podemos establecer juicios sobre la situación local donde las investigaciones son escasas. Por lo tanto, lo que establecemos a continuación son sólo una serie de consideraciones generales, a partir del trabajo de campo. Una primera característica es que, si bien hay bastante hogares no intactos, los lazos familiares no parecen ser una fuente de grandes conflictos para los jóvenes, al menos de forma manifiesta. Es más, en muchos casos, la relación familiar era –siempre según la evaluación de los jóvenes– muy satisfactoria. Así, en los hogares no intactos, se señalaban vínculos muy significativos, en

particular la madre, la abuela o algún hermano mayor. Es con respecto a ellos que sienten culpa por haber delinquido y su figura hace las veces de ejemplo o guía para la reinserción. En algunos casos, hasta combinaban acciones ilegales de envergadura con un puntilloso cuidado de los lazos familiares, como el joven que afirmaba que sólo asaltaba supermercados hasta las 19 horas, porque 19.30 iba sin falta a la parada del colectivo “para esperar a mamá y cargarle las bolsas hasta la casa cuando viene del trabajo.”

Sin embargo, se trate de familias intactas o no, la característica común es una dificultad de control sobre las actividades de los jóvenes, manifestado de dos modos. Uno, el –al menos aparente– poco conocimiento de los padres del accionar de los hijos y lo segundo, el fracaso reiterado de los medios de regulación de sus comportamientos.

En cuanto a lo primero, muchos padres argumentaban no saber del accionar de sus hijos hasta que fueron aprehendidos por la policía. ¿Puede ser realmente así? Es realmente poco creíble, ya sea porque poseían una trayectoria delictiva de cierta data o porque habían manifestado signos de problemas –violencia en la escuela, participación en bandas–, si bien los padres no tenían porqué considerar necesariamente a tales conductas como predictoras de acciones ilegales.

Lo segundo son problemas de regulación familiar interna. Aun cuando se hubieran detectado problemas, los medios habituales para ejercer el control sobre los hijos no eran eficaces. Sucede como si las familias agotaran sus recursos de regulación interna (hablar con los hijos, penitencias, hasta los castigos físicos) y en un punto se les otorgara tácitamente autonomía sobre sus acciones fuera del ámbito privado. Es un modo de resguardar el equilibrio en un mundo privado cargado de todo tipo de tensiones, mediante la no injerencia paterna en lo que sucede más allá de los límites del hogar. En este punto cobra sentido el aparente desconocimiento: es probable que muchos padres conocieran el accionar

de sus hijos pero que, ante la dificultad de establecer algún límite, construyeran un manto de ignorancia sobre los hechos.

Existen otros factores a investigar para elucidar el aparente “déficit normativo” en los hogares. Algunos padres pueden llegar a justificar a sus hijos, negando la responsabilidad de estos o culpando de todo a las “malas juntas. También en ciertos casos, los recursos obtenidos por los chicos mediante sus robos, neutraliza el descontento de los padres y supone un alivio financiero para el hogar (un joven afirma “la primera vez que traje una campera nueva me preguntaron de donde había sacado la plata, la segunda vez ya no preguntaron nada”). Otro tema complejo se refiere a la existencia de un “clima de época” anómico: ¿cuánto de la erosión normativa de los medios legítimos de acceso a objetivos sociales –el estudio y el trabajo– no es secretamente compartido por los padres, lo que los hace menos adversos a las acciones de sus hijos?

La escuela

Al igual que en el caso de la familia, la relación entre escuela y delito también se halla en pleno debate. En el presente, si bien existe consenso acerca de los efectos negativos de la deserción, las investigaciones americanas actuales no encuentran una relación directa entre deserción escolar y delincuencia (Figueira-McDonough 1993). En líneas generales, se considera que la escuela no interviene en la génesis de conductas delictivas, pero su accionar favorece o contrarresta tendencias gestadas al exterior de ella.

La pregunta es, una vez más, sobre *cómo* precisar tal eventual relación. En primer lugar, al igual que la ruptura familiar, la deserción escolar erosiona el capital social de los jóvenes, debilitando su integración y el control normativo sobre ellos. En segundo lugar, la escuela es un agente de internalización de normas sociales, por lo que la deserción provocaría un

déficit en la socialización. Por último, una menor permanencia en el sistema educativo disminuye las chances de inserción laboral futura, aumentando así el riesgo de recurrencia a medios ilegales para ganarse la vida.

Ahora bien, las trayectorias educativas de los jóvenes entrevistados están marcadas por fracasos, mala performance intelectual y/o disciplinaria, aunque no necesariamente por la deserción o la expulsión. Un rasgo común en los entrevistados es la escasa importancia que la escuela parece ocupar en sus vidas. Tanto entre los que concurren como entre los que no, la escuela no es un tema que les merece gran reflexión, crítica o preocupación. Si bien, esto no es totalmente novedoso, marca un deterioro respecto a lo que encuentran otras investigaciones con jóvenes de sectores populares. Por ejemplo, J. Auyero (1992) señala en un trabajo realizado a principios de esta década que la escuela, aún desvalorizada, seguía teniendo un lugar importante en sus vidas.

Manifiestan, a lo sumo, una relación totalmente instrumental: el título es necesario para postular a distintos trabajos; todos ellos de muy baja calificación, como repositor en un supermercado o vendedor en un comercio. La visión instrumental se refuerza porque el diploma es sólo un requisito exigido, sin que los conocimientos que certificaría se consideren necesarios para el desempeño de los puestos en cuestión. Aún los que repitieron varias veces no la consideraban “difícil”, sino que la repitencia sería producto de su desinterés, el recurrente “aburrimiento”.

En cuanto a la situación de las escuelas, los docentes de “colegios difíciles” describen instituciones desbordadas por los problemas cotidianos: la reforma educativa, los bajos salarios y los conflictos de los alumnos “normales”. Nadie está preparado para tratar con adolescentes violentos, no hay personal especial que pueda hacerlo. A su vez, la inclusión de octavo y noveno año genera más problemas al implicar el ingreso de alumnos

adolescentes que empiezan a interactuar con los pequeños. Se respira un clima de tensión: chicos provenientes de hogares conflictivos, que expresan su violencia en la escuela, con sus compañeros y hasta con los docentes. Estos últimos se quejan también porque los padres se muestran muy agresivos en su contra.

Tal clima conflictivo lleva a que en muchas escuelas se excedieran límites hasta entonces impensables, como por ejemplo insultar a la maestra, lo que denota el debilitamiento del contexto normativo. Ante tal situación, el cuerpo docente aparece dividido entre dos posiciones encontradas. Están quienes argumentan que hay que separar a esos chicos de la escuela pues atacan a sus compañeros, impiden el desarrollo de las clases y generan un ejemplo negativo al resto (“un adicto produce otro adicto” decía un maestro de 7º grado); posición que es por su parte reforzada por la presión de muchos alumnos y de sus padres. Sin embargo, los pro-expulsión no apelan necesariamente a la metáfora de la “manzana podrida que pudre al resto”, de claro corte autoritario, sino a la carencia de recursos, tiempos y saberes para encarar solos el problema. Esgrimen la necesidad de administrar recursos y energía escasos pues los casos problemáticos exigen mucho trabajo y atención, a expensas del grueso de los alumnos. La posición opuesta es la de los docentes que, aún reconociendo las dificultades, sigue prefiriendo mejor “mantener a los 23 chicos en la escuela” a toda costa, porque “aunque no aprendan nada” mientras estén allí al menos se aseguran de que estén dentro de un marco institucional. En algunas de estas escuelas pareciera producirse un desplazamiento general de roles: los docentes y directivos concentrando el grueso de su energía en la cuestión disciplinaria, los porteros y administrativos controlando las puertas y los muros para que los chicos no se escapen, los alumnos sobrepasando límites antes inimaginables.

En resumen, pareciera que la escuela no constituye un marco integrador para estos jóvenes: ya sea por haber desertado o por las dificultades existentes cuando permanecen.

Sin duda es necesario trabajar en la escuela para evitar la deserción de los jóvenes más difíciles y, en el caso en que sea imposible retenerlos, brindarles alguna alternativa que evite la pérdida de un marco integrador fundamental.

La comunidad local

¿Qué marco integrador proporciona la comunidad local? Los trabajos sociológicos ponen acento en todas miradas distintas. Habitualmente, para los autores europeos, barrios homogéneamente obreros son un *locus* central de integración, socialización y transmisión de valores de la clase trabajadora, como aparece en R.Hoggart (1970) para Inglaterra y F. Dubet y D. Lapeyronnie (1992) en el caso francés. A los norteamericanos, por su lado, más que la integración, les preocupa el *control social* formal e informal que la comunidad ejerce sobre sus integrantes.

No se trata de acciones mutuamente excluyentes, sino complementarias; en todo caso, al menos la integración social posee un componente de control social formal e informal. Aún así, los presupuestos y conclusiones de cada abordaje difieren entre sí. En primer lugar, respecto de la homogeneidad-heterogeneidad barrial. En Europa Occidental, la fuerza integradora de las barriadas obreras residía en gran medida en su homogeneidad social. F. Dubet y Lapeyronnie (op.cit.) describen a los suburbios *rouges* franceses como un «modo de organización social que resulta de la articulación de una comunidad popular y de una conciencia de clase obrera, en torno a un sistema político municipal. » (1992, p.49).

Estados Unidos aparece como la contracara de esta imagen: no se trata de comunidades obreras integradas, sino de ghettos de *underclass* aquejados de déficits de integración. Allí, la homogeneidad es sinónimo de la segregación socio-espacial de una grupo excluido del *mainstream* americano. La experiencia del *ghetto* contribuiría a la emergencia de conductas ilegales en los jóvenes por tres vías: la menor calidad de los servicios públicos ofrecidos, en particular la educación; la baja exposición a modelos de rol exitosos, reforzando así el descreimiento frente a los medios de movilidad social legítimos, como el trabajo y, por último, por la carencia de contactos con sectores mejor posicionados que posibiliten el acceso a oportunidades de movilidad social.

Ahora bien, ¿Cuál fue el rol integrador de los barrios populares en el conurbano bonaerense? El Gran Buenos Aires se fue poblando gracias a políticas urbanas implícitas que permitieron el acceso masivo de las clases populares al terreno y a la casa propia, caso singular en América Latina (Prévot-Schapira 1995). A partir de 1940 se ha ido formando en el conurbano un denso entramado institucional, pero focalizado en problemas de hábitat. A diferencia de USA, en el caso argentino, la cuestión racial estaba ausente y, a diferencia del caso francés, la cuestión obrera era patrimonio de los poderosos sindicatos, organizados en los lugares de trabajos; *grosso modo*, las acciones barriales y sindicales han seguido dos caminos paralelos. El barrio no parece haber sido entonces, como en Europa, un escenario central de la integración obrera, pero sin duda contribuyó a la conformación de una identidad obrera –o más bien “trabajadora”– reforzando lo que acontecía en el mundo laboral.

Hoy, cuando el mundo del trabajo pierde su rol integrador de antaño, la comunidad local tampoco puede suplir parte de este lugar vacante. Los jóvenes entrevistados hablan de barrios caracterizados por un anonimato –más construido que real– donde la gente “hace

como si no se conociera”, apenas se saluda y “nadie se mete con nadie”. El anonimato ficticio es una forma de construcción de distancias internas a fin de asegurar una convivencia pacífica.

Ellos viven en la precarización institucional de su hábitat. No es que no haya ningún tipo de trama asociativa en los barrios, sino que cuando ésta existe ellos no participan de ellas; en parte excluidos por ser los “malos” del barrio, los “perdidos” y en parte por el deseo propio de los jóvenes de crear sus propios lugares. Aunque tampoco tienen sus espacios: no hay ni instituciones ni lugares físicos que los jóvenes consideren como suyos. Sólo les queda la calle, éste es su lugar de encuentro. Pero a más allá de la trama institucional, la relación intergeneracional en los barrios populares parece estar en problemas. En la cultura obrera siempre existió un margen de tolerancia para las conductas de los adolescentes: las peleas entre barras, una borrachera, eran parte del pasaje de la adolescencia a la adultez (Hoggart op. cit.). Hoy no sólo la idea de pasaje entra en crisis puesto que el punto de llegada –la cultura obrera– se ha debilitado, sino que los mayores ven a estos jóvenes no sólo muy diferentes sino hasta embarcados en acciones –cuya imagen más cruda es el consumo de drogas– que les resultan imposibles de aceptar.

En síntesis, se adopte tanto una mirada más puesta en la integración como en el control social informal, al igual que el resto de los marcos institucionales, la comunidad local no es ajena a la precarización actual. En el contexto de la crisis de la familia, la escuela y, sobre todo, del mundo del trabajo, ella tampoco puede brindar marcos integradores para los jóvenes.

Los grupos de pares

La influencia de los grupos de pares en la realización de actos ilegales es otro tema centrales de la sociología del crimen anglosajona, lo cual es comprensible dado que la mayoría de tales acciones se cometen en grupo (p.ej. Sanchez Jankowski 1991). En general, los estudios han estado tan centrados en los *gangs* y bandas de filiación étnica, que ha llevado a suponer la existencia de una subcultura delincuente ligado a minorías estigmatizadas. Sin embargo, otros enfoques han mantenido el interés por el grupo de pares, sin por ello presuponer la existencia de una subcultura particular. Tales estudios sirvieron para desmentir la presuposición de una subcultura específica de ciertas minorías, ya que verifican comportamientos similares en distintas poblaciones, no perteneciente a ningún grupo minoritario, como en estudios realizados entre población blanca de Londres (ver Hagan y Peterson 1995).

Ahora bien, ¿qué se observa en el caso argentino? Pareciera que los grupos de pares cobran importancia como marcos de inserción para los jóvenes pero sin que se conformen lazos tan fuertes, como los existentes en las bandas o *gangs* descriptas en los trabajos americanos. El caso típico es el de grupos formados en los barrios y no en el interior de instituciones como la escuela o clubes, sin un líder definido y en el que sus integrantes no están unidos, como en el caso americano, únicamente por lazos fuertes. En los grupos coexisten dos tipos de relaciones: un grupo de referencia general unidos por lazos débiles, con el que sólo comparten códigos, pero no más que eso. A pesar de su fragilidad interna, actúan como grupo de referencia al ser el principal orientador de la acción. Luego existen dúos o tríos de lazos muy fuertes. Sólo con ellos se comparten códigos de amistad tradicionales: intimidad y ayuda mutua. Juntos –aunque no exclusivamente con ellos– realizan las acciones ilegales. Con los lazos fuertes se comparten códigos de lealtad: no se registran traiciones, del tipo “buchoneo” cuando son aprehendidos por la policía, lo que sí sucede con los lazos débiles.

La referencia al grupo de pares se articula con una visión temporalmente limitada de las conductas criminales, lo que llamamos el etapismo, que se observa a veces no sólo en los jóvenes sino también en sus padres. Se trata de una visión justificadora de las acciones cometidas en tanto “macanas” de la juventud, aún en el caso de delitos graves, como el homicidio. Al naturalizarlas como propias a una edad, ellas cesarán por el mero paso del tiempo “cuando me ponga a trabajar y haga una familia”. Es una forma de desresponsabilización presente y futura, ya que el etapismo permite descartar una posibilidad alternativa: que esas “macanas” de juventud sean los primeros pasos de una carrera criminal en ciernes.

El lugar de los grupos de pares como orientadores de la acción de los jóvenes se ve favorecido por un contexto que muestra signos de creciente segregación intraclase e interclase. En el interior de su misma clase social, van disminuyendo los intercambios cotidianos tanto en sus familias como en sus barrios y escuelas. En dichas instituciones se van delimitando fronteras internas donde, muchas veces con la intención de mantener un equilibrio, se establece una férrea distancia con estos jóvenes. Simultáneamente, la creciente homogeneización social de barrios, escuelas y demás instituciones van reduciendo sus oportunidades de interacción con otros sectores sociales. Los que concurren a escuelas, lo hacen en las de peor calidad, que son en general las únicas a las que tienen acceso los alumnos de niveles sociales más bajos. Sus barrios se van vaciando de clases medias y, en el caso que haya sectores heterogéneos, las fronteras locales acentúan –a veces de forma muy violenta– la segregación social. Todo parece indicar que se estarían perdiendo los espacios de interacción, los “puentes” entre los grupos sociales. Y tal homogeneización socioespacial, como R. Katzman (1999) ha demostrado en un reciente trabajo sobre Montevideo perjudica, por sobre todo, a los jóvenes de sectores más bajos.

Déficit normativo, segregación social y preeminencia de normas locales son procesos que se retroalimentan. En efecto, las normas que se generan en el grupo de pares precisan para su efectividad de un grupo endogámico, cerrado hacia el exterior. El contacto con otros grupos, que cuestiona la legitimidad de dichas normas, compite con su eficacia. Por ello, las normas locales precisan de cierta “clausura” social, una reducción de los contactos con los grupos que eventualmente puedan cuestionar, competir y, por ende, restar eficacia a los dispositivos locales orientadores de la acción.

En resumen, asistimos a un proceso conformado por tres dinámicas mutuamente reforzadas. En primer lugar, el déficit de los marcos integradores que proponía la familia, escuela y comunidad local. Frente a esto, adquieren más relevancia la influencia de los grupos de pares como orientadores de la acción. Por último, estas normas locales requieren para su eficacia de una segregación inter e intraclase que pareciera estar incrementándose.

Lógica y sentido de las acciones

¿Cómo elucidar el sentido de estas acciones? Para comenzar a desentrañar tal compleja cuestión partimos de la constatación que las demandas de consumo de estos jóvenes son comparables a las de sus pares de clases sociales superiores. Ellos aspiran a ropa de determinadas marcas, zapatillas, dinero para diversión y hasta conocer el interior del país o países extranjeros.

La creciente homogeneidad de las pautas de consumo de los jóvenes urbanos por la influencia de los medios de comunicación y el aumento de la tasa de escolaridad no es un fenómeno exclusivo de la Argentina. Se trata de una generación que, ha diferencia de muchos de sus abuelos y de algunos padres, es esencialmente urbana. Han nacido en

Buenos Aires y comparten parámetros de consumo propios de las clases medias. Pero sobre todo, aquello que desean, lo quieren ya. Es una característica típica de la adolescencia, que adquiere una significación particular pues, en el caso que nos ocupa, para obtenerlo deben sin dudas infringir normas legales. Comprender este inmediatismo es central para explicar los delitos contra la propiedad. En efecto, robar aparece como la única forma de acceder a la satisfacción de sus necesidades raudamente. No se roba con la intención de acumular o ahorrar dinero, sino para realizar un gasto en el momento. A veces son para consumos individuales, ropa, viajes, en otros de alcance grupal, como ir a bailar, comprar cerveza y, hasta en un caso, para festejar un cumpleaños.

Inmediatismo y falta de planificación de las acciones están relacionadas. En efecto, al interrogar sobre los robos, en particular sobre los primeros, el repentismo es su característica compartida. Testimonios del estilo “estábamos en la calle, vimos aparece una vieja con un bolso y nos mandamos” muestran la falta de planificación de los hechos. No hay en general un plan previo en lo que concierne a la elección de la víctima y la situación, a un intento de minimizar el riesgo, de no dejar rastros, etc. Pero no deben ser caracterizados tampoco como meros hechos reactivos o irracionales. Es necesario investigar qué se oculta detrás del repentismo. Si alguien puede “mandarse” a robar de forma aparentemente espontánea es porque las normas internalizados que debían impedir tales conductas ya habían previamente fallado.

El repentismo es un tema central a la hora de planificar políticas públicas puesto que éste pone en cuestión los presupuestos de la “teoría de la disuasión” en los que se basan propuestas más corrientes sobre el tema en la Argentina. Se supone que el aumento de las penas y de la posibilidad de ser aprehendido al cometer un delito tendría un efecto disuasivo sobre eventuales delincuentes. Cuando éste planifique sus acciones, el mayor

costo eventual de la misma (las probabilidades de ser aprehendido y dureza de la pena) lo desaconsejará de tomar tales rumbos. Pero la teoría de la disuasión presupone un actor racional que planifica con anticipación y estratégicamente sus acciones, sopesando los costos y beneficios de las distintas opciones que se le presentan.

Al no haber una planificación explícita, las acciones de los jóvenes entrevistados no se revela guiadas por cálculos de costo–beneficio. No sólo porque carecen de la información necesaria para la realización de tales cálculos, sino sobre todo porque tal tipo de racionalidad económica requiere de un grado y forma de socialización que no es la que estos jóvenes expresan. Sus lógicas de acción, como veremos a continuación, se valen de otros recursos y significados.

Las tres lógicas de acción

Al hablar aquí de “lógicas de acción” hacemos referencia a la racionalidad intrínseca al proceder de los distintos individuos desde el punto de vista de un observador externo (Dubet 1994). En tanto observadores, es posible reconstruir en los jóvenes entrevistados lógicas de acción que se reiteran en gran parte de los casos: la lógica de la necesidad, del ventajeo y del aguante. Salvo en la primera, en las dos restantes utilizamos denominaciones tomadas de los mismos actores. Las 3 lógicas se refuerzan mutuamente, pues son solidarias entre sí y no se plantean tensiones entre ellas.

En primer lugar, sus acciones están regidas por la lógica de la necesidad. Estos jóvenes no tienen un peso. Juntan las moneditas de 5 y 10 centavos para viajar, para comprar cerveza, marihuana o ir a bailar. Cada centavo tiene para ellos valor, por lo que a la vista de un observador de clase media, sorprende la importancia que le otorgan a “botines” sumamente

exiguos. En efecto, obtener 20, 10 o hasta 5 pesos en un robo no es visto como un fracaso, sino que “al menos permite hacer algo.”

El horizonte es el de la falta total de dinero para sus consumos adolescentes. Aun cuando no provengan de hogares pobres, sus demandas están muy relegadas o directamente excluidas de los criterios familiares de asignación de recursos. El estado de necesidad para el mínimo consumo es una experiencia central. Para escapar de él, cualquier recurso puede ser válido: pedir, trabajar, “apretar” a alguien en la calle, robar; según los códigos que comparten, prácticamente cualquier medio es legítimo si permite obtener dinero. Se trata de un tema central a la hora de pensar políticas, pues un requisito clave es resolver este estado de necesidad constante, proveyendo de recursos a los adolescentes.

Sin embargo, si todos los medios son legítimos, es porque la lógica de la necesidad se refuerza con la lógica del ventajeo. Su definición podría ser la siguiente: en toda interacción en la que medie un conflicto de intereses con el otro, se debe “ventajear” al competidor, es decir obtener lo deseado apelando a cualquier medio que esté al alcance. No hay necesariamente códigos de procedimientos definidos en el ventajeo, sino que muchas veces las acciones se van decidiendo en el transcurso mismo de la interacción. En el enfrentamiento con el otro se va optando por la forma en que se intentará ventajearlo. Así las cosas, un pedido de dinero en la calle sin éxito, puede transformarse en un “apriete” y, si este también fracasa, terminar en un robo. Pero ventajear implica también reflejos, hacer un movimiento antes que el rival, una anticipación sobre la jugada del otro lo que, como veremos más adelante, ayuda a comprender el uso de la violencia en muchas acciones.

La violencia y el enfrentamiento halla su sentido y legitimación por la predominancia de la lógica del aguante. Con su clara connotación viril, con sus reminiscencias del orgullo de la fuerza de los sectores populares, con su intrincada relación con el fútbol, “tener aguante” es

un valor central a la hora de hacerse valer en el grupo de pares. Tener aguante: ser capaz de mantener la mirada o la intención ante cualquier oponente; no achicarse frente a alguien de mayor porte y dar batalla –aunque luego se pierda– ante quien sea. Enfrentarse a un adversario que juega mejor en el fútbol, un contrincante más fuerte en una pelea o un grupo de policías fuertemente armados, estas y otras situaciones están legitimadas y valoradas por la lógica del aguante.

El mundo laboral

La plena conciencia de que sus oportunidades laborales se limitan a empleos precarios e inestables se ha adueñado de estos jóvenes. Ven frente a ellos un horizonte de precariedad duradera. Quizás más perjudicial que los bajos ingresos actuales de un eventual empleo, es la dificultad de vislumbrar una carrera laboral signada por algún tipo de ascenso social. Sin disimular la amargura un joven nos decía “¿Qué te parece que puedo esperar? Como máximo, un laburito de 180 mangos durante 3 meses. Después, nada durante un tiempo. Otro laburito de 180, 200 mangos por un tiempo. Después nada de nuevo...y así siempre.”

Imaginan –en el mejor de los casos– una carrera laboral conformada por una sucesión de puestos de baja calificación y bajos ingresos, todos inestables, interrumpidos por períodos de desempleo. La pérdida de la idea de carrera al interior del mundo laboral, ya los condena de antemano –por tener baja calificación– a los peores lugares del mundo del trabajo. En tal sentido, no hay posibilidad de soñar con ninguna movilidad ascendente; lo único posible es la mera supervivencia.

Tal horizonte tiene una influencia central para estos jóvenes. El pasaje al mundo del trabajo estable marcaba un punto de corte central: de la escuela al trabajo, de la adolescencia a la

adultez. Los tiempos cotidianos, los ciclos vitales, las estrategias de distinción al interior de las familias pobres estaban marcados por la inserción laboral estable.

Cuando el trabajo no es más una frontera clara, diferenciadora, toda una red de sentido derivada del empleo, también entra en crisis. Si las oportunidades de trabajo escasean y el mundo del trabajo no se plantea ya como una zona segura, un pasaje definitivo, otras dimensiones de la vida se desdibujan, como por ejemplo la visión de lo legal y lo ilegal. Pero también, las experiencias laborales que han conocido han sido en general muy negativas.

Fueron ayudantes de jardineros que nos le pagaron, limpiaron coches en una agencia de remises “truchos” que jamás le liquidaron el sueldo, etc., lo que contribuye a disminuir su confianza en el mundo laboral.

Una consecuencia es que en la experiencia cotidiana de estos jóvenes lo legal y lo ilegal no constituye una frontera nítida. Ahora bien, ¿estamos acaso afirmando que hay un desconocimiento total de la ley? ¿Están conformando un sistema clasificatorio que invierte –a su favor– la atribución de lo legal y lo ilegal vigentes en la sociedad? No parece ser el caso. Más bien, en la experiencia cotidiana de estos jóvenes se delinearía una zona gris entre lo legal y lo ilegal en la que se encuentran disponibles una serie de acciones. La elección de una u otra opción sería el resultado de las oportunidades contextuales, relacionadas a la posibilidad de acudir a una u otra para llegar a ciertos objetivos, tampoco estos últimos muy claramente definidos. El “peaje”, el “apriete”, la amenaza, el hurto y el trabajo están dentro de su mundo como opciones legítimas, según las normas locales.

Frente tal legitimidad acotada espacial y temporalmente, no hay casi lugar para el interrogante sobre su legalidad. En todo caso, sólo se vuelve relevante cuando se produce la **tipificación externa** por parte de un actor, en particular la policía. Su accionar impone

post-facto la denominación de ilegal. Es el castigo la que determina la ilegalidad de la acción; ilegalidad que no necesariamente “ilegítima” sus acciones. En efecto, la policía puede regular los castigos pero no necesariamente la adjudicación de legitimidad.

La señalada fragilidad interna de los grupos de pares contribuye al desdibujamiento de límites claros entre las acciones. En el mundo del crimen organizado se observan grupos muy cohesionados, que imponen a sus miembros rígidos sistemas normativos, aunque sean opuestos a las normas generales. No es este el caso: la indefinición de las fronteras se observa en las interacciones: a veces cuando “encaran” a alguien el carácter de la acción se va negociando en el transcurso de la misma. En particular, cuando la víctima es conocida, de la reacción del contrincante dependerá si se tratará de un robo violento, un apriete o un pedido amigable para “comprarle remedio a los chicos”. Así las cosas, un pedido puede terminar en un robo con lesiones o, inversamente, un apriete se transforma en un abrazo amigable y en una tipificación de la acción como broma (“te asustaste eh, pensaste que te iba a currar”) y hasta puede concluir en un pedido de perdón.

La coerción individualista

R. Castel (1995) distingue entre el individualismo positivo y el negativo. El primero se refiere al creciente margen de autonomía y libertad que van ganando las personas en lo que A. Giddens llama “sociedades post-tradicionales”. El segundo es un individualismo coercitivo: el que sufren aquellos obligados a valerse únicamente por sí mismos debido a un déficit de los marcos de protección materiales y simbólicos. En la posguerra, el Estado de Bienestar, al disminuir los riesgos sociales, permitió acrecentar los grados de libertad individual. Décadas más tarde, la crisis de la sociedad salarial hizo recrudecer un

individualismo negativo que afecta hoy a los grupos más vulnerables, cuyo horizonte es la atomización, el aislamiento y la desafiliación.

“Necesitás guita si o sí. Buscás trabajo, si trabajo no hay, salís a robar” esta afirmación cándidamente desprovista de cinismo de un joven, resume bien los avatares del individualismo negativo. Estos jóvenes están “condenados a ser individuos”, más específicamente a tomar en sus manos la resolución de todas sus necesidades. Sin posibilidad de apoyo familiar ni institucional, sin marcos colectivos, la coerción al individualismo es significativa. Es sobre aquello que es lo único que tienen, su cuerpo, que recae la total responsabilidad de asegurarse la satisfacción de sus necesidades. La coerción individualista tiene un efecto de aumento de riesgo y de puesta en juego. Porque al hacer recaer exclusivamente en sí mismos la resolución de sus necesidades, obliga a ponerlo en juego en su totalidad. No es la fuerza de trabajo del obrero lo que se mercantiliza, sino un cuerpo que como una totalidad se pone en juego en una acción determinada.

En el terreno de lo público este individualismo coercitivo se expresa en una fuerte despolitización, entendida aquí como la ausencia imaginaria de toda influencia de lo público en su mundo de vida. Así como los padres no pueden casi ayudar, tampoco esbozan ninguna instancia exterior –real o imaginaria– a la que dirigir demandas. No hay nada que esperar de nadie y lo más interesante es que esto no suscita nada, ni siquiera la rabia que F. Dubet (1987) encuentra en el discurso crítico hacia los políticos entre jóvenes similares de los suburbios franceses. Para Dubet, la rabia expresa la revuelta frente a una dominación a la que no se detecta ni principios legitimadores ni un rostro identificable. En los jóvenes entrevistados, no aparecen visibles las marcas de la dominación. No hay ninguna categoría colectiva en la que se incluyan que aparezca como dominada.

La carencia de marcos de inserción pareciera afecta la relación imaginaria con el Estado. Para expresar la queja hacia alguien, para acusarlo de no cumplir con sus obligaciones previamente debe adjudicársele competencia y responsabilidad en el tema.

Pareciera que esto se ha desvanecido, como si la desresponsabilización de alguna instancia externa a sí mismos en su suerte se hubiera naturalizado. Se trata, sin duda, de un cambio producido en los últimos años. Quizás parte se deba a que se trata de la primer generación para la que se han borrado las huellas de un pasado mejor. En efecto, en el trabajo de campo sobre nueva pobreza realizado entre 1992–1994 (Kessler y Minujin 1995, Kessler 1998) aparecía una referencia a la movilidad intergeneracional ascendente de las generaciones pasadas. Para los nuevos pobres, el recuerdo de un pasado mejor hacía las veces de una promesa –quizás incumplida– de un futuro de progreso. Para estos jóvenes esta referencia ya no existe, posiblemente porque sus padres conocen una inserción precaria en el mundo del trabajo. En efecto, el promedio de edad de sus padres no supera los 40 años. Ellos han conocido una inserción profesional signada en su totalidad –o casi– por la precarización e inestabilidad.

En rigor, hay una institución pública que aparece una y otra vez en sus discursos: la policía, la cana, la *“yuta hija de puta”*. Es la amenaza constante, el juego del gato y el ratón por momentos, pero a veces con lazos insospechados, como en los circuitos ilegales de armas. De todos modos, al nivel en el que se encuentran estos jóvenes tampoco hay eventuales negociaciones con la policía. Ellos son el *“chiquitaje”*, los que muchas veces los adultos utilizan para los actos más expuestos, como carne de cañón, pero también por ser menores y por ende, con menor imputabilidad. La policía no es visualizada como parte del estado, no es que afirmen su autonomía respecto a él, pero el discurso de estos jóvenes no llegan a establecer un lazo con él. La policía es el contrincante principal y frente a quien sienten el

temor de “perder” (la vida). Un temor difundido en estos jóvenes es el “bolsazo”, es decir la asfixia por una bolsa de polietileno, lo que en el lenguaje de la represión se llamaba el “submarino seco”.

Al mismo tiempo, en el ocio posindustrial de los sectores populares, hay una fuerte apelación a la rebelión frente a la policía y otras conductas, como puede verse en las letras de canciones de grupos de moda. En el análisis de Semán y Vila (1999) sobre las letras del rock que escuchan estos jóvenes, surge la valoración positiva de la barra del barrio. En su visión, las distintas barras se disputan espacios sociales, pero todas ellas se oponen en conjunto al poder establecido. Aparecen también en sus letras, la deslegitimación del mundo del trabajo, una imagen de la sociedad post-populista en la que serían corrientes el alcohol, la disponibilidad de las armas y el odio a la policía. ¿Cuánto de esto influye en las conductas concretas? No podemos saberlos, pero sin dudas muestra la disponibilidad de estos contenidos en el universo cultural de estos jóvenes.

Pero hay un tema más que marca una diferencia clara con la experiencia de la galère que Dubet describe en los jóvenes franceses. Su mundo está teñido de gris y sus acciones violentas y en general vandálicas son la muestra de una violencia expresiva frente al gris de esos suburbios. Los relatos de estos chicos están también marcados por rupturas, expulsiones, tonos grises en general. Pero lo único realmente excitante de sus relatos es cuando describen los hechos delictivos. Ellos constituyen una ruptura frente a los tonos grises cotidianos. Lo que describen parecen fragmentos de telefilms, de series, escenas descriptas con lujo de detalle en las que por primera vez ellos son los protagonistas. Miedo, sudor frío, adrenalina, velocidad, todo se juega en esas escenas en continuado en la que tensiones se generan y resuelven en el mismo momento. Sospechamos que muchas veces mienten o exageran sus relatos, sobre todo en las hazañas físicas que describen. Pero no

importa, muestra una sensualidad de las experiencias que no debe descartarse al analizar el sentido de estas acciones.

Contar los relatos entre sus pares, el costado lúdico, viril que tienen no puede ser descartado. Es necesario, cuando se entra en confianza, escuchar la forma de esos relatos, comprender que en sus vidas marcadas por el gris, tienen un lugar central. Y no es ajeno a esto la coerción al individualismo del que hablamos. Porque nuevamente, todo está concentrado en el cuerpo, hasta el placer y el daño que el placer puede infligir.

Las sustancias influyen en esto, pero no son por lo general adictos. No hay heroína que genera adicción física, ni crack que genera violencia. A pesar de las ideas reinantes, como se señaló, una encuesta del Ministerio de Justicia de la Nación muestra que, prácticamente el 100% de los aprehendidos en delitos no estaban bajo efectos de las drogas ni del alcohol. No puede establecerse un lazo causal entre drogas, alcohol y actos delictivos. Establecer, como se hace en los discursos más corrientes en el país, un lazo causal entre drogas y delitos lleva a políticas públicas sin ningún efecto en el problema.

Sin dudas hay en la cotidianeidad de estos jóvenes marihuana, un poco de cocaína y medicamentos (pastas) mezclados con alcohol. Esto último, según los especialistas consultados, genera el mayor estado de “descontrol”. Pero a nuestro entender, la idea de que son adictos que necesitan robar para financiar su vicio no es sostenible, más allá de algunos casos particulares. Preferimos invertir la explicación y relacionarla con la lógica de necesidad. En la justificación social de la delincuencia la necesidad del adicto aparece como un motivo central y por ende con cierta legitimidad. En un estado de múltiples necesidades, los jóvenes se apropian de este significado y lo usan como razón principal de sus acciones. “Robé para comprar porro” y, en realidad, después se ve que con parte del “botín” fueron a bailar o compraron ropa, pagaron algo de la casa. No es la confesión de un

adicto, sino de alguien que se apropia de recursos para satisfacer distintas necesidades y que lo debe justificar de algún modo. La necesidad de sustancias es, en realidad, un punto donde habrá consenso entre el joven y el entrevistador –todos saben que la droga genera necesidad.

Por último, nada de lo descripto hasta aquí sería posible sin la facilidad de acceso a las armas que estos jóvenes experimentan. Compra, alquiler, destajo, comodato, son sólo algunas de las formas de contratación existente en un denso mercado ilegal de armas –de todo tipo y calibre– al que estos jóvenes acceden fácilmente. No profundizamos en este tema, simplemente porque implicaba un riesgo para los investigadores, al afectar a la policía y a las fuerzas de seguridad. Pero es necesario dejar claro que ninguna de las acciones sería posible y ninguna política será eficaz sin un control del mercado de armas.

El uso innecesario de la violencia

Lo que más preocupa a la sociedad en relación a las nuevas formas de violencia urbana es lo que aparece como un uso “innecesario” de la violencia. En efecto, periódicamente nos anoticiamos de que en robos en la vía pública, una víctima que no ofrecía ninguna resistencia fue asesinada por el victimario. Intentamos en este punto elucidar el porque de este innecesario uso de violencia. Varios de los elementos anteriormente presentados, sumados a otros aún no discutidos parecen permitir algún tipo de explicación. Una primera constatación es que la muerte de un par es parte del universo de estos jóvenes. Ya sea por el SIDA, a manos de la policía, cuando no por accidentes de tránsito, la muerte de alguien de su generación no es algo desconocido. La muerte se instala, entonces, en el territorio de las opciones imaginables para alguien como ellos.

Pero tomemos como punto de partida la centralidad de la lógica del ventajeo que señalamos anteriormente. Ventajear en toda interacción incluye, por sobre todo, a las situaciones delictivas. En concreto, habrá una predisposición a usar las armas si en un momento parece necesario para ventajear. Y ventajear usando las armas aparece como una opción necesaria cuando los actores son concientes de el aumento de la población civil armada. Y es aquí donde entra en juego el ventajeo. Ante cualquier movimiento que denote la posibilidad de que el otro “ventajee” (en este caso, que el otro tenga un arma y dispare), uno debe disparar primero. Por ello parten de la convicción de que el umbral de riesgo es muy alto, lo que los lleva a estar predispuesto al uso de la violencia, como afirmaba un joven “antes se te asustaban con sólo mostrarle el bulto del arma en el pantalón. Ahora tenés que andar con el dedo en el gatillo, por la cantidad de perejiles armados que andan por ahí”.

La predisposición a disparar como forma de neutralizar al oponente, es indicador de la poca confianza en sí mismos y en sus víctimas. La falta de “profesionalidad” criminal de estos jóvenes los lleva a que no se sientan seguros ellos mismos en el control de las situaciones que encaran. Pero tampoco confían en sus víctimas: temen que estén armados, que ellos quieran ventajearlos, por lo que están muy nerviosos y esto es un factor que sin duda interviene.

A esta sensación de ser ventajeados por la víctima contribuye la escasa disponibilidad de dinero en efectivo. En efecto, no entienden como “un tipo con una super casa, un super coche, una re pilcha, tiene sólo dos mangos encima”. Esto los hace creer que posiblemente los estén engañando, por lo que la falta de confianza se acentúa y, por ende, la disposición a la violencia puede incrementarse.

En esta falta de confianza en sí mismos y en sus víctimas interviene la precarización del delito. Estos jóvenes no han tenido una “capacitación” en el delito, sino que al igual

que otros mercados de trabajo, el delito se ha precarizado. Según nuestros informantes claves, el mundo del crimen organizado era sumamente jerárquico, con fases de aprendizaje estructuradas. Estos jóvenes no tienen formación, no han seguido un aprendizaje del delito por etapas. Esto se observa sobre todo en la poca capacitación para el uso de armas que denotan. Ellos tienen a su disposición armas pesadas. Se trata de una tecnología sofisticada para la que es preciso una formación de la que carecen. Esto contribuye a la dificultad para dominar la situación. Al no dominar la tecnología, las armas más que un factor de confianza y mayor seguridad, les provocan una inseguridad que, sin duda, favorece la violencia indiscriminada.

Un factor central para minimizar la sensación de riesgo es lo que podríamos llamar suspensión de la conciencia. ¿A que hacemos referencia? Si bien puede haber un repentismo en tanto falta de planificación, hay por el contrario, una preparación subjetiva, en ese sentido no se trata de arrebatos, sino que existe un trabajo sobre si mismos. Así, cuando preguntamos sobre la manera de sobre llevar el temor que les causa la situación, la sobre inversión subjetiva implica un trabajo sobre si mismos que caracterizan como el “no pensar”. Una forma de detener la conciencia de si mismo a fin de cometer un hecho que, en algún lado, saben que implica grandes riesgos. Tal suspensión de la conciencia no se realiza de forma aislada, es el grupo el que con su influencia lleva a este trabajo, permite que el individuo lleve adelante acciones que, de otro modo, posiblemente no encararía.

Principales conclusiones

En este punto se sintetizan los principales resultados presentados.

1. La información estadística existente confirma un aumento del número de delitos en la última década, en particular los correspondientes a infracciones contra la propiedad. Si bien hay más delitos violentos que en el pasado, la magnitud del problema es mucho menor que en otros países de la región.

2. Con respecto al perfil de los protagonistas de los actos ilegales, los datos más sobresalientes que surge de la información - basada en aquellos que tienen iniciada causa judicial - son los siguientes: 1) no hay asociación entre el uso de drogas ilegales y los actos delictivos, 2) un nivel educativo bajo, 3) en su mayoría son no reincidentes, lo que podría estar mostrando una población que está ingresando en el terreno de las acciones ilegales.

3. La mayoría de las víctimas provienen de los sectores más bajos de la población.

También se pudo detectar que el temor está modificando numerosos comportamientos.

El más sobresaliente es el abandono de barrios considerados peligrosos y la restricción de contactos sociales.

4. En los últimos años hubo un considerable crecimiento del gasto público y privado en temas ligados a la seguridad. Hay un significativo aumento de la posesión de armas entre los particulares. Tanto en la oferta de servicios de Seguridad pública (comisarias) como privada (p.ej. empresas de seguridad) se han detectados diferencias entre los barrios de sectores de mayores ingresos con respecto a aquellos habitados por personas de menores recursos.

5. En relación a los jóvenes entrevistados, el delito no aparece como una actividad exclusiva sino que, en muchos casos, se trata de una actividad que puede combinarse con un trabajo, por lo general precario e inestable. La figura emergente no es la del "delincuente" que construye una vida al margen de la ley sino la de jóvenes que alternan el trabajo con acciones ilegales.

6. La familia, la escuela y la comunidad local parecen estar debilitándose en tanto marcos protectores e integradores de estos jóvenes. En tal contexto cobran relevancia los grupos de pares. Ellos tienen un lugar central como orientadores del comportamiento de los jóvenes mediante la fijación de procedimientos de acción de carácter local.

7. Las normas de los grupos de pares son particularmente eficaces en un contexto de creciente segregación intra e interclase.

8. Se observa un paulatino desdibujamiento de los límites entre lo legal y lo ilegal. En la cotidianeidad de estos jóvenes hay una serie de recursos de acción disponibles para acceder a fines determinados: trabajo, hurto, pedido, "apriete" a los que se puede apelar en distintos momentos sin que su carácter de legal o ilegal aparezca muy relevante.

9. La percepción de lo que llamamos "horizonte de precariedad laboral duradera" es un factor de importancia. En efecto, quizás más significativo que los bajos ingresos de un eventual empleo, pesa la dificultad de vislumbrar una carrera laboral con algún tipo de ascenso social: perciben –en el mejor de los casos– un futuro signado por la alternancia entre empleos precarios e inestables y la falta de trabajo.

10. En lugar de cálculos de costo–beneficio, las acciones de estos jóvenes están regidas por la articulación de lógicas de acción definidas en el interior de los grupos de pares.

Hemos llamado a éstas: lógicas de la necesidad, del ventajeo y del aguante.

11. Dichas lógicas deben ser tenidas en cuenta a la hora de planificar intervenciones públicas. Ellas cuestionan la eficacia de las políticas de disuasión. En efecto, éstas se basan en el supuesto de un actor racional. El axioma de base es que la información sobre el aumento de las penas y/o sobre la posibilidad de ser aprehendido aumentarían el riesgo de cometer una acción delictiva y, por ende, disminuiría la relación costo– beneficio. Pero si

se trata de actores que se manejan con lógicas de acción alternativas, el fundamento de las prácticas disuasivas pierde sentido.

12. El motivo de los delitos contra la propiedad son de tipo inmediateista. Roban para satisfacer consumos inmediatos y no en vías de una acumulación económica. Carecen prácticamente de dinero para satisfacer sus consumos.

13. No hay en el imaginario de los jóvenes entrevistados ninguna instancia exterior, como por ejemplo el Estado, al que consideren responsable de su suerte. Experimentan un “individualismo coercitivo”, el convencimiento de que deben indefectiblemente hacerse cargo por sí solos de la satisfacción de todas sus demandas.

14. Si bien el alcohol, ciertos psicofármacos y algunas drogas ilegales (más bien blandas que duras) forman parte del mundo cotidiano de los jóvenes entrevistados no se trata, en general, de adictos que roban para solventar el consumo.

15. Un tema central es el fácil acceso a todo tipo de armas que tienen estos jóvenes. Esto requiere con urgencia políticas precisas y que no aparecen en el debate público. La presencia de las armas aumenta la complejidad del problema. Como surge de los datos, las armas están cada vez más difundidas no sólo entre los que delinquen como los que la usan para defenderse. Lo que se observa es que este incremento crece casi a la misma velocidad entre ambas poblaciones: las posibles víctimas buscan armas para protegerse y los delincuentes al conocer esta situación recurren a armas cada vez de mayor poder. La posesión de armas utilizadas para la protección es otra señal del déficit de confiabilidad en las instituciones.

SÍNTESIS DE LA REPRESION INSTITUCIONAL EN LA REPUBLICA ARGENTINA

Bombardeo a la plaza de mayo; 1955.

En el año 1955, cuando los militares destituyen a Perón, lo hacen bombardeando una manifestación de civiles convocados en nuestra famosa Plaza de Mayo para defender a un presidente legal.

De ese bombardeo a civiles hubo muchos testigos que, asomados a las ventanas sin darse cuenta del riesgo ni creer en lo que se desplegaba ante sus ojos, como una película americana de guerra - miraban asombrados como se ametrallaba desde los aviones a la multitud que huía despavorida.

Nunca se supo cuantos fueron los allí masacrados. Ni sus nombres. Ni donde fueron enterrados. Los militares se encargaron de hacer el trabajo de desinformación, acallando las averiguaciones o intentos de juicio y de protesta.

En realidad, las desapariciones quedaron impunes. No hubo investigación, y fueron borrados de los libros hechos tan brutales que, al ser escondidos al conocimiento de la gente, se repiten cada vez en peor escala.

También se borró de los libros de historia el fusilamiento de civiles y militares que defendieron el orden constitucional. "Decreto de pena de muerte masiva".

Ese fusilamiento fue firmado por el. general Aramburu mientras Perón huía al Paraguay, en una cañonera de la marina fuerza que estaba atacando y dando muerte a sus mismos defensores.

Plan Conintes; 1960

Fue sancionada en 1948 por el entonces presidente, democrático, Juan Domingo Perón. Era un decreto de emergencia extralegal, anticonstitucional, que estableció la jurisdicción militar para los actos llamados "terroristas". Significa "Conmoción del Orden Interior".

Fue vuelto a poner en vigencia por presión militar el 13 de marzo de 1960, durante el gobierno constitucional del Dr. Arturo Frondizi.

Es decir, que en un gobierno constitucional, los militares se hacían cargo de los civiles opositores políticos y participante de huelgas obreras. La justicia civil pasa a depender de la justicia militar, ocasionando una serie de minigolpes y querellas entre civiles y militares.

Escribo textualmente: "Para colmo de males el panorama político-social se vio agravado por un estado represivo que aumento en intensidad, que ponía en duda el mismo sistema democrático en que se apoyaba " (Rouquie, Alain, "Poder militar y sociedad política en la Argentina").

Se prohibió la palabra Perón. Se hablaba del tirano prófugo. Había logrado concretarse el MOU (Movimiento Obrero Unificado).

Ya en 1958, el Boletín Reservado de Guerra N° 3753 del año 1958, a quince años del Holocausto, del Juicio de Nuremberg, decía en algunos de sus pasajes:

"Sería trágico que en cumplimiento de una mala interpretación de la disciplina, nuestros soldados asesinaran a las mujeres, hombres y niños que lucharon heroicamente en contra de la dictadura..." (se refiere al gobierno constitucional de Perón)

Entonces, ¿que fue el asesinato de miles de manifestantes en Plaza de Mayo?

¿Ya estaba en ellos el proyecto de asesinato de niños y mujeres? Los militares lo tenían presente. Los políticos... ¿también?

1962:

Primera desaparición, sin conocimiento de destino, de dos dirigentes metalúrgicos. 1968

Noche de los bastones. Represión en la Universidad de Onganía.

1972

Son masacrados los presos políticos en la cárcel de Trelew a disposición de la Marina.

Entre ellos, una mujer embarazada de siete meses.

Podemos decir que desde 1955 a 1996 hemos tenido solo un gobierno democrático, realmente, que no quiso obedecer ordenes de los militares, y duro solo tres meses: el del Doctor Héctor J. Cámpora.

Tres meses sin presos políticos, sin estado de sitio, sin represión militar ni policial, con una justicia real, con un interés verdadero de desarrollo social.

Luego, la masacre de Ezeiza, 1973. Los criminales procedieron con impunidad total. Ni se investigo ni se castigo a los culpables, cuyos nombres y apellidos dieron a conocer las mismas FF.AA., autoras del crimen.

EZEIZA 1973

Cuando Perón y su mujer volvieron al país, un millón de personas habían concurrido a esperarlo en el aeropuerto de Ezeiza. Familias enteras, gentes de todas las clases sociales, esperan, tomando mate, la vuelta de un presidente constitucional, que había sido violentamente echado de su cargo, hacia ya 18 años.

Se pensaba y se sentía como un triunfo popular sobre las FF.AA., la jerarquía eclesiástica y el proyecto económico militarista. Todo fue una trampa.

Desde el palco oficial, el grupo de militares y civiles al mando del coronel Osinde tiraron con armas largas matando a los manifestantes. El coronel dirigió la masacre. De esta masacre jamás se dio información.

Periodistas hicieron investigaciones al respecto y llegaron a la conclusión de que todo estaba preparado desde hacia tiempo. La casualidad hace que este hecho se relacione con la masacre de Cañuelas, ocurrida tres años después, el 12 de Junio de 1976.

Fue en ese club S MATA donde se produce la quemazón de seis cuerpos, entre los que estaba el del doctor Santiago Bruschtein, padre de seis hijos, secuestrado el día anterior, el día 11 de Junio de 1976.

Fue en ese club donde se escondieron las armas que se utilizaron en la masacre de Ezeiza, nunca aclarada por la justicia de María Estela de Perón y Lopez Rega.

No hubo nombres, ni nunca nadie supo donde fueron enterrados los allí asesinados. Por relatos de compañeros del hospital de planta, y que recorrieron en ambulancias el lugar, se supo de cuerpos colgados de los árboles. De cuerpos de mujeres y niños. Todos NN. desaparecidos.

No fueron los primeros, tampoco serán los últimos en el país.

TRIPLE "A"

En el año 1974, la viuda de Perón y su ministro de Bienestar Social ensayaron cuatro métodos represivos con el fin de acallar las protestas de la población frente a una situación económica e institucional realmente degradada.

Los cuatro métodos puestos a prueba fueron:

- a) apresamientos masivos con tortura, sin asesinato
- b) asesinatos públicos

1-en los domicilios de las víctimas.

El doctor Silvio Frondizi fue asesinado en su casa, lo mismo que el bebé del rector de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, doctor Raul Laguzzi, además de habitantes de villas de emergencias o trabajadores.

2- En las calles.

Los asesinatos del padre Mujica, del doctor Ortega Peña, de Julio Troxler entre otros cientos de víctimas. En esta espantosa situación se podía rendir homenaje a la víctima y hacer un acto político de su velatorio para que nadie lo olvide.

c) La desaparición de personas.

El antecedente histórico es la desaparición de dos dirigentes metalúrgicos ocurridas en 1962, que provocó gran perplejidad en la población.

d) Masacres a multitudes: Ezeiza.

En la época de María Estela de Perón y Lopez Rega, las desapariciones llegaron a seiscientas.

La primera fosa común que se descubrió buscando la desaparición de la primera desaparecida de la familia, la hija Aída Leonora Bruschtein Bonaparte, es obra de esta mujer, que no fue enjuiciada, ni condenada.

Quedara en la historia de nuestras instituciones como gobernante cruel y corrupta, respaldada siempre por los militares que en aquella época, con su anuencia, inventaron la Alianza Anticomunista Argentina -triple A-, a cuyo frente estaba su consejero, Lopez Rega.

El enlace entre la triple A, es decir la presidenta, y los militares, era la joven oficialidad del ejercito, que luego comandaría los grupos de tareas y regentaría los 365 campos de concentración.

El 24 de Marzo de 1976 la escalada represiva se intensifica y extiende sin límites: mujeres embarazadas, madres jóvenes y mayores, sus hijos e hijas, hombres y mujeres, sus padres, muchas veces familias enteras,... porque debía servir de escarmiento. Así se llega a la escalofriante cifra de 30.000 detenidos-desaparecidos.

El silencio fue cada vez mayor. La mentira de las FF.AA., la indiferencia de la jerarquía eclesiástica y la cobardía de algunos políticos llevo a ser desesperante.

MALVINAS

La ultima represión masiva que hubo en nuestro país fue durante la guerra de las Malvinas. La única guerra.

En 1982 la represión había disminuido gracias a las presiones nacionales e internacionales. Un general borracho tuvo que inventar una guerra, porque los torturadores no pueden dejar de torturar.

En la guerra de las Malvinas se torturó a los soldaditos. Muchos de los que murieron lo hicieron a manos de sus superiores, los genocidas que hicieron desaparecer a 30.000 niños, mujeres y hombres.

Los mismos que luego se beneficiarían por la ley de "Obediencia Debida", a pesar de haber sido condenados en un juicio ejemplar, sin precedentes en la historia. Los nazis fueron juzgados por los aliados mientras el pueblo alemán miraba hacia otro lado.

La ley de "Obediencia Debida" fue sancionada durante el mandato del presidente Alfonsín, el mismo que posibilitó el "Nunca Mas".

Por toda esta historia, y por el análisis de la realidad nacional e internacional, es que proponemos la disolución de las FF.AA., autora durante años - e intensificados en la década del 70- de crímenes calificados como de "lesa humanidad".

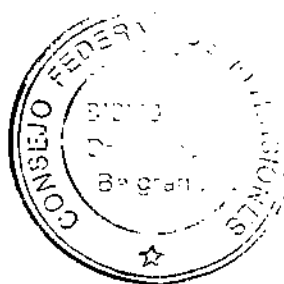
Se propuso su disolución, previa declaración de sus crímenes a través de un nuevo juicio internacional, puesto que han sido muchos los miembros de otras nacionalidades que fueron desaparecidos y asesinados durante esta década. Entre ellos, cientos de españoles.

Se puede afirmar que en general las FF.AA. de todos los países, y a través de la historia, solo han conseguido un tratado genial sobre ajedrez, escrito por Clausewitz, donde los cuadros blancos y negros se concretizaron en la mente militarista, incapaz por siglos de simbolización, en campos de batalla.

LA IMPUNIDAD

Las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final creadas por el presidente Alfonsín, sumados a los Indultos del presidente Menem, han iniciado el camino de la construcción de la impunidad.

Una impunidad que diluye el proyecto democrático, genera una escalada criminal incontenible, y da cobertura y recurso para la protección de la corrupción política en todos los estamentos de gobierno.



El poder que el presidente tiene para elegir los jueces define la injusticia. Hace ineficaz la existencia de los diferentes poderes: legislativo, además del judicial. a esto se agrega la intervención equivalente a órgano de estado de la jerarquía eclesiástica.

El efecto en la población es de impotencia y desesperanza. La vigencia de la injusticia social, la disminución brutal de la calidad en la educación y de la posibilidad de acceso a la misma, así como a la salud, hacen que debamos calificar a este plan económico como atrozmente despiadado y asesino.

Y en medio de este panorama, es imprescindible que nosotros sigamos reclamando la verdad, la justicia y la memoria.

El pueblo sigue exigiendo verdad, que significa conocer esta historia de represiones, necesitamos saber todo. Porque esto volverá, si los genocidas se mantienen en silencio, como lo han hecho hasta ahora, salvo impresionantes excepciones, unas diferentes de otras. Que hablen. cada quien como pueda. Queremos justicia, no el poder maligno que provoca la impunidad.

En esta generación ya no hay menores de 65 años. Esto quiere decir que estamos mas cerca de la muerte que naturalmente sobrevendrá... Naturalmente... ¿Con tanto silencio sobre el destino de nuestros hijos? Nunca será natural.

Se reclama el derecho a morir con el pleno conocimiento de la verdad.

Muchas de nosotros hemos sido testigos y hemos tenido conciencia de la escalada represiva.

A veces nos provoca sonrisas, otras asombro, por las respuestas a preguntas como: "¿Donde estabas vos cuando yo vivaba a Perón en la manifestación del 47?" "Visitando a mi padre, que estaba preso por defender la justicia", puede ser la contestación.

Y sin embargo, son esas diferencias que nos permiten reconstruir un pasado y transformar la anécdota en hecho.

Muchos de nosotros han sido protagonistas de movimientos políticos, estudiantiles y obreros, en la forma mas sencilla, de firmas de desplegados defendiendo la libertad de presos políticos y denunciando la represión a los trabajadores, o trabajando con las poblaciones mas carenciadas de las llamadas villas miseria.

En Línea Fundadora, hay madres con un pasado de actividad política-social, de lucha feminista y de trabajo profesional.

Tenian una identidad anterior a esta dolorosa, terrible, de madre de desaparecidos. Estaba embarazada de siete meses de un bebe menor, una hija, cuando veía volar sobre su casa, en Morón, ciudad sede de la base aérea, los aviones cargando las bombas.

“Recuerdo que tome a mis tres hijos,-cada uno se lleva 18 meses: 9 de embarazo, 9 de lactancia-, y nos metimos en nuestra casa, queriendo creer que una simple estructura iba a protegernos de las enormes bombas que trasladaban los aviones a la Plaza”.

Ustedes han pasado una guerra. Saben de eso. En la Argentina no hubo guerra. Siempre fue una represión a ciudadanas y ciudadanos sorprendidos por lo desmedido del ataque y totalmente indefensos.

Dice el ensayista argentino José Maria Pasquini Duran en su libro: "Por lo pronto el futuro es un Problema mundial. La guerra civil en la ex-Yugoslavia, entre bosnios, serbios y musulmanes, arraso con su brutalidad todo lo imaginario del terror, pero igual uno se queda con la sensación que tal vez mañana suceda algo peor".

Y mas adelante, agrega: "En los titulares de los diarios de hoy, cualquier lector atento encontrara rastros de las actividades de los tres mayores poderes de este tiempo:

narcotráfico, terrorismo étnico-religioso, y capital financiero-especulativo. Hay puntos de contacto entre ellos: el tráfico de armas, el blanqueo de capitales ilegales, la corrupción de los poderes públicos. ¿Que podría suceder si deciden darse recíprocas protecciones?”

La burocratización de los organismos de derechos humanos internacionales -nos referimos específicamente a las Naciones Unidas- demora las decisiones. Es la opinión general, compartida por otras madres.

Sería interesante que se pudiera vislumbrar otra manera de elegir los representantes de los Estados miembros. Cada vez mas, aumenta la importancia de las instancias internacionales de justicia y paz y toma de decisiones que tengan que ver con los derechos humanos.

Está la propuesta de que sean elegidos por el voto directo de los pueblos. Serán de esa manera representante de los Estados miembros, y no de los gobiernos de turno. Esto no significa anular las ONG, sino dar mas fuerza a las resoluciones, para que sean rápidas. Y, sobre todo, lleguen a tiempo.

Existe coincidencia en que las democracias son cada vez mas difíciles de concretar y difíciles de definir. En Latinoamérica, los terrorismos de estado y los gobiernos totalitarios, militares o no, han sido reemplazados por autoridades elegidos por el voto popular, que es una conquista democrática indiscutible.

Están muy lejos de ser dictaduras como las anteriores; pero, también, de ser definidas como democracias, por el excesivo poder de los presidentes (Poder Ejecutivo) sobre los otros poderes, como el legislativo y gran parte del judicial. En nuestro país, la independencia de poderes no se cumple. Por lo tanto, la imparcialidad se pierde y el autoritarismo amenaza.

La impunidad, heredera de las leyes de "punto final" y "obediencia debida", más los indultos, han dejado marcada a una población inerme ante la amenaza que representan los criminales por las calles.

Las ejecuciones extrajudiciales y los abusos de autoridad, asesinatos en cárceles y cuarteles (caso Omar Carrasco), si bien no es práctica corriente, han sido realizados por individuos que han pertenecido a grupos de tareas de la dictadura anterior, o participan de su ideología. La corrupción no solo reina en el poder, sino que la violencia se ha instaurado en la población, donde tener poder sobre otros significa humillar y maltratar al que no lo tiene. Aun que este poder sea ilusorio.

Se ha sostenido que jamás pedirían la pena de muerte, aun cuando estas sean para condenar a los asesinos de nuestros hijos.

Debe haber un juicio y una condena ejemplar y pública. Se que esta afirmación se ha interpretado como una debilidad, como una claudicación.

Pero nadie podrá comprender jamás todo el esfuerzo que hemos tenido que hacer con nosotros mismas para no convertirnos, nosotros, en asesinos bajo el pretexto de la venganza.

Matar resulta fácil cuando se quiere hacerlo. Lo difícil, lo increíblemente difícil, es dejar con vida al genocida, y se está pensando en la tentación de la pena de muerte que surge cuando una ve a un genocida suelto.

Frente a esta insolencia de los cobardes no hay mas remedio que ser fuerte por todos los tiempos en que pueda conjugarse los verbos, vivir, gozar, conocer, saber.

La justicia debe ser nuestra, para poder pensar en un futuro que nos permita sonar un mundo mejor.

Una justicia acompañada de la verdad para que el genocidio no se transforme en un mito, en una triste leyenda, como todos los genocidios de nuestra historia, sino en una memoria de hechos reales. Algunos recuerdan que parieron y dieron de mamar a sus hijas e hijos, lo mismo que las otras madres.

Una memoria que tenga en cuenta el Holocausto y las desapariciones como el abismo de crueldad inenarrable, cometidas por seres que tenían todo el poder de vida y muerte sobre niños, mujeres y hombres inermes, y eligieron darles la muerte.

LA IGLESIA

En la Argentina, país de contradicciones, sería extraño que la iglesia permaneciera fuera de estas.

Para el común de la gente, la iglesia, católica, más bien su jerarquía eclesiástica, está dividida entre la voracidad económica y paranoica, y los que abogan con espíritu cristiano y con valentía por dos deudas que tienen para con la sociedad: decir la verdad sobre la masacre al pueblo argentino, de la que fueron cómplices Y estar al lado de los miserables, los que padecemos miseria, y no del lado de la corrupción política y económica.

Respecto a la primera situación, el episcopado adujo "falta de tiempo" para concretar el examen de conciencia que los propios obispos habían prometido por la complicidad de la iglesia en la desaparición de personas en la década del 70.

Existe la esperanza que la jerarquía eclesiástica reconozca sus culpas y responsabilidades durante el tiempo de la violación sistemática de los derechos humanos.

Después de todo, la jerarquía debe tomar conciencia que este presente no es el de la edad media, sino que estamos a las puertas del siglo XXI. En relación a la situación de extrema

pobreza que vive nuestro país, queremos repetir las palabras del obispo de Humahuaca, Pedro Olmedo: "Soy pacifico, este pueblo es pacifico. pero la situación no da para mas", mientras se sumaba a la manifestación de protesta por el pago con bonos a los pocos trabajadores que quedan, bonos que no tienen valor para los bancos.

El obispo emérito de Viedma, Miguel Hesayne, solidario con las madres desde siempre, declaró que "no puede ser cristiano quien impulsa un sistema que, según su parecer, es anticristiano".

INDULTOS

Sigmund Freud: "El malestar en la cultura":

"La sustitución del poderío individual por la comunidad representa el paso decisivo hacia la cultura"

"El primer requisito cultural es el de la justicia, o sea la seguridad de que el orden jurídico, una vez establecido, ya no será violado a favor de un individuo, sin que esto implique un pronunciamiento sobre el valor ético de semejante derecho".

Todo delito es castigado en la dimensión de su gravedad en toda sociedad organizada. La pena varia según las culturas. Pero aun en aquellas que llamamos primitivas ningún delito queda impune.

La justicia es estructurante en una sociedad, e instaura, funda la cultura de la misma. No es concebible un grupo de personas que no hayan discutido y creado su propia justicia y las condiciones que deben reunir los jueces para poder administrarla.

Todo lo que existe se califica de "bueno" o "malo" de acuerdo con las leyes que infligen el castigo. Las penas califican el delito. Y su intensidad, la maldad de este. Si el crimen no es castigado, la sociedad lo absorbe como acto que el poder aprueba.

Esta arbitrariedad, que es en definitiva una definición de la justicia que impera en ese lugar, genera corrupción. Y el peligro latente de la repetición de esos crímenes.

En nuestra Constitución figura el indulto como una facultad excepcional que se le otorga al Presidente de la Nación. Cuando el indulto se transforma en rutina o en trámite burocrático, al perder la calidad de excepción pierde la calidad de constitucional, de "gracia".

Se transforma en una violación del principio de excepcionalidad por el cual fue propuesto. En un reforzador del narcisismo presidencial y en instrumento del autoritarismo.

Los indultos, como moneda de cambio en política, generan impunidad. El delito ya no necesita ni calificarse ni definirse. El acento se pone en el que viola la ley. Esa que el resto de la población debe acatar.

Si tiene poder, como en el caso argentino con los genocidas indultados, el indulto viene rápido. El Presidente de la Nación pasa, a partir de ese momento, de la categoría democrático [elegido por votación] al déspota que decide sobre el destino del resto de los habitantes.

Al liberar a autores de crímenes gravísimos entre una multitud de ciudadanas y ciudadanos -muchos de ellos sobrevivientes de los mismos campos de concentración y testimoniantes de las atrocidades cometidas por las FF.AA. en complicidad con la jerarquía eclesiástica- implanta la ilusión perversa de que cualquier cosa es posible.

Aun el crimen, siempre que sea desde el poder. Los ideales políticos, religiosos, y los principios éticos, se diluyen, y surge en un primer plano el único objetivo de la política: el poder por el poder mismo.

Surge una nueva modalidad. Lo justo pasa a ser el silencio. Que no se hable del delito. Acallar las voces que denuncian. Poner en la justicia a los "amigos". El poder pasa a ser amoral.

Habla de cosas a los humanos que son del ámbito de los dioses, como es el perdón. Hay trastocamiento del lenguaje. Por ejemplo, el asesinato pasa a llamarse "exceso" y la represión, "guerra sucia".

El delito no es importante, puesto que sus autores quedan en libertad transitando entre personas que si estamos sometidas a leyes escritas. Y la institución autora de esos crímenes, no solo no es disuelta, sino que sigue como si no hubiera pasado nada: sin sanción oficial, pero también sin sanción moral de la sociedad.

LA VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS - CONCLUSIONES

El derecho es un conjunto de normas que rige las instituciones de una sociedad, pero también es el conjunto de normas coercitivas que aseguran la sanción ante el incumplimiento de la primeras.

Los delitos y castigos han sido históricamente diferenciados de manera notable en función del género.

Si se toma en cuenta que el derecho ha sido creado por hombres y ejecutado por ellos mismos, queda claro que la visión histórica que tenemos es androcéntrica, es decir gira en torno a la figura del hombre.

Las mujeres. están sometidas a una legislación que sólo ha sido y es igualitaria para los hombres. No se juzga a los ciudadanos en tanto personas sino como “hombres” y “mujeres”.

Esto ha dado lugar a situaciones de violencia y la relación sometedor – sometida ilustra la utilización violenta de la ley por parte de los hombres.

La política, expresada y perpetuada por la ley, se ha ocupado de ejercer ésta discriminación en función del género sobre la mitad de la población mundial.

La Enciclopedia Británica explica el término de la siguiente manera: “Mujer: hembra del hombre”; para definir la palabra “hombre” le fue necesario utilizar siete hojas.

La mujer es el otro; el uno, al que realmente se ha tomado como referencia, es el hombre.

Se pueda hallar testimonio de violencia en las leyes, desde muy antiguo. El Fuero Juzgo – primera recopilación de leyes españolas, que data del siglo XVIII – establecía que por homicidio de una mujer correspondía la mitad de la pena que si el muerto era el hombre.

Alfonso el Sabio, en Las Partidas señala: “Es fuerte cosa contender con mujeres porque no pueden entender ni razonar con otro”.

Las Leyes Sálidas, de los francos, dieron los derechos de primogenitura al varón, cualquiera fuera el orden de los nacimientos; este sistema impera hasta hoy en numerosas monarquías.

La Revolución Francesa, de la que participaron tanto hombres como mujeres, levantó las banderas de igualdad, libertad y fraternidad, pero éstas sólo tuvieron vigencia para los hombres.

Napoleón, con un código absolutamente misógino que sienta las bases de nuestra legislación, establece en el artículo 312 que la mujer debe obediencia al hombre y además la califica como incapaz absoluta.

Las mujeres norteamericanas que colaboraron activamente en las campañas por la abolición de la esclavitud; durante ese período produjeron la famosa “Convención de los Derechos de las Mujeres”, no obstante recién en 1919 les será reconocido en derecho al sufragio.

La “Vindicación de los derechos de la mujer” de 1792 fue redactada por la inglesa Mary Wollstonecraft; se puede considerar ese momento el punto de partida de la lucha por los derechos civiles femeninos en Gran Bretaña; algunos hombres apoyaron los reclamos y llevaron la discusión adentro de las instituciones.

Pero será el ingreso masivo de las mujeres a los puestos de trabajo durante la Primera Guerra Mundial una contribución decisiva para que los países europeos flexibilicen su actitud y comiencen a reconocer el derecho a voto de sus ciudadanas.

No olvidemos que en nuestro país rige la Ley Sáenz Peña de sufragio secreto, universal y obligatorio.

Sólo votaban hombres. Las mujeres también fueron discriminadas en el ámbito de la educación, y hasta fines del siglo XIX era poco menos que imposible que una mujer

alcanzara grados universitarios. También será el ingreso al mercado de trabajo lo que les abrirá las puertas a los estudios superiores.

En nuestro país la discriminación política y educacional se articulan de manera especial. En menos de un siglo las mujeres han relegado a los hombres en los padrones universitarios; su fuerte son las carreras humanísticas, y entre ellas, la abogacía, que posee una matrícula femenina más numerosa.

La Argentina, que ha sido regida habitualmente por abogados – salvo en períodos militares – ostenta una de las tasas más bajas de mujeres en el ejercicio del poder público y un padrón con preponderancia femenina en el ejercicio privado de la profesión.

Reseña histórica

El matrimonio por amor es una creación de los últimos siglos. El origen de esta institución fue el rapto o la compra de la mujer, considerada como una propiedad, una mercancía que entregaba el padre junto con la dote.

El nacimiento de las niñas era vivido dramáticamente: los judíos se vestían de luto, los griegos dejaban – sin que tal actitud constituyera delito – a la recién nacida en las escalinatas del templo y aquel que quisiera llevarse a la expósito no tenía más que tomarla.

En los primeros siglos del cristianismo la figura matrimonial quedó relegada ante los valores supremos del “celibato y la castidad”; la relación sexual era aceptada sólo en el fin de la procreación y recién en el Concilio de Trento de 1.545 son establecidas las bases del matrimonio del modo semejante a las actuales.

A través de la institución matrimonial, el varón desea asegurarse la perpetuidad y especialmente que el hijo que va a nacer sea realmente suyo.

“Mater semper certa est”, base de nuestro Código Civil, implica que no existen dudas en relación a la certeza de la maternidad y también que cuantos más tabúes se erijan sobre las posibilidades sexuales de mujer, más podrán los hombres confiar que el hijo les pertenece.

Los cinturones de castidad, eran un objeto auxiliar que garantizaban a los señores feudales la legitimidad de su descendencia, y la imposibilidad de infidelidad de parte de sus esposas. Este mismo motivo explica porqué el adulterio ha sido siempre calificado como un delito terrible: los egipcios emparedaban a las adúlteras, los judíos las lapidaban.

En el transcurso del reinado de Augusto el adulterio dejó de considerarse un delito privado – hasta entonces sólo podía decidir la muerte de la adúltera el pater familiae – y pasó a ser público: a partir de entonces cualquiera pudo denunciarlo y el castigo – la muerte - quedó en manos de la comunidad, aún cuando el marido la perdonara.

El adulterio continuó pagándose con la vida en el Fuero Juzgo, y hasta 1.963, un hombre que mataba a su mujer por este motivo en España sólo era castigado con el destierro.

En la Argentina, el adulterio era una figura del Código Penal. Según aquella norma, es suficiente yacer una vez con un hombre para ser adúltera, pero al varón hay que probarle que tenga manceba con casa establecida para que se considere delito.

Otra forma instituida de violencia contra la mujer es la clitoridectomía, operación que consiste en la extirpación de una parte de los labios y el clítoris. A pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que aconsejan terminar con esta práctica, responsable de millones de muertes por infecciones, no sólo no ha sido anulada sino que la padecen millones de mujeres en los países árabes y de África.

La prostitución y la trata de blancas son instituciones en que la mujer queda ubicada como un sujeto pasivo.

Algunas teorías sociológicas sostienen que las primera prostitutas fueron sacerdotisas, pero está demostrado que en realidad estas mujeres eran tomadas de los sectores más plebeyos de la sociedad.

Por su parte, la Iglesia, a través de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, ha justificado la necesidad de este oficio que sólo la misoginia puede llamar el más viejo del mundo olvidando que ese lugar pertenece a la maternidad.

La prostituta queda a merced de uno o varios hombres a cambio de una compensación económica.

La denuncia de cualquier maltrato durante este acto les estará vedada: en caso de ser violada, por ejemplo, la denuncia difícilmente prospere.

La virginidad, o sea la exigencia de que la persona no haya tenido comercio sexual es reclamada sólo a las mujeres; nadie exigirá tal cualidad en un hombre, y esto se vincula con la necesidad de garantías respecto de la paternidad.

En relación con los anticonceptivos, los romanos y los griegos conocían métodos para regular la concepción o para producir el aborto, pero tal saber desapareció con los siglos.

La Iglesia estableció una política represora y las administradoras de estos conocimientos – las brujas – fueron eliminadas.

Se puede considerar que existe una fuerte vinculación entre las políticas sobre anticoncepción y las necesidades demográficas. En nuestro país diversas resoluciones ilustran sobre la relación entre ambos temas.

Las resoluciones judiciales referidas a los anticonceptivos son: el decreto 659/74 del 8 de marzo de 1.974, que ordena el estudio de los bajos índices de crecimiento de población dispuesto por la Secretaría de Estado de Salud Pública; disponía el control total de productos medicinales anticonceptivos y prohibía todo tipo de actividades destinadas al

control de natalidad ordenando, por el contrario, la ejecución de una campaña intensiva a nivel popular que destacara los riesgos de las prácticas anticonceptivas.

Este decreto fuero derogado por el 2274/84 del 27 de marzo de 1.984, que estableció que la secretaría de Desarrollo Humano y Familia promoverá acciones tendientes a fortalecer y desarrollar la familia en su carácter de célula básica de la sociedad.

Por el decreto 3938/78 del 3 de febrero de 1.978 se creó la Comisión Nacional de Política Demográfica, que tiene entre otras metas la de “eliminar las actividades que promueven el control de la natalidad”. Continúa vigente.

En las ciudades griegas el aborto era considerado una práctica normal y constituía una de las bases de una política demográfica equilibrada. Aristóteles pensaba que había que limitar el número de niños; Platón deseaba que abortar fuera obligatoria para la mujer que quedara embarazada después de los 40 años; Sócrates estimaba que entre las funciones de las parteras se contaba la de facilitar el aborto cuando la madre lo deseara.

En Roma, ni la moral ni la legislación se oponían al aborto, y su práctica se hizo frecuente hacia el fin de la República y bajo el Imperio.

Efectuado con el consentimiento de los padres, se consideraba en principio no sancionable. Se entendía que el feto, sin un carácter propio de persona, era sólo una parte del cuerpo de la madre; además se consideraba normal que el pater familiae, que tenía derecho de vida y muerte sobre sus hijos, lo tuviera también sobre el embrión.

El uso de la teoría de la animación inmediata rigió de los orígenes del cristianismo hasta el siglo XII. Desde un principio la Iglesia se opone a la permisividad respecto al aborto que se observa entre los paganos.

La teoría es que el alma entra al feto en el mismo momento de la concepción; un alma que sólo es de Dios, que si no llega al nacimiento y con él al bautismo permanecerá eternamente en el limbo y condenada a no entrar en el cielo.

Dos concilios, el de Elvira (305) y el de Ancira (314), así lo ratifican. Una excepción es Tertuliano quien aboga por el aborto terapéutico cuando éste sea de necesidad.

Otra teoría de la concepción es la hilomórfica, que sostiene que el alma es al cuerpo algo así como la forma de la estatua es a la estatua. Sólo existe una estatua terminada.

Santo Tomás sostenía que lo que no tenía un cuerpo humano real, no podía tener alma.

Tan convencida estaba la Iglesia de esto que en el Concilio de Viena de 1312 prohibió a los fieles bautizar cualquier nacimiento prematuro que no tuviera rasgos humanos.

Esta teoría de la preformación comienza en el siglo XII y sólo la muerte de un feto formado se consideraba homicidio.

En los libros de penitencia de la Edad Media, se dice: “Si una mujer encinta hace perecer su fruto antes de los 45 días, sufre una penitencia de un año; si es al cabo de sesenta días, de tres años; por último, si el niño está animado, debe ser tratada como homicida”.

La Constitutio Criminal Carolina, promulgada por Carlos V en 1532, fija la animación desde el momento en que la madre percibe los movimientos fetales.

La teoría de la animación de basa en la concepción milagrosa de María, según la cual el espíritu de Dios entra inmediatamente en el alma.

Desde fines del siglo XVII y como resultado de los estudios de anatomía y de reproducción se conoce que todo futuro ser está contenido en la primera célula.

Es entonces cuando la teoría de la preformación encaja nuevamente con la de la animación inmediata.

En 1.869, el Papa Pío IX eliminó del Derecho Canónico la distinción entre la animación y otras teorías, considerando el aborto en cualquier momento un delito y castigándolo con la máxima pena celestial: la excomunión.

Los decretos del Santo Oficio de 1.884, 1.889 y 1.895 condenan sucesivamente la craneotomía, otras formas de embriotomía y finalmente el aborto, aún cuando fuera realizado para salvar la vida de la mujer.

El aborto terapéutico no es contemplado en ningún momento. Una respuesta del Santo Oficio al Arzobispado de Cambrai, en 1.895, dictaminó: “ No se puede procurar el aborto para salvar la vida de la madre”.

El Código de Derecho Canónico considera aborto a la expulsión o destrucción de un feto inmaduro, mientras que si es visible se le aplica las penas de homicidio.

La Encíclica Castii Connubi (1.930) se opone también al aborto terapéutico.

En el presente existe una relación evidente entre aborto, población y demografía que se puede indagar a través de las legislaciones de los diferentes países. A partir de 1.950 treinta países enmendaron sus legislaciones restrictivas.

Pero todavía en la mayoría de los países no coinciden la normativa jurídica y la realidad social.

En la actualidad el 9 por ciento de la población total del mundo vive en países donde el aborto está prohibido sin excepciones, y otro 19 por ciento vive en países en que el aborto sólo está permitido para salvar la vida de la mujer embarazada.

Las legislaciones más permisivas admiten los factores sociales como causa para el aborto, por ejemplo, una mala situación económica, otras legislaciones permiten el aborto sin especificar razones, pero dentro de un plazo que generalmente no excede el primer trimestre.

En la Argentina, en la medida que el aborto está prohibido, se realiza de manera clandestina, lo que no permite tener estadística alguna, pero se calcula que muere una mujer cada dos días a causa de las condiciones insalubres en que se realiza.

La violación es el abuso sexual de una mujer por uno o más hombres, valiéndose de la fuerza, amenaza o coerción; es un acto sexual degradante y vil.

En Argentina, según estadísticas actuales, sólo 1 de cada 10 violaciones es denunciada, y alcanzan condena el 10 por ciento de éstas. Está comprobado que en 90 por ciento de los casos el violador conocía previamente a la víctima.

La violación ha sido ejecutada en toda época de represión política; ejemplos de esto fueron los nazis contra las judías, o las fuerzas franquistas moras durante la Guerra Civil española. Las presas políticas argentinas corrieron igual suerte en las cárceles de la dictadura.

Según el Informe de la CONADEP, las mujeres constituyeron el 32 por ciento de los desaparecidos y los testimonios revelan un especial ensañamiento de sus victimarios con ellas.

Doblemente transgresoras, ya que por un lado atacaban los valores tradicionalmente constituidos y por el otro rompían las normas que rigen la condición femenina – dejar el ámbito de lo privado y salir a lo público empuñando un arma - , fueron doblemente castigadas.

El guerrillero era el “enemigo par” de los militares en la guerra subversiva. La guerrillera era a quien se debían aplicar “todos los castigos y humillaciones”.

Esta doble sanción incluyó el intento de disgregar a sus familias, arrebatárles sus hijos.

El objetivo consistía en que fueran eliminadas, arrancadas de la historia como modelo distorsionador de lo que las mujeres “deben” hacer, y se intentó quedaran sus huellas ni

siquiera a través de su descendencia, que en numerosos casos pasó a formar parte de las familias de los represores.

Las guerrilleras en su juventud, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo con su edad madura y las hijas y hermanas de presos o desaparecidos fueron objeto de vejámenes estudiados y especiales por su condición femenina.

Un trabajo sobre la violencia señala que en el 95 por ciento de las denuncias de golpes y lesiones las víctimas son mujeres.

Esta extrema violencia es agravada por varios factores: la falta de refugios para mujeres golpeadas y el temor que tal situación genera en aquellas obligadas a convivir con el agresor – tanto en el caso de concubinatos como de matrimonios legítimos - , y también la política general de los jueces, que consideran este acto como perteneciente a la esfera de la privacidad y la familia y que, por lo tanto, la justicia no debe intervenir.

Esta situación es diferente en otros países: la legislación estadounidense, por ejemplo, obliga inmediatamente a la expulsión del golpeador del hogar conyugal; en Brasil están funcionando 87 comisarias de la mujer, con personal femenino (abogadas, psicólogas, detectives mujeres). Algunas de estas comisarias reciben hasta 500 denuncias por mes.

En nuestro país el promedio de homicidios hombre/mujer ayuda a corroborar que la mujer es sujeto pasivo de homicidios y lesiones.

El derecho laboral padece numerosas omisiones que obstaculizan la equiparación entre las trabajadoras y los trabajadores.

Con respecto al acoso sexual, se considera hostigamiento sexual a cualquier tipo de cercamiento sexual, físico o verbal, no deseado, que surge de la relación laboral y que produzca un ambiente de trabajo hostil, obstruya el empleo o afecte las oportunidades de la persona perseguida.

Otro aspecto más de la violencia en el terreno laboral se expresa en que la mujer gane menos que el hombre por igual trabajo.

Según estadísticas de la OIT, las mujeres perciben el 50 por ciento de salario respecto de los hombres por la realización del mismo trabajo.

En nuestro país la jurisprudencia actual se sustenta los lineamientos del fallo de 1.966 de la Corte Suprema, que deja librada “a la prudente discrecionalidad de los empleadores la apreciación de los méritos de los trabajadores”.

Pagar salario suplementario a los varones no constituye, por lo tanto, una infracción al principio de igualdad de remuneración; con sólo abonar el salario de convenio a las mujeres y a los varones mayores salarios “discrecionalmente”, se tira la borda toda la legislación igualadora.

Si se toma en cuenta que las mujeres argentinas han accedido a la educación secundaria en un 25 por ciento y los hombres en un 13,7 por ciento, y que respecto de la universidad las cifras son de un 8,5 por ciento y 4,1 por ciento respectivamente, no podría adjudicarse este nivel sólo a la mayor capacitación.

Por otra parte, el alto índice de mujeres jefas de hogar indica que, las mujeres no trabajan simplemente para obtener un ingreso supletorio.

Otra manifestación de la violencia se visualiza, también, en que el Estado cargue sobre la cabeza de la mujer la crianza de los futuros ciudadanos que, compulsivamente o no, le obliga a tener.

Desde 1.975, cuando se dictó la ley de jardines maternos zonales, nada se ha hecho por reglamentarla. Tampoco ha sido reglamentado el artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que hace referencia a la creación de guarderías.

Es violencia e imposición sostener que el trabajo femenino es más caro mientras se hace incidir en esos costos el valor del nacimiento y la crianza de los niños.

Otro aspecto a considerar es qué ocurre con los alimentos en caso de separación.

La tenencia de los niños queda en el 95 por ciento de los casos en manos de la madre. El padre se verá protegido por el derecho de visita que, como su nombre lo indica, es un derecho y no una obligación.

En el caso de no pagar alimentos, el progenitor se verá incurso en un delito – el de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar – de casi imposible sanción.

En este ámbito del derecho civil cuesta muchísimo – en este país de cuentapropistas y evasores fiscales – que la madre cobre los alimentos.

En Francia, es Estado paga los alimentos a través de la seguridad social, y luego recupera el dinero cobrándolo por medio de los impuestos del ciudadano transgresor.

Algunas reflexiones

1. La violencia ejercida sobre la mujer, desde tiempos inmemoriales, ha servido para colocarla en una situación de diferenciación con respecto a los hombres.
2. El Derecho ha sido utilizado por los hombres para someter a la mitad de los seres humanos.
3. Atravesadas por la diagonal de lo femenino y sin representar clases sociales, las mujeres desconocen la ley vigente, que no obstante sus falencias podría servir para equilibrar situaciones de indefensión.
4. La ley, ubicada en el mundo de lo público del afuera produce pánico en las mujeres, habitantes de lo privado y del ámbito de sus hogares. Sólo la conocen súbitamente

por situaciones en las que son afectadas: divorcio, alimentos, tenencia, juicios laborales, etc.

5. Una vez difundidas las leyes actuales, por todo tipo de campañas desde el espacio público (ya sea a nivel nacional, provincial o municipal) debemos pasar a la etapa de modificaciones urgentes, tratando de salvar el vacío legislativo en el que aún nos encontramos.
6. Sigue siendo urgente la adaptación real y efectiva de todos los cuerpos legislativos a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, promulgada por la ley 23.179 del 27 de marzo de 1.985 ratificando la Resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Estos cambios en el ordenamiento jurídico, unidos a campañas en lo atinente a educación y cultura, salud, empleo y relaciones laborales, deberán servir para modificar los estereotipos de esta sociedad y mejorar las condiciones de vida de más de la mitad de nuestra población: las mujeres argentinas.

Hablar de familia remite a la experiencia cotidiana y se puede creer que se está frente a un tema simple, natural, conocido, en tanto todos somos miembros de una familia, en diferentes roles.

Sin embargo, la familia y sus relaciones de parentesco han sido y son objeto de análisis de diversas disciplinas – psicología social, antropología, sociología, economía, política – y su consideración provocó polémicas.

En nuestra sociedad sigue siendo polémico profundizar y reactualizar el concepto de familia: su asociación con valores eternos, atemporales e inmutables, entroncados con una concepción religiosa, dificulta la revisión de sus sucesivos acomodamientos a distintas épocas y la del dinamismo de su papel económico – político.

Sobre la diversidad de modelos, la universalidad de la familia se basa en que es una estructura fundante, es decir, que no existe cultura que no tenga alguna forma de familia reconocida y legitimada socialmente.

Por lo tanto, es inherente al orden cultural que el hombre y la mujer instauran sobre la naturaleza.

La familia humana es una superación de la familia biológica (macho – hembra – críos); sus miembros están unidos por una red precisa de derechos y prohibiciones sexuales, por derechos y obligaciones económicas y por lazos afectivos, habitualmente acompañados por lazos legales y religiosos.

El amor romántico como pivote para la conformación de la familia es relativamente reciente en la historia de la humanidad.

Para hacer conceptualizaciones acerca de la familia, no hay que desconocer la variedad de formas que adquiere en la actualidad respondiendo a fenómenos socio – económico – políticos de crisis y transformación.

A pesar de ellos, continúa vigente como discurso hegemónico el modelo de familia nuclear – patriarcal, es decir, la constituida por padre, madre e hijos, bajo la autoridad paterna.

En la necesidad de construir un concepto operativo de familia, las estadísticas y censos plantean dos dimensiones:

- 1) la familia de interacción como conjunto de personas que constituyen una unidad biológica y social (a veces también jurídica),
- 2) la familia de residencia u hogar censal como “personas o conjunto de personas que han sido censadas en una vivienda particular”.

Un hogar o familia de residencia puede abarcar más de una familia, puede contar a personas que son miembros de otras familias y ajenas entre sí.

Sucede que un “censo de hecho”, cada hogar está compuesto por las personas que convivían allí el día del relevamiento; así el censo también puede contabilizar como familia de residencia el hogar unipersonal.

Este concepto es útil a los fines estadísticos de un censo, pero no es suficiente a los fines del estudio de la familia como red vincular.

Otro concepto utilizado es el de la diferencia entre familia nuclear, que hace referencia al modelo nuclear constituido por dos generaciones (padre e hijos) y el de familia extendida que incluye además miembros de otras generaciones y colaterales.

Históricamente, hasta el surgimiento de la sociedad moderna industrializada, la familia extensa constituyó el ámbito donde convivían el marido, la mujer y los hijos junto a otros parientes y agregados; es decir, una estructura de parentesco extendido, donde algunos de sus miembros estaban vinculados por lazos de consanguinidad y otros no.

En ese ámbito se desenvolvía toda la vida de los sujetos, y se desarrollaban las funciones domésticas (lo que hoy se conoce como trabajo doméstico, atención y cuidado de los niños y socialización primaria), y las funciones sociales que incluían el aprendizaje de destrezas y técnicas necesarias para desempeñarse en la producción familiar.

Si un joven pasaba a otra familia para adquirir un oficio, se incorporaba a ella como un miembro más.

Paulatinamente, las transformaciones económico – políticas de la sociedad devienen en la desaparición de la estructura de parentesco como eje básico y las funciones domésticas y sociales van separándose a la par que cambian sus contenidos específicos,

hasta constituir lo que hoy denominamos ámbito privado (en el sentido de doméstico) y ámbito público.

Así, contenidos que anteriormente configuraban las funciones domésticas pasan a desarrollarse en el ámbito público a través de la esfera educativa y la esfera productiva.

Este proceso tiene lugar en los últimos siglos con distinto ritmo en todas las sociedades.

Ambos ámbitos de la cotidianeidad de los sujetos van desarrollando lógicas propias, cuyo eje es la afectividad en el doméstico, y la racionalidad moderna de la inteligencia, el logro de la eficacia y el ejercicio del poder en el público.

Esto tiene sus consecuencias para la familia que, pivoteaba en la mujer, se constituye en el lugar de los sentimientos y de la intimidad.

No se agota en ese análisis su papel en la sociedad; haciendo una lectura económico – política, la familia en esta etapa constituye una unidad de consumo, ya que la producción tiene lugar fuera de ella, en el ámbito público, existiendo una interdependencia, una mutua necesidad.

El trabajo de algunos miembros de la familia, vendido en el mercado, recibe un salario que la familia utiliza para su propia supervivencia, la cual es necesaria a la sociedad en tanto en ella se realiza la reproducción biológica, la reproducción social y la reproducción de la fuerza de trabajo.

Aquí se hace necesario incorporar al género como categoría de análisis, ya que las mujeres – género femenino – tienen asignada la responsabilidad de la reproducción en todas sus formas en el seno de la familia.

“El género es la forma social que adquiere cada sexo una vez que recibe connotaciones específicas en términos de valores y normas”.

Es una adquisición natural que se obtiene a través del proceso de socialización que prepara a los sujetos para que cumplan adecuadamente su rol: socializar para que sean lo que se dice que son por naturaleza.

En razón de esa “naturaleza” se asigna a las mujeres los roles adscriptos de ama de casa, madre, socializadora y mediadora, productora y reproductora de lo cotidiano.

El desempeño “natural” de esos roles y el poder afectivo con el que se inviste a las mujeres no permite visualizar fácilmente el contenido de violencia simbólica que deviene de su cristalización y codificación rigurosa, la cual a su vez constituye el estereotipo del género femenino; es decir, “ser mujer” equivale a cumplir con el estereotipo del género, más allá de las particularidades y potencialidades individuales.

La naturalización de los roles asignados a las mujeres hace invisible la regulación jerárquica de los afectos, del sexo, del uso del dinero, del proceso de toma de decisiones, ocultando las relaciones de poder que se establecen en el interior de la familia, orientado al desarrollo de sutiles (o no tanto) mecanismos de dominio afectivo.

Las relaciones de poder en el seno del grupo familiar, al igual que en cualquier otro grupo social, suponen dominación, y ésta puede estar sostenida por medios tan diversos como la coerción y el castigo (violencia visible) o comportamientos de subordinación entramados en la cotidianidad de los sujetos como forma “natural” de organización de la vida diaria, sobre los cuales sus propios protagonistas no tienen conciencia, o si la tienen, le otorgan consenso precisamente porque son “naturales”.

Esta es la violencia invisible.

La violencia visible o manifiesta es contingente, puede estar presente o no en la familia; de hecho, no es necesaria para constituirla y por el contrario, cuando aparece, entra en

colisión con la racionalidad propia de la esfera familiar basada en el afecto, la tolerancia y el respeto mutuo.

La violencia explícita y contingente contra la mujer en la familia incluye desde el maltrato y el castigo corporal hasta la violación y la muerte.

La violencia invisible, en cambio, es inherente a la constitución misma de la familia; está implícita en los roles adscriptos asignados a la mujer en razón de concepciones “naturalistas” y “esencialistas” de su condición de género, desconociendo así el carácter de construcción cultural que éste reviste.

Este tipo de violencia implícita no es fácilmente identificable, porque está legitimada desde los discursos científicos y filosóficos tradicionales, desde los discursos políticos y religiosos hegemónicos.

Estos discursos, también, contribuyen a conformar la subjetividad femenina, forman parte de la cultura entendida como lugar identificación y de creación de sentido, y en consecuencia, son reproducidos, a su vez, por la mujer en su rol de socializadora y mediadora, en su función de reproductora social de valores y normas que sustentan esta forma de organización social basada en la división sexo – social del trabajo humano.

La división sexual del trabajo tiene raíces biológicas en la reproducción de las especies. A partir de allí, esta especialización natural es trasladada a la cultura, donde se cristaliza en valores e instituciones, se codifica en constelaciones de roles, es decir, deja de ser natural para transformarse en un producto de la cultura.

Meillassoux dice: “Sólo de la parición y del amamantamiento son capaces exclusivamente las mujeres.

Esta especialización natural sólo explicaría el acoplamiento con miras a la reproducción, mientras que las mujeres, a su vez, fecundadas, se bastarían económica y socialmente a sí mismas”.

Nada en la naturaleza explica la división sexual de las tareas, así como tampoco explica instituciones como la conyugalidad, el matrimonio o la filiación paterna. Todas son infligidas a las mujeres por imposición, todas son por lo tanto hechos de cultura, que deben ser explicados y no servir de explicación.

Esta imposición ni se inflige a las mujeres por la coerción manifiesta o violencia explícita, sino a través de la violencia invisible que opera sobre ella.

Esta violencia es invisible porque se asienta en la naturalización de los roles asignados a las mujeres por la cultura, y es violencia porque la fijación en ellos compromete sus opciones individuales y su autonomía personal.

La fijación de los roles adscriptos significa para las mujeres la responsabilidad y ejecución de una serie de tareas conocidas como trabajo doméstico, las cuales se realizan en el ámbito de la unidad familiar y que incluyen: orden y limpieza, cocina, lavado, planchado y costura; procreación, crianza y socialización de los hijos; alimentación y cuidado de la salud, atención de la enfermedad y apoyo psíquico emocional a todos los miembros; compras, organización y administración.

Si bien este trabajo doméstico es un trabajo social en la medida en que satisface una necesidad de la sociedad como es la reproducción presente y futura de la fuerza de trabajo (los hijos constituyen la nueva mano de obra que ingresará en el mercado), está organizado de manera individual y privada.

El trabajo doméstico del ama de casa, su valor y esfuerzo, su contribución al bienestar, no es reconocido como trabajo y no reviste prestigio social; al no ser remunerado no se

contabiliza en la economía y las amas de casa son incluidas así en la categoría de población inactiva.

Las amas de casa son trabajadoras que no conocen salario, descanso, límite de jornada, vacaciones, licencia, jubilación ni seguridad social en forma directa sino a través del hombre de quien dependen.

La dedicación exclusiva a este trabajo impide o dificulta, según los casos, la participación autónoma de las mujeres en los espacios públicos, produciendo otra manifestación de la violencia invisible que es la marginalidad social del ama de casa.

Esta aparece porque el trabajo doméstico aísla a las mujeres en el ámbito de la unidad familiar donde realizan u tarea en forma individual, sin organización cooperativa alguna y casi sin interacción con adultos pares.

Este modo de producción doméstica genera una carencia de conocimiento y/o de utilización de los códigos y convenciones que se manejan en el mundo público, menor acceso a información calificada y dificultades para confrontar las interpretaciones personales de la realidad y formar opinión.

Esta descripción del trabajo doméstico y de los condicionamientos que produce en las amas de casa afecta a todas las mujeres atravesando grupos y clases sociales, en cada uno de los cuales presenta modalidades o formas propias, no por diferentes menos condicionantes, y unidas, a pesar de sus diferencias, por el eje de la violencia invisible subordinante.

No es lo mismo fregar cacerolas que disponer de lavavajillas, como tampoco es igual llevar a un hijo enfermo a la salita de primeros auxilios que al consultorio del pediatra.

Pero lo que sí es constante en ambos casos es la asignación de esas tareas a las mujeres; la concepción de que ellas les corresponde porque están inscriptas en su naturaleza, con la consiguiente falta de reconocimiento en orden al mérito con que se desempeñan.

También es constante la subordinación a esas tareas de toda otra potencialidad individual, inhibiendo procesos de realización multidireccionales, confiscando alternativas para de-construir y re-construir la subjetividad femenina, y expropiando las posibilidades de constituirse en sujeto social autónoma.

El rol de mediadora que se le asigna a la mujer entre sus atribuciones naturales no alcanza por sí sólo a conformar un proceso de individuación, ya que responde más a necesidades de los miembros del grupo familiar o a éste como tal que a adquisiciones o necesidades particulares de cada mujer, o intereses e iniciativas en sí y para sí misma.

El progreso tecnológico, que significa un mejor equipamiento de los hogares, no se traduce en una ruptura de la subordinación de las mujeres a su rol adscripto de ama de casa porque, si bien disponiendo de ese equipamiento disminuye su esfuerzo personal, el tiempo de dedicación es casi igual al de quien no cuenta con él.

A su vez, cuando aumentan los ingresos familiares se modifican la distribución del tiempo dedicado al trabajo doméstico y el contenido del mismo.

En el primer sentido, se le dedica más tiempo a la socialización y a la preparación altamente tecnificada de los niños, lo cual supone el desempeño de un rol de tecnócrata calificada también por parte de la madre.

En cuanto al contenido, se incorporan nuevas actividades tales como la atención de la cuenta bancaria y la administración de recursos más complejos, delegándose en personal de ayuda doméstica remunerado las tareas más desagradables y pesadas.

Aún en este caso la responsabilidad del rol continúa al ama de casa a través de la indicación, supervisión y control de las tareas.

En un contexto socioeconómico de crisis, donde aumenta el trabajo doméstico como estrategia de supervivencia para incrementar los bajos ingresos, los hombres no participan en su realización a pesar de que no son los únicos sostenedores económicos del hogar, y aún cuando dispongan de más tiempo que la mujer por la sub o desocupación. En este caso parecería que la crisis tiende a reforzar los roles tradicionales.

En ninguno de los dos contextos (de desarrollo o de crisis) como tampoco en sectores sociales con desigual nivel de ingresos, los fenómenos expuestos indican la posibilidad de transformación de las pautas culturales vigentes; en el primer caso se recrea el rol para mantener el modelo cultural, y en el segundo se lo refuerza y consolida.

Estos resultados coinciden con el planteo inicial de que la violencia invisible entendida como naturalización de los roles asignados a las mujeres (o como fijación de éstas a sus roles adscriptos, que es su contracara), atraviesa verticalmente la estructura social y permanece, reproducida y profundizada, o adaptándose a los cambios socioeconómicos contextuales.

Hay que destacar la contribución al bienestar y a la generación de riqueza que hacen las amas de casa con su trabajo invisible, no reconocido, ni remunerado, y la relación existente entre el tiempo que insume y el ciclo vital de su familia.

A igualdad de salarios, cuanto mayor es el número de hijos, mayor el tiempo de trabajo doméstico femenino, y cuanto menores son los hijos, mayor es la dedicación de la mujer a su rol adscripto.

Asimismo, según aumenta el nivel de ingresos, disminuye el tiempo y varía la composición de las tareas domésticas, pero, a igualdad de ingresos, el menor tiempo dedicado a ellas supone una disminución en la calidad de vida familiar.

Cuando, a pesar de los obstáculos, las mujeres acceden al ámbito público a través de su inserción en el mercado laboral remunerado, aparece otra dimensión de la violencia invisible: *la doble jornada*.

Esta resulta de agregar a su trabajo asignado por sexo o inherente a su condición femenina, al que está fijada, las tareas que desarrolla en su trabajo adquirido.

En las clases populares la doble jornada conlleva una violencia invisible agudizada sobre las mujeres trabajadoras, ya que éstas no disponen de recursos para contratar a terceros (otras mujeres) como ayuda doméstica remunerada; este agravamiento obedece a su condición de clase, y de ninguna manera a su condición de género, que ya, en estos casos se refuerza el modelo cultural que asigna el trabajo por sexo.

En el ámbito del trabajo adquirido y remunerado se produce otro fenómeno que también es consecuencia de la violencia invisible, que es la discriminación laboral.

La imposibilidad de desligarse de sus obligaciones domésticas (tanto si las realiza personalmente como si las ordena, supervisa y controla) trae aparejada una desigual posición relativa para competir en el mercado de trabajo, la cual se traduce en menores salarios por igual trabajo, puestos menos calificados, horarios imposibles, cargos prohibitivos, ascensos que nunca llegan pese a la igualdad de antecedentes o aún reuniendo mejores condiciones profesionales, es decir, menores posibilidades objetivas de promoción y ascenso.

En las profesiones que son consideradas típicamente femeninas o que en el devenir histórico se han femineizado aparecen menos retribuciones y una desvalorización social

de su desempeño, lo que significa un traslado de la riqueza que producen justificado por el discurso ideológico que las desvaloriza.

Estas consecuencias de la violencia invisible, manifestada de distintos modos en la cotidianidad de las mujeres, no son percibidas desde la sociedad; más aún, rara vez se reconoce el contenido de injusticia que conllevan y que sí se le atribuye a la violencia en sus otras manifestaciones, tanto explícitas (tortura) como implícitas (carencias sociales básicas).

En estos casos, se denuncia la violencia como atentatoria de los derechos humanos pero no así con la violencia que opera sobre las mujeres que también es injusta y lesiona sus derechos humanos.

En la medida en que la conciencia social de la injusticia en todas sus formas avance, aumenta la posibilidad de reconocer en las prácticas sociales establecidas la presencia de esa violencia que además de invisible es injusta, y que afecta a la mitad de los seres humanos, las mujeres.

CONCLUSIONES

La dinámica del poder es una de las características comunes de las diversas formas de la violencia familiar, social e institucional. Como punto de partida para la búsqueda de una definición del problema, resulta insoslayable.

De ahí que no se considera, cuando se habla de violencia, los golpes de puño que un niño pequeño le da a su madre cuando ella lo priva de algo que él quiere. Se considera a la violencia como una situación en la que una persona con más poder abusa de otra con menos poder: la violencia tiende a prevalecer en el entorno de poder.

Los dos ejes de desequilibrio de poder dentro de la familia están dados por el género y por la edad.

El término violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de una familia.

Se denomina relación de abuso a aquella forma de interacción que, enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder, incluye conductas de una de las partes, por acción ó por omisión, ocasionan daño físico y/ ó psicológico a otro miembro de la relación.

Es necesario subrayar que, para poder definir una situación familiar como un caso de violencia familiar, la relación de abuso debe ser crónica, permanente ó periódica. Por lo tanto, no están incluidas en la definición la situaciones de maltrato aisladas, que constituyen la excepción y no la regla dentro de las relaciones familiares.

Cuando se habla de violencia familiar, se hace referencia, pues, a las distintas formas de relación abusiva que caracterizan de modo permanente ó cíclico al vínculo intrafamiliar.

Esta definición, tomada en sentido amplio, muestra que cualquier miembro de a familia, independientemente de su raza, sexo y edad, puede ser agente ó víctima de la relación abusiva.

Sin embargo, las cifras estadísticas son elocuentes: es el adulto masculino quien con más frecuencia utiliza las distintas formas de abuso (físico, sexual ó emocional), y son las mujeres y niños las víctimas más comunes de este abuso.

Si bien existen los casos de hombres maltratados por sus esposas ó compañeras, representan el 2 % del total de casos de adultos víctimas de abuso.

La violencia familiar representa un grave problema social, ya que se estima que alrededor del 50 % de las familias sufre ó ha sufrido alguna forma de violencia.

Comprenderlo como un problema social implica cuestionar la creencia bastante común de lo que sucede dentro del ámbito de una familia es una cuestión absolutamente privada.

Esta afirmación deja de tener validez si se considera que cualquier acto de violencia de una persona contra otra constituye un crimen, independientemente de que ocurra en la calle ó dentro de cuatro paredes de una casa.

Pero, además, hay otras razones para dejar de considerarlo como un “problema privado”:

Las personas sometidas a situaciones crónicas de violencia dentro del hogar presentan una debilitación gradual de sus defensas físicas y psicológicas, lo cual se traduce en un incremento de los problemas de salud (enfermedades psicosomáticas, depresión, etcétera).

También se registra una marcada disminución en el rendimiento laboral (ausentismo, dificultades de concentración, etcétera).

Los niños y adolescentes, que son víctimas ó testigos de la violencia intrafamiliar, frecuentemente presentan trastornos de conducta escolar y dificultades en el aprendizaje.

Los niños, que aprenden en su hogar modelos de relación violentos, tienden a reproducirlos en sus futuras relaciones, perpetuando así el problema.

Un alto porcentaje de menores con conductas delictivas proviene de hogares donde han sido víctimas ó testigos de violencia crónica.

Un alto porcentaje de los asesinatos y lesiones graves ocurridos entre miembros de una familia son el desenlace de situaciones crónicas de violencia doméstica.

Esta son algunas de las razones por las cuales el problema de la violencia familiar no puede seguir siendo entendido como una “cuestión privada”, ya que la salud, la educación, el trabajo, la seguridad son cuestiones públicas y comunitarias.

Por lo tanto, un factor potencialmente perturbador para todas esas áreas debe ser considerado como un problema que afecta a todos, en cuanto integrantes de una comunidad.

A partir del momento en que el maltrato y la violencia dentro de la familia fueron “descubiertos” y definidos como graves problemas sociales, se han llevado a cabo, en diferentes países, numerosas investigaciones tendientes a conocer mejor el fenómeno. La mayoría de ellas pronto alcanzaron coincidencias en lo que respecta a QUÉ y al CÓMO:

Se definió la relación de abuso como toda conducta que, por acción ó por omisión, ocasionan daño físico y/ ó psicológico a otro miembro de la familia.

Se estableció que las víctimas más frecuentes de abuso intrafamiliar son las mujeres, los niños y los ancianos.

Se describieron las distintas formas de abuso: físico, psicológico, sexual.

Se describieron las secuelas físicas y psicológicas que presentan quienes han sido víctimas de abuso.

Si se consulta abundante bibliografía existente sobre el problema de la violencia familiar, la mayoría de los autores coincide ampliamente en la descripción del fenómeno.

La dificultad comienza cuando esos mismos investigadores se formulan la pregunta del porqué, es decir, cuando buscan una explicación al fenómeno.

En los últimos 20 años, diversas teorías han intentado determinar las causas de la violencia familiar. Durante mucho tiempo, la psicopatología fue el principal recurso explicativo utilizado. La hipótesis era que las personas que ejercen violencia sobre un miembro de la familia sufren algún tipo de trastorno mental.

Ese punto de vista es muy raro de encontrar en la literatura especializada actual, a la luz de las investigaciones realizadas.

La mayoría de los autores señalan que, si bien algunos agresores padecen efectivamente trastornos psicopatológicos, la proporción de enfermos mentales no es mayor que entre la población en general.

Un segundo elemento explicativo que se ha intentado utilizar en el campo de la violencia familiar es el alcoholismo y el uso de drogas.

Durante cierto tiempo, se asociaron insistentemente ambos problemas (adicción y violencia), por la simple razón de que eran los casos más accesibles para la investigación clínica y sociológica.

Por estudios más profundos demostraron que el abuso de sustancias, más que causar violencia, contribuye a facilitar ó se transforma en una excusa atenuante. El alcohol ó las drogas tienen la propiedad de suprimir las inhibiciones; por lo tanto, se relacionan con la envergadura, el momento y la forma de la violencia, pero no con la predisposición a recurrir a ella.

Una hipótesis que ha alcanzado gran popularidad es aquella que afirma que la violencia es provocada por la víctima.

Esta hipótesis cobra cuerpo en dos tendencias principales: una es la teoría del masoquismo; la otra es la teoría de la familia disfuncional.

En ambos casos, con elementos provenientes de distintos marcos conceptuales, se consigue un mismo resultado: culpar a la víctima.

En los últimos años, el incremento del contacto de los teóricos con grandes cantidades de casos de violencia familiar permitió que muchos de ellos fueran revisando críticamente esta hipótesis.

Los criterios mencionados se derivan de lo que genéricamente podemos llamar “modelo médico”. Éste es un modelo que busca cuál es el “microbio” que explique las causas de la

violencia familiar. Este “microbio” puede ser el alcohol, la locura ó el comportamiento de la víctima.

La inadecuación de este modelo radica en el hecho de aplicar una metáfora biológica a un problema social.

Tanto la explicación según el modelo médico, como la explicación según el modelo psicológico resultan reduccionistas y tienden a simplificar un fenómeno social de extraordinaria complejidad, atravesando por innumerables mitos y estereotipos culturales, que dificultan su adecuada comprensión.

Desde la perspectiva del modelo sociológico, se ha intentado dar respuestas al interrogante acerca de las causas de la violencia familiar, recurriendo a variables tales como clase social, estrés económico, distribución del poder dentro de la sociedad y dentro de la familia, violencia institucional y política, etcétera.

Se puede considerar a las anteriores como respuestas parciales a la pregunta de la cual se partió. No se puede decir que alguno de los factores analizados esté desvinculado por completo del fenómeno de la violencia en la familia, pero ninguno de ellos por sí mismos puede explicar la totalidad del fenómeno.

Es por eso que surge la necesidad de recurrir a un modelo que permita comprender en su especificidad el problema del maltrato y la violencia familiar, sin intentar reducirlo a esquemas previstos ya conocidos.

Hay un modelo que postula que la realidad familiar, la realidad social y la cultura pueden entenderse organizadas como un todo articulado, como un sistema compuesto por diferentes subsistemas que se articulan entre sí de manera dinámica.

La Asamblea Mundial d la Salud en 1996 declara la problemática de la violencia como un importante tema de salud pública en todo el mundo.

Desde ese momento, la violencia se ha convertido en un problema actual para las políticas públicas dado el incremento de la violencia en todas sus formas, el número de víctimas y la magnitud de las secuelas que produce.

Este fuerte incremento se inició en los años 80, prioritariamente en las grandes ciudades, coincidiendo con el empeoramiento de la situación socio-económica de América Latina, la irrupción del tráfico y el consumo de drogas, el uso abusivo del alcohol y el desempleo, la desigualdad.

Podríamos decir que estas características inician un período donde se naturaliza al decir de P. Bourdieu la Cultura de la Violencia. Día a día se legitima la fuerza como medio para resolver frustraciones y diferencias y esta legitimidad del poder represivo y abusivo de la fuerza en los altos niveles de poder económico y político, generan prototipos de modelos violentos, fácilmente trasladables a los comportamientos de la comunidad popular.

La violencia alcanza hoy dimensiones cada vez más importantes en las urbes del mundo y prioritariamente en el continente latinoamericano y representa un riesgo para la vida y la salud de las personas, que afecta el funcionamiento del sistema de atención de la salud.

Es precisamente en estos espacios en donde las características del proceso de organización desigual, reproduce una diversa calidad de vida en la población, y es esta sociedad de la exclusión (Pilar Ubilla, 2002) la que genera una verdadera expansión de violencias, un mundo de todos contra todos; una sociedad competitiva y autoritaria que niega la diversidad.

La mortalidad por causas asociadas a la violencia, es según las estadísticas, la responsable de los índices crecientes de mortalidad general y de los altos porcentajes de años de vida perdidos por esta causa.

Nos referimos en este punto no sólo a las vidas perdidas por accidentes y homicidios sino las que se realizan por el alto número de suicidios en incremento desde 1990, el número de homicidios creció en un 40% en la década del 90.

Hay 30 homicidios por cada 100.000 habitantes por año (6 veces la tasa de criminalidad moderada de países como Noruega, Suecia, Holanda y otros. América Latina es la segunda área geográfica con mayor criminalidad del mundo (el Sahara africano es la primera)

Podemos plantearnos de que manera las políticas públicas pueden promover la reversión de las políticas de juventud en cuanto al tema de la violencia. Con tal propósito hago mención a los aspectos desarrollados por Abad Miguel (2002) mencionando los siguientes objetivos.

En primer lugar, focalizar y especializar la oferta en los y las jóvenes y adolescentes con condiciones de integración social menos establecidas y sólidas. Siempre que sea posible, especialmente en los primeros contactos con el grupo destinatario de la oferta, ir “donde están” los jóvenes” (calles, escuelas, parques, etc.) en lugar de centralizar el servicio en lugares no reconocidos como escenario de jóvenes.

Partir de las capacidades de los mismos jóvenes, aunque exija un esfuerzo por identificar y evidenciar, incluso para los mismos jóvenes, siquiera un nivel mínimo en el desarrollo de distintas habilidades y talentos.

Ayudar a que los jóvenes construyan demandas propias, mostrando especial cuidado de discernir aquellas propuestas que efectúen por “atraer” la oferta del municipio o de la ONG.

Conjuntamente colaborar en que los jóvenes vayan cualificando su demanda: no contentarse con las primeras respuestas, sino procurar que vayan reflexionando y haciendo

más concretos sus intereses y necesidades a la par que van enriqueciendo y profundizando su capacidad de análisis crítico de su situación y la de el entorno.

Disponer de información para los y las jóvenes, así como de los medios adecuados para transmitirla, sobre distintas oportunidades.